



FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

El Interés Superior del Niño y Adolescente con respecto al Delito de Omisión
a la Asistencia Familiar en el Distrito de Puente Piedra, 2017

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Abogada

AUTORA:

Deysi Palmira Mora Otolea ([ORCID.org/0000-0003-0241-9510](https://orcid.org/0000-0003-0241-9510))

ASESORES:

Dr. José Jorge Rodríguez Figueroa (Temático) ([ORCID.org/0000-0002-0265-9226](https://orcid.org/0000-0002-0265-9226))

Dr. Mariano Rodolfo Salas Quispe (Temático) ([ORCID.org/0000-0003-1587-546X](https://orcid.org/0000-0003-1587-546X))

Dr. Eleazar Armando Flores Medina (Metodológico) ([ORCID.org/0000-0003-0917-9601](https://orcid.org/0000-0003-0917-9601))

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derechos de Familia, Derechos Reales, Contratos y Responsabilidad Civil Contractual y
Extracontractual y resolución de Conflictos.

LIMA - PERÚ

2018

Dedicatoria

A Dios por su bendición de concederme vida, sabiduría y fortaleza; a mi adorada hija quien es mi mayor motivación y fuerza, ante todo; a mis padres por motivarme, apoyarme y confiar en mí.

Agradecimiento

Agradezco especialmente a mis amados padres por motivarme y brindarme su apoyo incondicional.

A mi esposo por comprenderme, motivarme y confiar en mí en el trayecto de la culminación de la carrera de Derecho.

A mis docentes universitarios quienes me enseñaron y nutrieron de conocimientos de la carrera profesional de Derecho.

A mis asesores de Tesis quienes con sus conocimientos, experiencia y aportes me guiaron desde el inicio hasta la culminación, en el camino de esta presente y valiosa tesis.

Índice

Dedicatoria	II
Agradecimiento	III
Índice.....	VII
Resumen.....	VIII
Abstract	IX
I. Introducción	10
1.1. Marco teórico	19
1.2. Formulación del problema	40
1.3. Justificación del Estudio	40
1.4. Objetivos del trabajo	41
II. Método	43
2.1. Diseño de Investigación	43
2.2. Método de estudio	44
2.3. Rigor científico.....	45
2.4. Análisis cualitativo	45
2.5. Aspectos éticos	46
III. Descripción de resultados	52
IV. Discusión	85
V. Conclusiones	91
VI. Recomendaciones	97
Referencias	98
Anexos	104

Resumen

En la presente investigación se analiza la actual regulación del delito de omisión a la asistencia familiar, mediante el cual se encuentra establecido en el Artículo 149° del Código Penal peruano, con el fin de establecer si actualmente protege el interés superior del niño y adolescente, derecho normado en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los niños y adolescentes. En ese sentido, se estudia la naturaleza jurídica del delito de omisión a la asistencia familiar por los menores, la protección del interés superior del niño utilizada en su redacción, así como la forma como se ha admitido dicha protección, lo que consiente establecer si, en realidad, las normas legales protegen conforme está tipificado en los instrumentos nacionales e internacionales.

Palabras Claves: Delito de omisión, asistencia familiar, interés superior, protección de menores, niños y adolescentes.

Abstract

In the present investigation the current regulation of the crime of omission to family assistance is analyzed, through which it is established in article 149 of the Peruvian penal code, in order to establish whether it currently protects the best interest of the child and adolescent, right regulated in article IX of the Preliminary Title of the Code for children and adolescents. In this sense, the legal nature of the offense of omission of family assistance by minors, the protection of the best interest of the child used in its drafting, as well as the way in which such protection has been admitted is studied, which allows establishing whether, in fact, legal norms protect as typified in national and international instruments.

Keywords: Offense of omission, family assistance, higher interest, protection of minors, children and adolescents.

I. Introducción

Aproximación a la temática

La presente investigación refiere a los orígenes de la no precaución del nivel superior referente al delito de omisión del soporte familiar en adolescentes y niños del distrito de Puente Piedra, en la ciudad de Lima.

El cual, proporcionando indiviso lo apropiado para el apoyo del damnificado. Además, cuando se da el alejamiento y ruptura en la relación de parejas, con su capacidad total de la falta de compromiso al punto de romper su unión familiar.

Respecto al contenido anterior al separarse de su pareja, conviviente o pareja, ello tendría un consecuente de los comportamientos más inhumanos en los padres, esto es, en no pasar la pensión alimenticia a sus retoños, sin cumplir con sus deberes alimenticios y demás requerimientos para los hijos pequeños.

Por tal motivo, el agraviado solicita una obligación alimenticia para que pueda cumplir con un aporte económico, para que se evite carencias y penumbras en el desarrollo de la niñez, los cuales le darán el soporte en el aspecto alimenticio, educativo, recreacional, salud y un techo donde vivir. Además, este trabajo, pretende generar vínculos de los padres e hijos, para que los adultos identifiquen sus deberes y responsabilidades como parte de un derecho que se ponga en acción a favor de ellos (as).

De modo que, aquellas personas que actúan de esta manera siendo hombres y mujeres se dice que son seres humanos que no toman en cuenta los valores, son personas que aún no maduran, que han convivido en hogares descompuestos en la que han seguido el mal comportamiento de convivencia, actos delictivos, el consumo de drogas, el pandillaje y otros.

Por tanto, es allí como sentían que era una carga que intervenía en el ámbito económico de sus menores hijos (as), escapando de dichas responsabilidades, al no cubrir económicamente la subsistencia para darles una vida digna desarrollándose personas de provecho a la sociedad.

De tal manera el juez ha indicado una prórroga a la pena, brindándole facilidades para fijar un acuerdo de pago, que es imputado por el fiscal indicando que habrá una suspensión si cumple de modo favorable., el ente encargado es el Ministerio Público.

Si bien es cierto la irresponsabilidad de un padre en el distrito de Puente Piedra no es el problema eventual al cual se está direccionando a desarrollar en el presente trabajo, sino que dicha irresponsabilidad deja en un total desamparo a un menor que necesariamente no tiene ni la más mínima idea del porque su papa se fue y abandono a su madre y consecuentemente ocasiono la ruptura del vínculo familiar.

Se tiene que el niño tiene ante todo el resguardo de la ley a ser atendido en cuanto a sus necesidades básicas en proporcionalidad a la capacidad económica del padre, y a la orden de la paga en su alimentación que el juez de paz letrado en primera instancia pueda dictar a favor del niño este luego consentida, o en su defecto ejecutoriada, en cuanto a su incumplimiento posterior a los tres días de notificado el padre demandado.

Se establece medidas y Cauciones procesales para la deferencia fundamental a favor del niño según el artículo 1, dicha ley conforme se menciona en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y con observancia se presupone una observancia rigurosa de presupuestos antes de dicho proceso penal de negligencia de ayuda en la familia.

Con respecto a los derechos de la alimentación de los hijos, aplica si son menores de edad y mayores si fuese el caso que estudian. Puesto que en su artículo 2, se habla del Beneficio Superior del niño en concreto es un derecho primordial.

Dado que, este artículo, es muy valorativo en cuanto a su preocupación hacia los menores para los fines de hacer valer sus derechos y deberes a una vida digna, y la Ley N° 28542 Ley de Fortalecimiento de la Familia, puesto que por lo entendido desde una perspectiva, generalmente moral y ético el cuidado, tutela y velo del alimentista debe ser atentado, que los cuidados y los valores y enseñanzas inculcados por la madre en la tenencia que esta ejerza sobre su hijo.

Es comprendido como una de las formas de poder brindar los alimentos a favor de su hijo, siendo que el padre, que se encuentre y goce de una salud vigorosa y placentera, ejerza su obligación a su menor hijo (a), atendiendo la proporcionalidad del estado de

necesidad en la que este se encuentre concurriendo, puesto que si bien la ley prescribe desde que oportunidad se presta la pensión de alimentos a favor del niño.

Por lo que otro de los problemas no surge con el mismo número de infractores sino más bien en la forma de la ejecución de la sentencia penal, es decir, cuando la prórroga de la pena detenida, tipificado en el Art. N° 59 del Código Penal en el delito de negligencia mencionado en el Art. 149 del mismo cuerpo preceptivo, sirva sino para el favorecimiento del denunciado en su evasión al cumplimiento como padre de su menor hijo.

De esa manera la ley estipula un evidente vacío legal al deslindarse de entre sus articulados la posibilidad de que el denunciado por omisión de asistencia familiar pueda acogerse a la terminación anticipada y así pueda establecerse a su favor unas reglas de conductas con las que bien podría en el mejor de los casos cumplirla, y si no caso contrario, desatender nuevamente al niño y seguir simplemente afectando su desarrollo.

[...] En el momento de prueba si el condenado tiene conductas inadecuadas, es el juez quien podrá sancionar en un periodo fijo [...], (Gaceta Jurídica, 2005, Comentarios al Código Procesal Civil) Lo cual no es otra cosa, sino la extensión de la vulneración en sus derechos fundamentales del niño y/u del adolescente con respecto a los alimentos que le corresponden por Ley.

Puesto que si bien se tiene por establecido que existe una innumerable y devastadora tasa de irresponsables que buscan evadir su obligación como padres, lo que no deja de desnaturalizarse es la garrafal consecuencia que ello acarrea lo que es la vulneración del derecho de alimentos con respecto a dichos alimentistas niños y adolescentes. Como un adicional a todo lo detallado.

De tal forma se suspende la ejecución de la pena; otorgándole al revelado una sucesión de disposiciones para el cumplimiento de pago en alimentos, dichos pagos que no llegan a cumplir, lo que evidencia es una indeterminada lista de facilidades que la ley le otorga al padre de forma temeraria busca evadir su responsabilidad como padre para con su menor hijo alimentista.

Por otro lado, según las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el año 2017 la población penal por el delito de informalidad de la necesidad alimentaria es

de 2171, de los cuales seiscientos cincuenta y nueve (659) tienen situación de procesados y mil quinientos doce (1512) ya tienen fallo.

De modo que lo más alarmante es que el delito de no efectuar el pago de la contraprestación alimenticia asciende año tras año, lo que ostenta un peligro social tanto para la comunidad como para los mismos niños de forma agravada que necesitan esencialmente de los cuidados básicos que se omiten por el incumplimiento de dichos padres irresponsables.

Sin embargo, afectó los derechos del menor, ¿el alimentista estará realmente encuentra por satisfecho sus necesidades cuando se le brindan dichas facilidades al padre imputado?. La manera de lograr que el mandamiento judicial sea respetado y cuando la fiscalía requiere la revocatoria de la Suspensión de la pena al Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte – Puente Piedra.

Dicho Juzgado no debe conceder plazos por falta de cumplimiento en la liquidación alimenticia por cuanto lastima a los niños y adolescentes, al menos no siempre y cuando que se evidencie que se emplea como táctica o mecanismo empleado por el denunciado para que este pueda evadir su obligación como padre para con su menor hijo dependiente de dicho derecho de alimentos.

Cabe resaltar que la Constitución Política del Estado señala en su artículo 2°, inciso 24, literal “C”, caracterizando a una de las principales excusas de las cuales hacen empleo estos padres incumplidos, mediante la defensa de abogados que ejercen mediante argucias y ardid abogados que rescinden de la errónea interpretación del Derecho a la Independencia y Seguridad.

Como un medio por el cual no pueda cumplirse con los alimentos respecto al hijo de este, toda vez que se observan escritos y contestaciones de demandas en la que los padres demandados alegan que “no hay prisión por deudas. Ya que tal afirmación es un hecho paupérrimo donde la orden judicial sanciona por incumplimiento.

Respecto a las prórrogas dictadas por el Juez prácticamente son beneficios apremiados al condenado por incumplimiento de alimentos, empero el artículo 59° del

Código Penal dice que existe un tiempo de suspensión por parte del juez, quien evaluará la suspensión de su sanción.

Bajo estos términos de la norma, se ha dado este problema al ser consecuente del cual observe en las Fiscalías Penales Provinciales Mixtas de Puente Piedra, cuando la fiscalía pide una preparatoria en Lima Norte por la revocación de la suspensión de la pena.

Siendo ello así se tiene que la evasión de la responsabilidad de los padres denunciados por omisión de asistencia familiar es una problemática, que ha venido siendo estudiada por jurisconsultos y tratadistas del derecho quienes indagaron y dieron nacimiento a teorías sobre el tema en cuestión, sin discutir o mencionar la desprotección que se padece por parte de los menores desamparados por el derecho de alimentos.

Según la investigación seguida por Quispe (2017), cuya tesis está referida a discriminar el Interés Superior del niño frente al incumplimiento del deber alimentario”, siendo que dicho autor refiere que:

Se debe deducir que la obligación a proporcionar alimentos se inicia cuando se ocurre incumplimiento por parte de uno de los conyugues pero que en realidad se aprecia que uno de los problemas más continuas es al momento de la separación de los esposos, es el tema de la falta de pagos en su alimentación.

De lo acotado por el autor se entiende, que el atraso en atender dichos casos se da en tres supuestos; primero, se inicia cuando el ineludible no procesa la necesidad que le corresponde; segundo, se inicia en el transcurso del proceso el obligado escusa muchas cosas para que pueda definir de forma adecuada la pretensión de alimentos, de tal forma se da cuando el juzgador no aplica todas las formas adecuadas.

De lo que de dicho desglose se puede concluir que el juez debe velar por establecer la pensión de alimentos a miras de establecer a favor del menor de edad alimentista una vida adecuada y un desarrollo digno y apto para su subsistencia, lo cual no se va a efectivizar puesto que los magistrados que estudian y evalúan los casos de derechos a pensión de alimentos están supeditados según el estudio realizado.

El autor para evaluar en cuestión la prueba si es más que el mismo demandado puede en la etapa postularía del proceso hacer empleo de una declaración jurada que puede ser o

bien legalizada y notariada por notario público a efectos de constatar la veracidad de los hechos expuestos en dicha documentación, o solo ser presentada y adjuntada al proceso mediante la modelo una declaración jurada simple.

En ese mismo sentido se tiene la investigación realizada por Aliaga (2013) tesis destinada a demostrar el propósito de la falta de cumplimiento en la alimentación por parte de los padres que no ejercen una paternidad responsable puesto que menciona lo siguiente:

[...] De acuerdo con los antepasados, en la actualidad la necesidad generaliza que los niños de su edad requieren protección, amor y un direccionamiento para un buen desarrollo [...] (p.63).

De lo que se tiene que la autora luego de una rigurosa investigación sobre el concepto del porque es que se llega a tal garrafal omisión por la falta de sus obligaciones alimenticias por parte de sus progenitores, llegando al siguiente análisis:

[...] Los niños necesitan protección, amor y cuidados para una mejor proyección de vida, donde sus padres sean responsables a sus requerimientos para convertirse en independientes [...]. (p.94).

Así también se tiene lo analizado en la investigación realizada por Olivari (2016) en cuanto se refiera a las mediciones adoptadas a efectos de cumplimiento de la obligación de alimentos menciona lo siguiente:

La rapidez de la sanción existe, pero lamentablemente no se acata como debería para que se cumpla como corresponda. El inciso 6 del Artículo 648° del Código Procesal Civil dispone que, al referirse del cumplimiento de los alimentos debe ser hasta el 70% del total de los ingresos, de las reducciones de acuerdo con la ley, la frase total de los ingresos (p. 181).

De lo mencionado anteriormente se entiende que las remuneraciones son libres por ser un colaborador independiente que cuente con sueldo a favor del niño.

El trabajo realizado por la referida estudiosa del derecho cabe destacar que lo que refiere es que la medida más adecuada a efectos de poder avalar el cumplimiento de la dictamen y así también de la obligación de la prestación de alimenta favor del niño

alimentista, es mediante el entroncamiento de la remuneración en hasta un setenta por ciento los cuales son destinados a ser retenidos para satisfacer las necesidades del menor alimentistas.

Por otro parte, se tiene a Gutiérrez (2017) en su investigación efectivizada en su tesis que hace referencia a los tramites por los cuales se alcanza el proceso penal de negligencia de ayuda familiar mediante el proceso civil de pensión de alimentos, en donde el experto nos señala que:

El código procesal penal de la sede judicial de Ica, brinda diversas alternativas para que los padres que no cumplan paguen a sus devengados (p. 64).

Se tiene conocimiento que la secretaria de los actuados que obran en las copias certificadas para ser remitidas al Ministerio Público, donde el representante del Ministerio, luego de revisar el caso, se hace de conocimiento a ambas partes exhortándoles su obligación, con la indicación para el abono de las pensiones alimentarias devengadas, al no ser cumplido, el representante del Ministerio Público derivara los actuados al Juzgado pertinente para su procedimiento a efectos de dar cumplimiento a la denuncia por omisión de alimentos.

Por último, se tiene dentro de las investigaciones nacionales más pertinentes, está la realizada por Condori (2011), en cuanto a la eficacia que demuestra el proceso penal de desatención de ayuda familiar referente al nivel de vulnerabilidad que la ley le otorga a los adolescentes y niños en el Perú, siendo que el autor nos dice que;

El Ministerio Público tiene un 60% de carga procesal, por lo cual deben seguir velando por el cuidado y desarrollo de los hijos (as) (p. 152).

Por lo que bien el autor da a entender que por lo que se entiende de los procesos instaurados sobre omisión de asistencia familiar el ministerio público tiene una ardua tarea puesto que no son pocos los casos que se presentan en los que un padre desea deslindarse de su responsabilidad con respecto a sus hijos

Teniendo en cuenta en el presente apartado se encuentra necesario destacar las investigaciones realizadas por Yanes (2016) que precisa referente al amparo legal del utilidad a favor del niño, que se adopta en Ecuador, siendo que la autora, manifiesta que:

En Ecuador existe un gran interés por el cuidado del niño (a), según su artículo 44 de su Constitución, que pretende tener una atención rápida a su interés (p. 163).

De lo acotado, se desprende que la abogada ecuatoriana explica que en Ecuador se regula el amparo del cuidado del niño (a), para favorecer sus derechos.

Así también se tiene a Flores et al., (2012) que investigo acerca de la regulación de la importancia del interés superior del niño, y en su investigación de grado, sostienen que sobre todo debe prevalecer la priorización de vivir de forma armoniosa, siempre en búsqueda del interés común para el niño.

Por consiguiente, el analizar de los requerimientos de los niños a tiempo con carácter de urgencia hará que se forme una mejor familia.

La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 2 y 3, se comprometen a cuidar y velar por el cumplimiento de las leyes (p.91).

Más en ese orden de ideas se puede destacar que los autores en su investigación dedujeron que:

No obstante, se debe priorizar el cumplimiento de los alimentos a los menores debido a que son el núcleo familiar y es el gobierno quien debe garantizar ello.

Así también se tiene la investigación realizada por Aguirre (2015), en referencia a lo que se debe de comprender dentro de sus derechos, la que manifiesta que, cuando no se respetan los derechos a desarrollarse bien, en un ámbito familiar, social, escolar con pase a una alimentación correcta, educación, salud deberes que aplica el Estado con los sujetos que conviven en él.

De lo acotado se entiende que, los derechos corresponden a los niños y adolescentes no se respetan conforme el Estado lo expresa, porque hay familias separadas, como padres e hijos, madres e hijos e incluso nietos y abuelos entre otros miembros familiares, por cuanto da al inicio de problemas donde los hijos se desarrollen en una sociedad de supervivencia.

El autor concluye, que si la constitución de la Republica propone que los niños tienen derechos, y que las políticas públicas eviten el peligro.

Por lo cual es necesario destacar la averiguación llevada a cabo por Maris (2006), la proporcionalidad de la pensión alimenticia en regulación al estado de la necesidad que padece en determinada oportunidad al alimentista menor de edad, afirmando la autora que:

Se tienen que aplicar de una manera taxativa la obligación asistencial, dado que solo será la “ayuda de los capitales necesarios para su manutención” de acuerdo con el artículo 1 y 2 de la norma (p.146).

La autora concluyó que debe haber sanciones drásticas, debido a que los artículos 1 y 2, busca satisfacer los requerimientos primordiales para los menores y mayores de edad según dicho artículo.

Por último, dentro del apartado de tesis internacionales se tiene la tesis realizada por la abogada Patzi (2011), quien señala que:

[...] Si bien es cierto la asistencia familiar está establecida por la ley actual y que debe contestar a quienes recurra a dicha norma, en dicho caso el beneficiario, el cual requiere de más cuidado desde su pensamiento hasta que cumpla los 18 años. estableciendo dos tipologías de sanciones al incumplimiento de la asistencia familiar [...] (p.86).

Existen casos en los obligados que cuentan con una orden de apremio, se les priva de la libertad, pasa 6 meses pese a ello se le brinda la libertad con solo el compromiso que juramenta de cumplir con su obligación, y en caso de no cumplirla el beneficiario tendrá que esperar 6 meses para poder solicitar una nueva orden de apremio.

De lo que se puede apreciar que la autora de forma sencilla nos explica que la familia debe de ser considerada como el ente o institución con mayor privilegio ante el mundo de derecho, supuesto que la presente autora concuerda dado que la familia es considerada como el pilar de la sociedad ello en relación con lo regulado en el código civil en su libro.

Siendo que la autora de dicha investigación menciona que Código de Familia se aprecia que la participación familiar debe resguardar con lo requerido que pide el concurrido para su alimentación, educación, habitación, vestimenta y un seguro médico, pero viendo la como realmente trabajan los juzgados de la familia, por lo que la insensibilidad y frialdad de las sentencias expeditadas están dadas por los jueces.

Los juzgados competentes para evaluar estos temas no solo son un conflicto a nivel nacional por lo que debe tomarse esta cuestión de la manera más delicada posible puesto que se trata del futuro próspero de un niño el cual no se llega a realizar por la realidad judicial que se evidencia en la actualidad.

1.1. Marco teórico

Con respecto a la primera categoría materia de investigación se tiene lo considerado por

Lo que mejor le convenga al niño como un principio relevante jurídico que ha sido consignado en la Convención sobre los Derechos del Niño, correspondiente a la normativa de cumplimiento imperativo.

Cillero (1999), menciona que, los intereses del menor son limitados, obligado respecto a las diversas autoridades. Por lo cual el Comité de Naciones Unidas decretó un principio que dirija en dicha convención.

Es por ello, que la jerarquía de principios evita la discriminación en toda índole en contra la mujer, para hacer prevalecer los derechos por igual del hombre y la mujer; en especial con sus menores hijos.

Dicha conceptualización se complementa con lo expuesto por Placido (2015), el cual señala que:

El estremo del interés superior del niño se compone en una orden dirigida al Estado para reconocer sus derechos en cualquier situación conflictiva, de las que el Estado debe limitar derechos individuales. De tal manera, el principio configuraría normativo concreto dado que ciertos derechos van a favor del derecho individual y/o interés combinado.

El niño disfrutará de seguridad contando con beneficios y oportunidades en los servicios que fuese necesario, ello le permite un buen desarrollo en el aspecto físico, moral, espiritual u otros.

En ese sentido el Interés preferente del niño o adolescente, Dávila y Naya (2013), nos señalan que:

[...] Tal principio es uno de los más relevantes ya que es visto en mayores críticas buenas y malas, definido que elevados estudios ha suscitado de lo que engloba la Convención respecto a los Derechos. Dado que deduce que el beneficio supremo del menor no se encuentra en los pactos internacionales del año 1966 [...] (Pág. 76).

Lo que dan a entender los precitados autores y cada uno de ellos con respecto al beneficio supremo del niño es que se busca buenas razones mediante el régimen, a través de la regulación del derecho de familia, específicamente con respecto a la pensión de su alimentación a beneficio del menor, así con la omisión de asistencia familiar al incumplimiento renuente del padre, es que estos últimos se hagan cargo de su obligación como padres respecto de los primeros puesto que la ley prevalece su derecho a una pensión de alimentos como una presunción iure de iure ya que de por si se presupone que los menores de edad prescitan un estado de necesidad tácito.

Dentro de este apartado es resaltante señalar lo que refieren Del Pilar, Salas, Martin, Díaz (2013), con respecto a dicho cuerpo normativo menciona:

[...] El carácter numérico de los menores de edad afronta, diversos contenidos, la seguridad de ellos toda vez que refiere que tenga en el rango de edad de 12 y 18 años. [...] (p. 254).

Por consiguiente, los autores, mencionan el artículo IX del código de los menores de edad, donde se tener en consideración los beneficios de los hijos, que tengan el rango de años de 12 a 18 años, como parte del respeto en sus principios.

Según Boccio (2015), manifiesta que la toma de decisión por parte de los organismos públicos debe velar por interés fundamental basándose en los derechos primordiales de los menores de edad.

Dicha definición en relación con la protección al menor fundado en el beneficio supremo del menor de edad se sustenta en un instrumento legal internacional, nacional, europeo y de todas las Comunidades Autónomas.

Por lo antes mencionado, los beneficios del niño y adolescente deben ser prioritarios en el proceso de su desarrollo, en el caso que el progenitor, ya sea la madre o el padre, deben

de cumplir su responsabilidad como tal lo menciona el artículo uno del Título Preliminar del Código Penal, tanto en el aspecto económico y otros.

Al respecto antes que la persona que demande primero debe ir a la vía civil para que denuncie el delito de la falta de asistencia familiar, de acuerdo con la conciliación se ve el monto a cancelar.

La angustia de la posible investigación en favor del niño y adolescente se da cuando existe un incumplimiento a los deberes con la familia.

Por otro lado, deducimos que el acercamiento a la familia se presenta con problemas, debido a la problemática referente a las normas legales.

Se define que el plazo de prueba principalmente establecido donde el sentenciado muestra su cumplimiento por extendido, dado que, en transcurso de aquel plazo no hubo respuesta alguna de parte del condenado sometido a la probación. Cabe decir, al individuo se le ha dado la opción de la suspensión, pero si no cumple, es considerado como un novedoso delito.

Asimismo, hubo casos en las que en el tiempo del sentenciado no cumplía a las normas de conducta establecidas en el Código Penal Peruano, puesto que decaerá en un comportamiento frustrante y, finalmente la obligatoriedad de tomar acciones legales que corresponden. Al respecto nuestro legislador habría optado por alternativa adicional a dicho sujeto, añadiendo la opción a la derogatoria de la suspensión del castigo, extendiendo su sanción con la finalidad donde en un determinado plazo el sentenciado ajuste su comportamiento al cumplimiento del ordenamiento jurídico.

Sin embargo, el Código Penal Peruano señala que no existe extensión del plazo de tres años. Como podemos entender el lazo máximo que duraría la prórroga por si sola es de tres años, de modo que al haberse otorgado tiempo de tres años lograría extender a tres años adicionales.

En cuanto a la siguiente descripción literal es brindada por la suma del tiempo inicial de tentativa a un plazo extendido no lograrán prevalecer los tres años, en consecuencia, si al inicio se fijó, como, por ejemplo, en un tiempo de tres años ya no habla extensión. (p. 108)

La cancelación de la Suspensión de la Pena es el acto que no cumpla lo rutinario y sanciones graves previstas al otorgar aquella oportunidad de la libertad.

El inciso 3 del artículo 59 del CP se aleja de la revocación mencionada en el artículo 60 de CP, puesto en la primera referente a la discreción del órgano jurisdiccional y el segundo como un delito doloso.

Múrtula (2015) dice que en las peleas de parejas y en familia puede llegar hasta el punto de quitarle la vida al menor hijo como parte de una venganza. (p. 63).

Además, el juez civil es quien vela por la sensibilización, según se evidenció en el 2011 la cifra de violencia de genero era de 72,6% mientras que en el 2015 bajo a 67,75%.

En cualquier circunstancia de maltrato contra la mujer, existen los juzgados quienes toman medidas civiles con sus hijos, para que eviten crecer en estos entornos deplorables.

Cillero (1998), nos dice que [...] los niños pueden dar comentarios acorde al aspecto psicosocial, para poder identificar los fallos a lo que mejor le convenga al menor de edad [...] (p. 108)

Diversos autores tienen una conducta referente a su argumentación de modo similar, donde mencionan mucho respecto a la seguridad y bienestar del niño y adolescente, garantizando su mejor desarrollo.

Es por ello la importancia de que las decisiones que tomen las diversas jurisdicciones sean las más acordes, donde prime la justicia y libertad.

Garantizando un espíritu como tal lo menciona la carta magna, quien les brinda poderes para que velen por los derechos por los cargos ocupados.

Miranda (2006), menciona que las dificultades que se presenten en los casos de los menores debe ser arbitrado por un juez.

Por lo cual, según las diversas resoluciones judiciales se debe comprometer al cumplimiento de las leyes a favor de los menores de edad.

[...] Existen intereses en conflicto los cuales deben absolverse a la brevedad a favor del menor de edad [...]” (p. 164).

Aunado a ello Carbonell (2007), considera que [...] Este principio sirve para resolver los inconvenientes. Por ende, el principio beneficia los derechos de los niños en todo aspecto. [...] (p.87).

Asimismo, el autor Aguilar (2008), nos manifiesta en un principio fundamental de los menores de edad, establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 1° refiere que: Es toda persona menor de 18 años de edad. Dado que, se pueden ver en diferentes personas de 5 años y 14,15 años, siendo que, en la terminología moderna se hace mención que el niño y adolescente.

Ante ello, puede presentarse la situación legal de una comunicación en común, donde se reconozca su Derecho Integral.

Orozco, Monereo, Gonzales de Patto y Lozano (2015), mencionan:

[...] Se ve expresamente establecido en el Código de los niños y adolescentes, en la Ley 27337 del Perú donde se describe que en toda medida respecto al niño y al adolescente que apadrine el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con respeto a sus derechos contemplados [...] (p. 162).

No obstante, en 1959 la Asamblea de las Naciones Unidas colecciona su conceptualización de:

[...] Los niños sin discriminación alguna gozarán de seguridad a través de la ley, con el objetivo de desarrollar todas sus capacidades [...].

Cabe destacar que la Declaración antes mencionada se logró un buen resultado.

Al mismo tiempo Dávila y Naya (2011), definen sobre el niño primero haciendo referencia a los “efectos de la Convención”, puesto que se da por entendido que es considerado todo aquel que no cumple más de 18 años, a excepción de la integridad de la ley le sea tomada, y haya superado la mayoría de edad. Es por ello por lo que se ha previsto una cadena de consideraciones jurídicas respecto a su adecuación, y ello ha generado diversas críticas.

En cuanto a la definición de la edad es muy importante, con el objetivo de ver el cumplimiento de los principios de la Convención, esto significa que los Estados tendrían que

fijar la edad mínima prevista para distintas fijaciones, con reflejos de no contraer la discriminación entre niñas y niños.

Seguidamente Lehmann nos expresa que:

[...] Que deberían redefinirse las categorías como autoridad parental y cuidado personal, a y primar sobre todo el superior del niño, y distinguiendo de esta manera las facultades y derechos unidos exclusivamente para el padre quien es el custodio del menor y también para el padre no custodio [...]

Tal es el caso que las familias diarias pueden ser solucionadas partiendo de esta distinción, como, por ejemplo: cuando exista un nivel alto de conflictos entre los padres que no deja llegar a un acuerdo referente a la parte educativa, con episodio y la permanencia emocional de la descendencia. Por tanto, se define que los padres toman decisiones diarias en función al desarrollo de la dirección de los bienes materiales y la representación legal ameritada.

Múrtula (2015), nos dice que, los menores de edad son considerados con la ejecución del Derecho Internacional, para que garantice en todo aspecto su estabilidad y bienestar.

Aunado a ello la inquietud principal es el beneficio supremo del niños y adolescentes. Por lo que, es considerado y valorado en primera instancia en todos los aspectos y toda de decisión que amerite, así como en el ámbito público y privado.

Es de mencionar a Bravo de Mancilla (2017), quienes nos manifiestan que todo ser humano conoce que el método de protección de los menores se ha cogido para una transformación sustancial en nuestro Ordenamiento Jurídico al momento de promulgarse dos leyes lo cual se refiere a la Ley Orgánica 8 del año 2015, de fecha 22 de julio y la Ley 26 del año 2015, de fecha 28 de julio, de cambios en el método de seguridad al infante y al adolescente.

Principalmente, como objetivo de esta reforma es el de perfeccionar los materiales de protección jurídica de los niños y acomodar a los movimientos generales que se han generado en los últimos 20 años. Por tal motivo se solicita se cumpla efectivamente lo establecido en la constitución la cual imputa a los poderes estatales para brindar seguridad a

la defensa social, Jurídica y económica a nivel familiar, específicamente al niño y adolescente.

Similarmente, dice que el derecho sustantivo en referencia al derecho que tiene el menor al momento de obtener una medida que proteja, sus intereses, y también que hayan pasado a evaluación previa, además si hubiera otros intereses, se dé más importancia y prioridad a los más importantes al instante para dar de esa manera una solución.

Se dice también que, el Principio del Interés Superior del niño, el cual se encuentra establecido en el artículo tres, quienes son recogidos por toda Entidad pública o privado.

Como consecuente la dirección de justicia da a conocer los deberes de los padres, siendo los especialistas en las normas legales para ver lo más conveniente para el niño y adolescente.

Por otro lado, la legislación comparada y el beneficio supremo del menor en Argentina comenta sobre la propuesta de la ley de amparo para que proteja a los niños.

Por lo expuesto, debo rescatar que es muy importante tener en cuenta que el art. 75, inciso 22 de la Constitución de Argentina funda en su artículo tres que debe existir una protección máxima e integral para el menor de edad.

En la legislación chilena podemos detallar en su artículo 5 inciso 2 donde ordena que en el caso que se establezcan procedimientos concretos para ver los intereses más relevantes de los menores de edad.

De ello, se precisa que en la clasificación jurídica chilena el principio de interés supremo del niño fue puesta en la Ley N° 19,585 de 1998 correctiva al Código Civil y otros instrumentos jurídicos en lo que es filiación. Dado que este principio es señalado en el inciso 2 del artículo 242 y 244 del Código Civil de dicho país, para identificar sus necesidades.

Aguilar (2008), menciona que [...] Habla sobre los inicios de los intereses de los menores de edad según lo menciona el artículo interamericano a su favor [...] (p. 223)

En la legislación de Chile, podemos apreciar los derechos de los menores de edad referido país se identifican conforme lo creó la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que la constitución nueva protege el inicio de cualquiera de los dos padres tiene

obligaciones iguales respecto a la formación y el desarrollo del niño, niña. Cabe resaltar que su Estado manifestara el compromiso de implementar las medidas legislativas que sean necesarias, para resguardar el abuso físico, descuido, abuso sexual, malos tratos y explotación.

Por lo antes mencionado, se debe tener en cuenta que existe un código del menor de edad según el artículo once para cumplir los pactos y acciones con un fin en común.

La Constitución Colombiana agrega mandatos de forma universal, de los cuales son amplios a la niñez y que al momento de ponerlo en práctica tienen que tomar como prioridad los menores de edad, conforme el artículo cuarenta y cinco, informa respecto a la seguridad y formación.

Por ello el Gobierno debe tomar medidas a su mando en la protección, progreso de la juventud y educación, con apoyo económico en el aspecto de la salud mental y física.

Los progresos normados ya que tiene un extenso contenido de forma universal, de igual manera están en ellos mandatos señalados a sectores particulares de la población entre ellos está la población tierna de las comunidades indígenas, de modo que originan un compromiso de sus actividades en su comentario, materialización y educación con un criterio pluriculturales.

Veamos primero con lo que respecta a la Constitución Política del Perú donde podemos apreciar que no se determina el artículo cuarenta y cinco el derecho nacional.

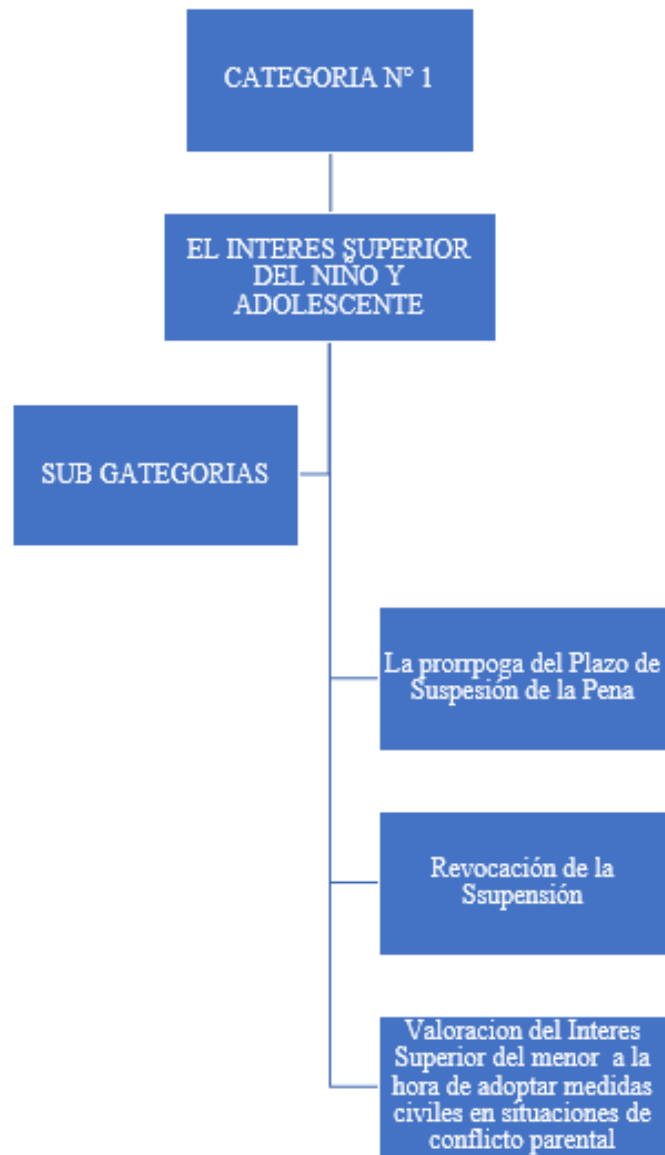
Lo cual se predice las normas concernientes con enfoque al cumplimiento de los acuerdos internacionales en nuestro país.

Además, tenemos el Código de los Niños y Adolescentes el mismo que en su artículo IX del Título Preliminar señala:

Mediante los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Ministerio Público y las otras entidades, así como también en la labor en el accionar de la población. (p.714)

Al respecto en este principio cabe mencionar los intereses reales primordialmente, ante todo, tal menciona la Constitución Política del Perú, la misma que deberá primar ante cualquier desamparo y afectación del menor para asegurar una vida saludable al menor.

Mapa conceptual de la Categoría N° 1 El Interés Superior del Niño y Adolescente



Fuente: Elaboración propia

Peña (2015), nos dice los juzgados familiares han presentado inconvenientes debido a que imponen sanciones para quien no cumpla con la manutención de sus menores hijos (p. 117).

Se sabe que existe el artículo 472 quien menciona la obligación civil tipificada para sustentar al menor hijo en todo lo que necesite.

Peña (2016), dice que “Abandonar a la familia esta interpuesto por el incumplimiento familiar”. (pp. 438-439)

Se presenta un comportamiento de protección al menos de edad para que no se quede sin el sustento respectivo.

Villavicencio (2017), informa que omitir la tipificación de acciones puede tener sanciones con carácter normativo.

Como tal lo dice el artículo ciento veinte siete del código penal.

De tal manera Hurtado (2005), precisa que un delito de omisión propia presupone el desacato del cumplimiento de la alimentación. (p. 746)

De lo mencionado por el autor se entiende que existen faltas por omisión las cuales se convierten en infracciones donde la ley menciona que es considerado un delito grave.

Tal como lo dice el artículo 13 y 106 del código penal, para realizar sanciones de carácter urgente.

De tal manera Villavicencio (2017, p. 654), dice que para acatar sanciones penales se debe pedir mediante el bien jurídico.

Por otro lado, Campana (2002, p. 143) argumenta que el Código Civil debe abastecer en la vivienda, educación, necesidades básicas para desarrollarse.

Nuestro Código Civil en el Art. 472 menciona sobre la importancia de velar por la familia, para que los menores de edad no tengan carencias.

En tal sentido el artículo cincuenta y nueve del Código Penal, refiere:

Que la sanción a quien no cumple hará que pase por un proceso hasta que sea sancionado y es el abogado y el representante del Ministerio Público quienes intervienen.

Aplazar el tiempo no debe de extenderse a 3 años. Aménos que se revoque la suspensión de la pena, siendo de aplicación justa.

Aunado a ello López (2004, p. 104) refiere que en el tiempo de prueba la persona acusada debe cumplir su sentencia según sea su pertinencia.

Consecuentemente el artículo sesenta del Código Civil estipula que el delito se convierte en doloso si es mayor a tres años.

La importancia del proceso en la asistencia familiar interviene que el cumplimiento de las pagas económicas por la alimentación del menor.

Cabe agregar que no solo basta con el reconocimiento de la falta, sino debe darse de forma efectiva, antes de tener sanciones más drásticas.

En Perú, existe el delito de Omisión a la Asistencia Familiar el cual es sustentado por la Ley 13906, la cual refiere sobre el abandono de familia.

Aunado a ello, existe un Código Penal, el cual menciona en el artículo 149 sobre la obligación de naturaleza fundamental en el patrimonio.

Por ello, cual se habla de la tipificación del delito, puede existir en el ámbito de criminología deudora.

Por lo cual, la interposición del comportamiento que se tiene de conocimiento en el artículo sexto sobre el deber por parte de los padres hacia el cumplimiento de la alimentación y sino se cumple se restringe la libertad no mayor a tres años o en tal caso como parte del pago de impuestos.

En esta situación el pago legal del cumplimiento de los alimentos por el lado del imputado debe darse de forma completa sin omitir la obligación y así pueda evitar una denuncia penal.

Por ejemplo, si el agente ha hecho caso omiso otro compromiso de una adecuada alimentación donde viva con otras personas, y de repente deja el trabajo, tendrá una sanción menor a cuatro años, por una conducta maliciosa que perjudica a los hijos menores.

Por lo tanto, si existe mentiras será considerado en la carga penal, debido a que se debe considerar la importancia de cumplir con los pagos alimentarios.

Si fuese la situación de nivel leve o grave, la sanción va de dos a cuatro años. Esto esta plasmado en el código penal del artículo 149 del Código Penal.

Al hablar del resultado nos damos cuenta de la situación de muchas personas que son abandonados y se ven en la necesidad de buscar empleos y los menores de edad hasta pueden dejar sus estudios.

Se ha visto muchos casos de niños afectados a nivel psicológico y físico, cuyo maltrato puede ser hasta irreversible, y el ente competente del Poder Judicial puede dar el soporte pertinente.

Pero no solo este ente competente, dará la solución a los diversos conflictos, debido a que existe un rango de aporte que puede ir desde ciento veinte y doscientos soles hacia los demandantes, para dar apoyo a los menores de edad.

Los hijos pueden recibir aportes hasta cumplir la mayoría de edad y/o tener alguna incapacidad física o mental, por lo cual se debe brindar un apoyo económico consciente para que tengan un mejor desarrollo.

Existe el delito por Omisión, en el caso de que no se cumpla con una asistencia familiar idónea, y se tiene las siguientes características.

La persona que incumple con sus deberes tendrá un mandato del orden judicial.

El individuo cae en un acto delictivo si no cumple con lo pactado dentro de los acuerdos alimenticios por la materia civil (Gálvez y Rojas, 2012 p. 140).

El delito se considera pasivo cuando existe una persona que se ve perjudicada, por la falta de soporte familiar.

Salinas (2012, p. 103) comentó que, en la resolución judicial correspondiente a la alimentación, busca adoptar medidas automáticas a favor del menor de edad, para evitar la omisión dolosa en el paso del tiempo.

Con respecto a la falta del cumplimiento de pago en la alimentación, se le considera una acción delictiva por extender el tiempo en hacer los pagos de forma responsable.

Referente a la falta, es de riesgo latente cuando la resolución judicial esta a favor del demandante, intentando mantener un equilibrio constante, que corresponde a las obligaciones oportunas, para no perjudicar a la asistencia familiar y tener seguro una mejor calidad de vida.

Reyna (2011), refiere que la protección a la familia debe plasmarse desde la asistencia de una calidad de vida adecuada, donde sus derechos se vean salvaguardados en el tiempo del proceso (p.236).

Ruiz (n.d.), informo que en el Código Penal del artículo 149 se considera como abandono financiero, al no cumplir y este puede ser considerado como un reclamo de nivel básico. (pág. 43).

En el caso que se omita el cumplimiento tipificado de la alimentación, esto ya se vera de forma asistencial para evitar daños en el menor de edad.

Rojas et, al,. (2007), señalan que jurisprudencialmente, se ha mencionado que la sanción por delito de omisión se aplica cuando el demandado no cumple legalmente a pesar de haber sido informado a cumplir con los pagos de forma devengada (pág. 135).

Si bien es cierto, Sanz (2002), informa sobre la promesa del inicio de beneficio en el proceso penal, como modo de hacer una aplicación de utilidad pública, a favor de la justicia del menor de edad quien le hace falta de significancia en el proceso.

Se puede confirmar que el principio de oportunidad puede afectar directamente al proceso, de forma general, de dos formas: no iniciándose o archivándose el caso en fase de investigación, si no dándole fin anticipadamente por efecto de conformidad de las partes.

En tono al principio de beneficio es considerado como un instrumento legal, el cual se acopla a la norma para aplicar sanciones cuando se es pertinente.

Aunado a ello, la Restricción de la Ejecución de la Pena en el Delito de la Omisión a La Asistencia Familiar actualmente considera una sanción considerable de modo tipificado como lo dice el artículo 57, para mejor la norma y que sea aplicado con justicia.

Por lo tanto, se considera un delito grave, siempre y cuando no exceda los cuatro años, de acuerdo lo tenga dispuesto el juez por no cumplir con sus deberes, esto hace que tengan cuidado con el cumplimiento de sanciones en un futuro.

Por ende, la sanción impuesta por no cumplir con los pagos alimenticios tiene efectos que se soportan en la norma de nuestro país de uno a tres años, mucho depende del nivel.

Armaza (2009), informo que correspondiente a la naturaleza jurídica el castigo penal puede verse relacionado con el cumplir como dé lugar con lo indicado por el juez. (p.123)

Lo antes mencionado por el autor se entiende como la sanción negativa a beneficio del imputado, el cual pretende cumplir con los pagos a sus devengados para evitar sanciones mayores.

En torno a las normas de comportamiento el artículo 58 del Código Penal, da el soporte al juez para que el demandado no asista a lugares que no se le permite.

Por lo cual, solo el juez podrá cancelar la sanción en el tiempo que se crea pertinente, en el proceso se puede solicitar el resultado de nivel de consumo de drogas y/o alcohol.

Es preciso acotar que, el cumplimiento de programas educativos de soporte puede darse en la realización penal, como parte del soporte al condenado.

Podemos incluir diversas jurisprudencias a nivel de país respecto a diferentes casos donde se evidenció la Omisión de asistencia familiar, a favor de los menores de edad, como se conoce el caso en la provincia de Barranca donde se identifica lo siguiente:

Señalo que la mamá del menor de edad, en pleno proceso reprogramo la audiencia a otra fecha, y su menor hija llego con retraso y el juzgado tuvo que justificar la situación por falta de asistencia.

La Ley indica que la juez al no tener la participación justificada finaliza el proceso, y emite una resolución de acción al trasgredido.

Aunado a ello la mamá hizo una acción de recurso de agravio, para fundamentar su amparo, siendo considerada una falta de vulneración al derecho.

Por tanto, concluyo que el juzgado debe tener mayor cuidado antes de brindar su dictamen por falta de cumplimiento de los alimentos, debido a que no es un juego y esto puede llegar al punto de la muerte sino se toma las medidas respectivas de justa razón.

En cuanto a legislación Comparada sobre delito de omisión a la asistencia familia, es preciso acotar a Guatemala quien nos señala en el 242 del Código Penal respecto a la Negación de participación monetaria el cual señala que es imprescindible su firma plasmada en un documento público o auténtico. resistiéndose a obedecer su obligación después de ser legalmente pedido.

Por tanto, se entiende que, se aplica un castigo de prisión en el rango de seis a veinticuatro meses sino se cumple con la obligación monetaria, sin eximir la responsabilidad.

De la misma forma, el artículo 244 del Código Penal refiere que quien, esta con mandato legal e incumpliese los derechos de cuidado y educación al descendiente o personas bajo su tutela que estén en posible abandono de forma material y moral, con una sanción en el rango de dos a doce meses.

El código alemán en su artículo 170 del Código Penal alemán menciona en su artículo 1 inciso 1 que quien sustraiga del deber legal de prestar, y se encuentre en riesgo es primordial, se castiga de modo ejemplar con una multa o máximo tres años de libertad privativa.

Asimismo, en dicho artículo señala que quien falte peligrosamente debe ser sancionado al poner en riesgo al menor de 16 años, quien pone en riesgo de realizar actos peligros, con una multa ejemplar o tres años de cárcel.

El código Costariquense en su artículo 185, refiere que se aplicará una sanción de dos a veinticuatro meses o una multa del 50% del pago de su salario, ya sea dispuesto de la Ley N° 7337, mientras sea menor de edad, considerado de dieciocho años.

Se entiende que inclusive el Juez podrá elevar doblemente su pena, en torno a sus probabilidades monetarias, o a las faltas de gestión. del mismo modo se dará sanciones a los demandados para otorgar una alimentación adecuada.

Esto significa que la sanción se otorgará al hijo referente a padres con habilidades diferentes, si el hermano no puede asumir el rol del cuidado al menor de edad.

Por otro lado, en el artículo 186 del Código Penal señala que la pena máxima antes referido se aumentará en una tercera parte para que se cumpla, o en todo caso se renuncie al trabajo o realice otro medio fraudulento.

Aunado a lo anteriormente descrito quien no cumple con sus deberes y cause un peligro en los menores de dieciocho años, tendrá una sanción de veinte a sesenta días y por falta de incapacidad es de seis a veinticuatro meses.

Según lo expuesto anteriormente, existen los artículos 185 y 186, que hacen hincapié en el cumplimiento de pago de los alimentos de forma razonable ante la disposición del juez.

En cuanto a la legislación española el artículo 226 tipifica quien no cumple con sus responsabilidades tutelares en el cuidado familiar, serán castigados con una multa y de seis a doce meses de prisión privativa.

De acuerdo con su artículo 227 determina que el que a sabiendas dejará de cancelar en el rango de dos meses a cuatro, esta contemplado el convenio judicial para que se anule el matrimonio.

Respecto a Francia refiere que cuando ya no se cumple con una orden judicial que asigne al recurrente, para el beneficio del menor verdadero, o sea adoptado, el cumplimiento de los pagos económicos debe de cumplirse por los artículos 5-8 del libro 1º del Código Civil.

De la legislación se entiende que lo realizado acorde a la patria potestad que tiene menos de quince años no debe ser desamparado y la multa podría llegar hasta los 100 000 euros, en el tiempo de cárcel hasta los siete años.

De ello se desprende que, en su artículo 227, cuando el padre o madre, dejan de cumplir con sus deberes, se considera una falta grave, por atentar contra la salud, protección moral, educación y pueden ir hasta veinticuatro meses y la multa respectiva.

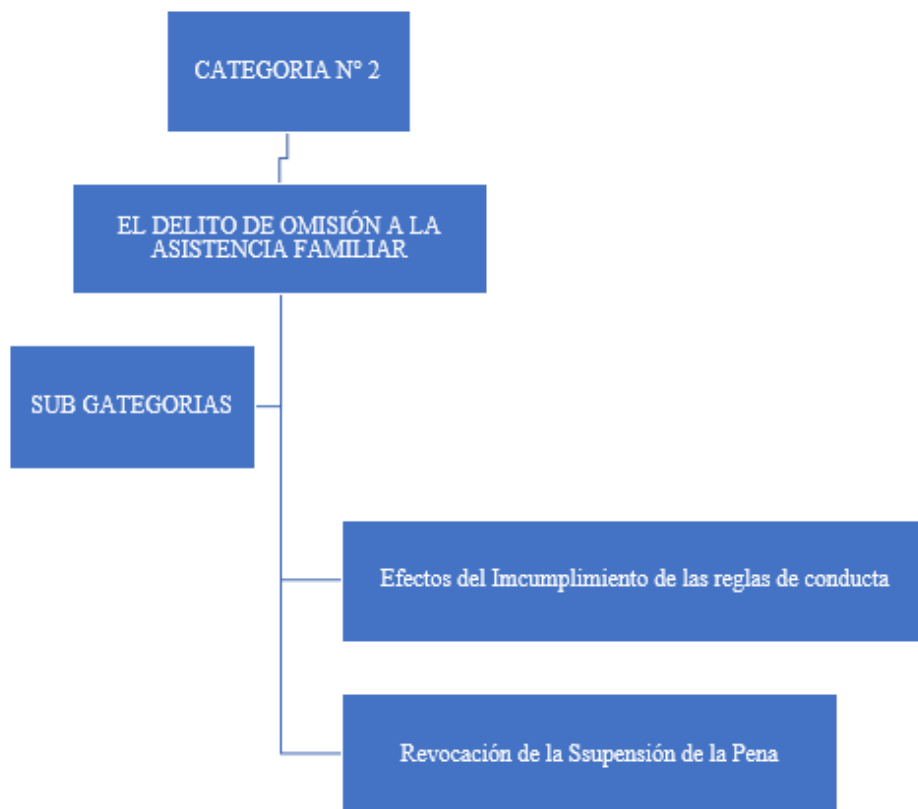
En Bolivia es considerado una sanción de seis a veinticuatro meses o multa de 100 a 400 días, debido al abandono del menor de edad.

Por ende, se entiende que, la pena corresponde a la falta de asistencia a sus requerimientos primordiales en el cumplimiento económico de sus alimentos.

Sin embargo, en el Artículo 249 la falta de deberes de asistencia precisa que: Se someterá en ausencia de libertad de 6 meses a 2 años, el padre, u otro apoderado, y será inhabilitado para ejercitar su responsabilidad de padre, u apoderado, en los siguientes aspectos:

Es decir, se evita de suministrar la falta a la civilización básica de un menor en edad. asimismo, donde facilita que usualmente valla a viviendas de recreación o viva con persona con algún vicio. Si bien es cierto, si consintiere que el menor siempre valla a distracciones como diversión, aunado a ello si da permiso que resida en casa de meretricio. o se permitiera que el menor pida limosna para inspirar conmiseración.

Mapa conceptual de la Categoría N° 2 El Delito de Omisión a la asistencia familiar



Fuente: Elaboración propia

Actualmente en los niños, debido a la vulnerabilidad de ser menores de edad, amparo, cariño y guía para su una buena trayectoria no es que el lado que haya sido compartida desde años atrás. Si no que a los niños lo veían como personas imperfectas, posesión a sus progenitores.

En el siglo XVIII los pensadores como uno de ellos Locke formaron proteger aduciendo que los niños tenían derechos y debían ser resguardados y que eran predestinados a conformar la ordenanza social y moral de las personas, toda vez que sus progenitores tienen la necesidad de brindarles todo lo que corresponde a su subsistencia hasta que puedan llegar a ser independientes.

Los menores de edad debían de trabajar. Por otro lado, Rousseau, manifestó que los niños al final eran corrompidos.

Sin embargo, en el siglo se principió tomar medidas a una compostura más fácil a los menores de edad. Sobre los pensamientos románticos en la etapa de la niñez, se plasmo un recuerdo positivo de las diversas cualidades que poseían.

El Gobierno toma medidas preventivas para cuidar de la familia. Como bien se conoce cuidar el interés del menor, para darle un cuidado básico a favor de sus derechos.

Respecto a los principios de Interés el artículo N°3 establece que en todos los calculados con enfoque a los niños tendrán una atención eficaz en su debido momento, para velar por sus beneficios.

Cabe agregar que en todo panorama se debe velar por cuidar de los menores de edad. Veamos la relación que existe con el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, donde respecta a la punición de obligaciones alimentarias para el derecho peruano.

Cabe decir de lo mencionado, como anteriormente primera, primitiva y original. Sin embargo, ahí no termina esta filosofía humana, dicha obligación en su llegada se encuentra implantada en una orden social natural respectivamente obligada por la providencia, de modo que su variación trae consigo una anomalía que tendrá que repararse con la finalidad de que todo regrese de nuevo a funcionar de forma correcta.

En lo concerniente a los positivistas legales, la obligación alimentaria para ser tutelada penalmente tendrá que ser puesta con indubitabilidad, medido y definitivo con mucha seguridad, asimismo para dicha corriente la seguridad se encuentra en la ley y las otras decisiones del poder público en lo que también están las órdenes jurisdiccionales.

De ello se entiende que, para el positivismo la tutela penal no debe incluir a la obligación prístina sino solamente a la que se ha recepcionado el reconocimiento concreto del Estado así se a través de una asignación provisional o una sentencia judicial.

Respecto al aspecto histórico se conoce que, en la edad media, se vivió momentos complejos para los niños, donde el hambre y mortalidad iban en aumento, siendo considerado como una esperanza lejana.

Aunado a lo mencionado anteriormente, se sabe que del siglo XX se dieron situaciones complejas, en 1921 se inicio con las vacunas en Francia y en 1937, se consideró a interés superior.

No obstante, en 1924, se consideró la declaración de Ginebra, para que se vele por los derechos. Ya en 1989 se aplicó la Ley universal al derecho del niño, para motivar a la creatividad de prevención de riesgo.

Respecto al año de 1959, los niños tuvieron mayor relevancia y pasaron a ser la prioridad en el cuidado en todo ámbito.

Menciona el artículo 25.2 de la Declaración Universal de Derechos que es de suma importancia reconocer los derechos y asistencias personales del menor de edad, haciendo que su bienestar se vea más protegido.

Adicional a ello el artículo N°19, de la Convención Americana, refiere que todo niño debe tener el cuidado de su familia y del Gobierno. Tal cual lo refiere los artículos 23,4 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a favor de los menores de edad.

Se sabe que, el ser humano en sus inicios tenía como prioridad velar por su familia, velando en todo aspecto por ellos, ya en el tiempo se veía lo que más les convenía para mantener acuerdos factibles de fortalecimiento social.

En la Constitución Política del Perú, en el artículo cuarto refiere que el Gobierno debe cuidar al niño, adolescente, a la mamá y al anciano.

Dicho fallo va acorde al beneficio del niño y adolescente, para valorar sus derechos y que puedan tener un mejor desarrollo en el aspecto mental y físico.

La aplicación del Principio del interés superior del niño, donde se vele por sus derechos, además abarca una herramienta internacional relacionado para los Estados parte con relación del hábito de la infancia.

Por lo cual, los diversos métodos para el cuidado general del menor de edad, se basan en una clara cultura, para evitar la discriminación en todo ámbito, y logren un mejor desenvolvimiento.

Sujetos que tienen Derecho a los Suministros son los menores de edad, quienes deben comprender la importancia de mantener una vida sana, para tener mejores descendientes.

Si bien se menciona la pensión de alimentos regula en la vitalidad para alcanzar una lo que es necesario para sobrevivir. Es decir, la obligación de los padres u apoderado que tenga un menor, hasta su mayoría de edad, pero en el caso que tengan alguna incapacidad y pase a adulto a un el padre, madre u apoderado seguirá aportando una pensión alimenticia.

En cuanto al cálculo de pensión de alimentos se determina con el cálculo al demandado de hasta 60% establecido en el inciso 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil, por ejemplo, si el papá tiene una remuneración de S/. 1200.00 tendría que dar a su hijo S/. 720.00. Cabe resaltar que este ejemplo es solo para el padre que tiene solo un hijo.

Los requerimientos primordiales para pasar por el proceso es la partida de nacimiento del menor de edad, el cual contenga la firma del demandado, se adiciona la copia de DNI de la mamá y la ficha de RENIEC del demandado.

Cabe mencionar que, si el papá no efectúa el pago de alimentos en el transcurso de tres meses, la madre deberá acercarse a la Corte Superior de Justicia de su jurisdicción y registrarlo en el REDAM.

El bien jurídico protegido este bien jurídico es la familia y principalmente en la configuración de no dejar admisible el pago oportuno, para evitar las sanciones.

Aquel dispositivo de sanción, el especialista legal comprueba el comportamiento del agente acude una procedencia de testimonio de las establecidas en el artículo 20 del Código Penal en consecuencia en la presente sanción no existe mayor trascendencia.

Si bien es cierto en la Culpabilidad, el ejecutor jurídico corresponderá comprobar si el escritor es endosable, vale decir si posee el porte para sobrellevar situaciones complejas.

La fundación REDAM protege el registro de las personas que no cumplen con tres cuotas seguidas, esto es importante para que el demandado evite pasar el tiempo.

Al referirnos a la coacción cuando no se cumple con lo dispuesto por el juez, ya podemos hablar de los devengados, para liquidar las deudas.

En el procedimiento de cumplimiento de los alimentos se debe tener en cuenta los tiempos, para evitar la sanción de omisión y ante ello el demandado debe ser imputado para que todo siga siendo transparente.

Por lo cual, al solicitar el quantum, se debe tener en cuenta los antecedentes del demandado para evitar que transcurran más de treinta días.

Según Bernal (2006) refiere que un problema presenta diversos niveles, ante ello se considera el inicio de la problemática y en consecuencia el título para luego basarnos en incógnita general y en las preguntas específicas. (p.86)

1.2. Formulación del problema

Problema General

¿De qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017?

Problemas Específicos

Referente a los problemas específicos se sugiere la transformación de una o varias incógnitas que expongan de forma clara exteriores inexplorados que sellaran el principio de cuya investigación (Arias, 1999, p. 10). Dado que. A fin de absolver el problema general, se muestran los problemas específicos, los mismos que conforman la construcción del problema general.

Problema Específico 1

¿Cómo la prórroga del plazo de la suspensión de la pena incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria?

Problema Específico 2

¿De qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del interés superior del niño y adolescente en los juzgados de Investigación Preparatoria?

1.3. Justificación del Estudio

De tal forma, Bernal (2010) nos precisa que, en una investigación, las justificaciones son las derives del porque y el para que de la investigación que se va a desarrollar; vale decir

presentar los motivos por los cuales son de relevancia realizar el correspondiente estudio (p. 57).

Interpretamos que un trabajo de investigación es importante cuando justifica razones sólidas a su estudio, interpretando de forma coherente el uso metodológico para realizar hallazgos acorde a la naturaleza de estudio.

En cuanto a la justificación teórica podemos identificar que el menor de edad será quien se vea perjudicado ante la sociedad actual siendo el Interés Superior quien vele por sus derechos.

El presente trabajo en el aspecto práctico pretende trabajar en conjunto con la Omisión de la asistencia familiar, para seguir velando por los derechos del menor de edad, para que se cumpla con los alimentos.

En la justificación metodológica, se tendrá en cuenta el método científico para que se analice el contenido y se evite el delito de la omisión a la asistencia familiar.

Asimismo, en la investigación científica, busca generar mayor conocimiento al desarrollo de la sociedad.

En cuanto a los supuestos u objetivos de trabajo se refieren lo que se anhela alcanzar en la investigación, de modo que, tienen que estar bien precisados, por lo mismo que componen las guías del estudio a realizarse (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p. 36).

Por tanto, los objetivos de esta investigación están direccionados a resolver los problemas trazados, para brindar respuestas y soluciones viables, válidas y confiables.

1.4.Objetivos del trabajo

Objetivo general

Determinar de qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017.

Objetivo Específico 1

Determinar cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

Objetivo Específico 2

Establecer de qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

Supuesto jurídico general

La actual regulación protege de una manera inadecuada en el caso de delitos de omisión a la asistencia familiar, dejando de lado al interés superior del niño y adolescente.

Supuestos jurídico específico 1

La prórroga del plazo de la suspensión de la pena incide negativamente en la valoración del interés superior del niño y adolescente en el Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

Supuestos jurídico específico 2

La frecuencia del delito de omisión a la asistencia familiar influye en el principio del interés superior del niño y adolescente de forma significativa en el principio.

Relevancia

De lo anteriormente expuesto, el trabajo pretende dar el soporte necesario a que no exista incertidumbre legal, debido a que las familias disfuncionales tienen deberes que cumplir con los menores de edad para educar a hijos que puedan consumir roles a favor de la sociedad.

Contribución

Además, se pretende velar por los beneficios del niño y adolescente, donde los jueces sean capaces de aplicar las normas establecidas conforme a un criterio más rígido en concreto, de lo cual es valioso el rol de los jueces para hacer respetar los derechos.

II. Método

El proceso sistemático pretende recopilar contenido investigativo, para dar el soporte pertinente con técnicas con enfoque claro a este trabajo.

(Bernal 2006, p.55) refiere que el método al relacionarse con la parte metodológica hará que exista un consecuente claro en el proceso.

Para Niño (2011, p. 30) donde la investigación que hemos optado es cualitativa en la que tiene por recopilar información, explorando diversos casos de forma profunda.

2.1. Diseño de Investigación

El diseño que hemos tomado es la teoría basada, dicho diseño emplea un proceso sistémico cualitativo para crear una teoría donde explique los niveles conceptuales (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 492).

Por otro lado, tenemos otra definición en la que Niño (2011, p. 53), sostiene al respecto para explicar el diseño de la investigación se debe tener claro los niveles de formulación del problema.

Además, se empleó un diseño sistemático de enfoque cualitativo.

Cazau (2006) la investigación abordada es tipo básica, la misma que tuvo como fin ampliar el conocimiento de una realidad que es materia de estudio (p. 17).

La investigación que he se ha utilizado es de enfoque cualitativo, teniendo como un fin en dicho enfoque de estudio en entender e interpretar el fenómeno de estudio mediante los significados que la práctica le origina al investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 11).

Al respecto, se analizó el fenómeno originado al compensar las categorías de la investigación, en la que vienen a ser el interés superior del niño y adolescente como un derecho y la sanción de omisión a la asistencia familiar de la norma penal, con la finalidad de establecer su regulación, por tanto, el enfoque cualitativo fue el competente para el desarrollo de la investigación.

2.2. Método de estudio

El método de entrevista de la investigación permitió construir la realidad en base a los datos que se ha obtenido de las Entrevistas y análisis fundamentales.

La teoría sustentada emplea una serie de pasos, mediante la introducción, inicia una teoría explicativa de un definido problema. Asimismo, las definiciones y las correlaciones de filiaciones son producidas y examinadas seguidamente hasta finalizar la investigación.

Para Bernal (2006, p. 166), en el método del muestreo se emplea los siguientes diseños tanto el probabilístico como el no probabilístico.

Población

Según Bernal (2006, p. 165) la población la define como el conjunto que será analizado.

Asimismo, la población de la investigación está conformada por el número de Expedientes de las demandas por Incumplimiento de Obligación alimenticia del año 2017.

Muestra

Bernal (2006, p. 165) informa que en la muestra se considera una parte menor a la población, el cual será el objeto de estudio, observando sus características.

Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 384) señalan que la muestra en el proceso cualitativo, viene a ser el conjunto de individuos, programas, acontecimientos, etc.; respecto del se recopila información, sin necesidad que sea estadísticamente representativa.

Asimismo, la población viene a ser el conjunto de personas que no cumplieron con su obligación alimenticia.

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 382) el método en un estudio cualitativo, las decisiones frente al muestreo denotan las premisas del investigador acerca de lo que forma una base datos creíble, confiable y válida para empezar el planteamiento del problema.

El muestreo se relaciona con el conjunto de estudio en situaciones similares el cual puede contemplarse a nivel cuantitativo y/o cualitativo. (Ruiz, 2012, p. 65).

En ese sentido, el muestreo de la presente investigación son los sujetos que cometen los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar.

2.3. Rigor científico

Respecto al rigor científico, esta investigación es de tipo cualitativo, cumpliendo con su papel principal con información de calidad, considerando aportes sólidos y valiosos.

2.4. Análisis cualitativo

La investigación cualitativa es considerada de gran aporte científico, por la profundización de contenido. Cabe agregar que la información recopilada tiene lógica secuencial en su desarrollo. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010)

Las técnicas de recolección de reseñas componen las numerosas formas de obtener la información, y los instrumentales de cogida de información para los acervos bastos que se manejan para acumular y recopilar investigación (Arias, 1999, p. 25); por ello, las técnicas e instrumentos de recopilación de información usados en esta investigación pertenece al enfoque cualitativo.

El estudio registrado, dado que dicha pericia se basó en la acción intelectual que realizó el investigador, a través del cual se desembolsó la información relevante de los documentos, recolectando los datos muy importantes que contribuyeron en la investigación; de tal manera, se tomó dicha técnica para el análisis de Resoluciones, Jurisprudencia, Casaciones, corrientes doctrinales y las normas legales frente al fenómeno jurídico en estudio.

La entrevista se considera como la técnica de recopilar contenido acorde requerimiento del entrevistado, los cuales son proyectados por él, para responder a las diversas cuestiones. (Bernal, 2006, p. 226).

Al respecto, la entrevista se dio mediante la obtención de información de los entrevistados las mismas que se añadieron a la investigación por ser parte del estudio.

Guía de análisis documental, este instrumento tuvo la finalidad de organizar y proporcionar el estudio, analizar e interpretar los documentos elegidos, en base a una mayor relevancia en la recolección de información en la que se utilizó para exponer los efectos de la investigación.

Guía de la entrevista, en este punto se encuentra las preguntas que absolvieron los entrevistados, dichas respuestas fueron contrastadas con las otras fuentes de información obtenidas.

Según Carrasco (2013, p. 335) considera a la validez como el grado de medición acorde a los requerimientos pertinentes.

Por lo que, se dio por concluido que la validez hace mención al grado en el que el instrumento valora y analiza alcanzando el objetivo de seguridad de las preguntas. Dado que, la validez también se puede conceptualizar como la privación de desvío.

Por cuanto, en la investigación se comprobó la validez mediante el juicio de expertos para validar el proceso de aplicación de la técnica.

La guía de entrevista se ha validado por expertos profesionales del derecho y de investigación científica, en la que ellos fueron partícipes en la elaboración al momento de dar indicaciones en la escritura a efectos de contar con una buena redacción del instrumento de medición.

2.5. Aspectos éticos

La validez obtenida en la investigación se alcanzó por intermedio de los expertos de la Universidad Cesar Vallejo.

La confiabilidad es respecto al grado de su aplicación frecuentada, al mismo sujeto origina iguales resultados. Un instrumento es confiable si causa resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones (estabilidad y replica). Hace referencia al análisis de los resultados (Carrasco, 2013).

Validación de instrumento - Guía de la entrevista

Tabla 1

Validez y confiabilidad de instrumento: Validación del instrumento

<u>VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO</u>		
NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN / CARGO	PORCENTAJE
Dr. José Jorge Rodríguez Figueroa	Abogado/ Docente de Desarrollo de Proyecto de investigación Derecho UCV – Lima Norte	Aceptable 96
Mg. Mariano Rodolfo Salas Quispe	Abogado/ Docente de derecho Penal y Desarrollo de Proyecto de Investigación	Aceptable 95
Mg. Eleazar Armando Flores Medina	Abogado/Docente de derecho Penal y Desarrollo de Proyecto de Investigación	Aceptable 95

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2

Validez y confiabilidad de instrumento: Guía de entrevista

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN / CARGO	PORCENTAJE
Dr. José Jorge Rodríguez Figueroa	Abogado/ Docente de Desarrollo de Proyecto de investigación Derecho UCV – Lima Norte	Aceptable 96%
Mg. Mariano Rodolfo Salas Quispe	Abogado/ Docente de derecho Penal y Desarrollo de Proyecto de Investigación	Aceptable 95%
Mg. Eleazar Armando Flores Medina	Abogado/Docente de derecho Penal y Desarrollo de Proyecto de Investigación	Aceptable 95%

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 3

Validez y confiabilidad de instrumento: Guía integrada de análisis documental

NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESIÓN / CARGO	PORCENTAJE
Dr. José Jorge Rodríguez Figueroa	Abogado/ Docente de Desarrollo de Proyecto de investigación Derecho UCV – Lima Norte	Aceptable 96
Mg. Mariano Rodolfo Salas Quispe	Abogado/ Docente de derecho Penal y Desarrollo de Proyecto de Investigación	Aceptable
Mg. Eleazar Armando Flores Medina	Abogado/Docente de derecho Penal y Desarrollo de Proyecto de Investigación	Aceptable

Fuente: Elaboración Propia

Caracterización De Sujetos

En este punto, pasaremos a exponer las características de los sujetos que han sido entrevistados; en la que se detalla el cargo y entidad donde laboran los profesionales con el fin de ser considerados muestra de especialistas en materia de familia y penal.

Tabla 4

Escenario del estudio

N°	Sujeto	Sexo	Cargo	Entidad donde labora
1	Luis Alberto Vega Buenaño	M	Secretario Judicial	Corte Superior de Justicia de Lima Norte
2	Miguel Angel Canepa Sulca	M	Asistente Judicial	Corte Superior de Justicia de Lima Norte
3	Ronald Tuesta Azanero	M	Secretario Judicial	Corte Superior de Justicia de Lima Norte
4	Gladys Liliana Gonzales Obando	F	Fiscal Provincial Titular	Ministerio Público
5	Waldir Victor Montoya	M	Fiscal Provincial Provisional	Ministerio Público

6	Sandra Zully Huaman Panana	F	Fiscal Adjunta Provincial Provisional	Ministerio Público
7	Hebert Edwin Farro Aquino	M	Fiscal Adjunto Provincial Provisional	Ministerio Público
8	Maria Azucena Elias Santana	F	Fiscal Provincial Penal	Ministerio Público
9	Yovanna Jenny Obregón Soto	F	Abogada	Litigante
10	Sender Vilardo Quispe Ventocilla	M	Asistente en Función Fiscal	Ministerio Público

Fuente: Elaboración Propia

Escenario de estudio

La angustia al empezar la sanción de omisión dolosa es al identificar que no se cumple con el procedimiento del proceso donde se castigue a los demandados por no pensar en las necesidades de sus menores hijos.

Puesto que el delito de omisión familiar se originó a partir de la formalización del Juez de Paz Letrado, puesto que en sede civil se le requiere el pago de los devengados por alimentos, dándole cinco días para que pague; debidamente notificado con el requerimiento, este no cancela en el plazo establecido, haciendo práctico la advertencia de remitir copias certificadas al organismo del Ministerio Publico.

Se tuvo conocimiento que la Fiscalía hace el llamado a ambas partes al imputado y al agraviado, para accionar el inicio de Oportunidad a efecto de llegar a un acuerdo de pago de devengados en fechas que se le imponga, después de ello ejecuta las necesidades del proceso oportuno.

En cuanto, la audiencia única, donde se determina las medidas necesarias y obligatorias para el padre, puesto que el Juez sentencia embelesada bajo normas de comportamiento descritas en el artículo 58 del Código Penal. Sin embargo, esta orden no se

llega a cumplir, recayendo en incumplimiento a las Leyes tipificada en el artículo N° 59 del Código Penal.

Por lo expuesto, al ver que los sentenciados no cumplían con lo ordenado por el Juez, la Fiscalía realizaba el Requerimiento de Abolición de la detención de la condena, establecida en el artículo 60 del Código Penal, ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, pidiendo se de la sanción que corresponda.

Ante este escenario se reflejó la poca importancia del interés superior del niño y adolescente de parte del Juez, por la dilatación del proceso y demora, apremiándoles prácticamente a los sentenciados en darles las facilidades antes mencionadas, ya que por último les llegan a prorrogar la sanción.

Cabe mencionar que, antes de que se declare al procesado por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, primero ha tenido que existir un procedimiento civil por la falta de alimentación, y frente a la negación de lo ordenado por el Juez a partir de ese momento se inicia el proceso ante la Fiscalía por ser quien tiene la autoridad de denunciar la acción ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte.

Por el cual se involucra al demandado cuando se admite la demanda, para cumplir con el proceso y se permita liquidar las pensiones alimentarias.

En cuanto al análisis cualitativo el autor (Hernández, 2014, p. 65), informa que en la investigación cualitativa se tiene en cuenta el análisis el cual no se considera estándar.

Teniendo en cuenta a los datos recolectados, se aplicará la técnica no estructurada.

Además, el análisis cualitativo refiere a que los datos se trasladan por categorías en relación con los conceptos y definiciones.

Esta investigación nos ha permitido presentar y explicar la información recopilada sobre la regulación del Interés Superior del Niño y Adolescente con respecto a la sanción de Omisión a la Asistencia Familiar, a fin de llegar a establecer de qué manera funciona ante la justicia.

La alineación de la investigación científica está direccionada al estudio de problemas que se muestran en la sociedad, de los cuales podrían ser legales, sociales o de otro aspecto,

teniendo como fin de beneficiar a la sociedad. Al respecto, el investigador debe sujetarse a los mandatos éticos y morales desde el instante de la identificación de las causas del problema de investigación a efectos de brindarle una solución científica, ante esto, la información recopilada debe cumplir con patrones de confiabilidad y verificabilidad (Huamanchumo & Rodríguez, 2015, p. 190).

Asimismo, cabe mencionar que los 5 documentos analizados en la Guía Integral de Análisis Documental han sido cogidos como modelos de sus fuentes originales, siguiendo su integridad y originalidad al saber que son documentos legales pronunciados por el Ministerio Público, Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

Del mismo modo, la información hecha sobre las entrevistas responde en integridad y originalidad a las respuestas de los entrevistados, sin enmendaduras; así como también los entrevistados que colaboraron en la investigación están comunicados sobre su propósito y de la importancia de sus opiniones, facultando el uso y difusión de sus sentires con fines de investigación.

Por consiguiente, la obtención de los datos mediante los instrumentos de recolección, tanto como el de desarrollo integral de esta investigación el cual se hace con estricta fidelidad a los resultados adquiridos, teniendo presente el respeto a los derechos de autor y a los criterios que los integrantes conceden a su construcción.

III. Descripción de resultados

Otiniano y Benítez, (2014) define a la descripción de resultados como: [...] la fase de la investigación en la que se debe descifrar las respuestas, análisis de los instrumentos que se tomaron para la recolección de datos que creó aportes a la investigación con la intención de la indagación de un resultado más extenso. [...] (Pág. 26).

Los resultados de la presente investigación están de la siguiente forma: primero se presentan los resultados hallados y después se da a conocer los resultados obtenidos a través del análisis de registro documental; al aplicar las diversas técnicas de cogida de filiaciones antes señalados.

Ante el desarrollo y producto de los objetivos específicos son parte del transcurso para la consecución del objetivo general mediante la cual tienen como fin de aproximarnos a ello. Puesto que en la guía de entrevista utilizada se hapreciado presentar el objetivo principal como los objetivos específicos, dado que las interrogaciones proyectadas esta dirigidas a satisfacer las interrogaciones del problema general y problemas específicos de investigación.

Por otro lado, las preguntas planteadas han sido consideradas para la participación por medio de la entrevista en esta investigación, a cinco fiscales ente ellos una fiscal titular y 4 fiscales adjuntos y un asistente en función fiscal, así como a dos secretarios y un asistente judiciales y una abogada especialista en derecho penal los mismos que fueron considerados a criterio de la investigadora. En base a su observación en cuanto a los casos de delito por omisión a la asistencia familiar.

En tal sentido, los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas son los siguientes:

Objetivo General:

Analizar de qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017.

¿Cree usted que la actual regulación del delito de omisión a la asistencia familiar protege el interés superior del niño y adolescente?

Respecto a la actual regulación del delito a la negligencia a la asistencia familiar ante su protección del beneficio preferente del menor de edad, Vega (2018) sostiene que no, la actual regulación es este tipo de delito no protege efectivamente el provecho preferente del niño y adolescente, si fuese así no se vería en la actualidad casos de delitos por incumplimiento alimenticio.

Así mismo, Tuesta (2018) mencionó: También que No, pues la actual regulación no protege debidamente al interés superior del niño pues en la actualidad se vulnera mucho este derecho, el padre incumple reiteradamente el pago.

Coincidiendo con (Vega y Tuesta; Huamán, 2018) también sostiene que no, por el tiempo que dura dicha investigación, el menor de edad continúa esperando que su progenitor cumpla con abonar su pensión de alimentos.

A la vez Montoya (2018) también señaló que: No, porque la materialización del Principio del Interés Superior del Niño y Adolescente debe traducirse en medidas efectivas que traigan como consecuencia del acatamiento en el compromiso alimentario a favor de los menores alimentistas. Por lo cual, en muchos casos se analiza las deudas de los alimentos impagas y sanciones penales.

Por otro lado, Obregón (2018) dice: Pienso que el Art. 148 del Código Penal peruano no protege de forma efectiva e interés superior del niño dado el derecho penal un sistema punitivo, está pensando en castigar a la persona que omite la asistencia familiar mas no dar una solución adecuada a la misma, dado que al privar de su libertad a quien comete el delito, se hace mucho más difícil o imposible que se cumpla con la Resolución Judicial, o retrasando su cumplimiento.

Asimismo, mencionó que algunos autores opinan que, no todo beneficio de forma jurídica tendrá un tutor, por lo cual la parte material tiene un enfoque claro de la protección de los derechos el cual es considerado en el bien común. Aduciendo que esta sería una prisión por deudas, sin embargo, esto no es así, dado que el vínculo familiar debe ser protegido por el orden público.

Según, Quispe (2018) sostiene que es una norma muy frágil, ya que se limita a describir la omisión de cumplir lo establecido por mandato judicial solamente; cuando debería hacerse mención a la obligación del padre hacia su hijo, que es bastante amplio y no basta con lo establecido por una resolución judicial. Además, la pena por dicha omisión es muy irrisoria, pues debería ser más dura (p. 95).

Asimismo, Canepa (2018, p. 106) señaló que, debe existir una regulación que sea más eficaz a fin de proteger los intereses básicos del niño y adolescente. Ya que es la ley actual no se está adecuando una debida seguridad al menor de edad.

Farro (2018) al igual que Canepa precisó que se protege el interés superior del niño y adolescente pero que igual monitorear al cumplimiento de los derechos de los menores o adolescentes, ya que cada uno tiene una atención especial, carencias sociales diferentes (p.54).

Gonzales (2018) sostuvo que: En realidad se ha dado un gran salto hacia adelante si lo comparamos con el proceso que se seguía antes de la entrada en vigor del Decreto Legislativo N° 1194 del Proceso Inmediato en que los procesos de Omisión a la Asistencia Familiar demoraban en el rango de 3 a 4 años e incluso algunos prescribían.

Análisis e Interpretación: se pudo analizar e interpretar que tal como hemos obtenido respuestas de dicha pregunta, es que tres de los siete entrevistados han señalado que si se protege el interés superior del niño, deduciendo que uno de ellos cree que si se protege y los otros dos entrevistados afirman que la regulación del delito debe velar por el interés supremo del menor en el distrito de Puente Piedra, pero que igual se debe ver los derechos fundamentales de los menores de edad porque cada caso en concreto son distintas por carencias sociales que tienen y a la vez mencionan que en la actualidad ha cambiado por que si lo comparan con el proceso de antes de que entre en vigencia el Decreto Legislativo N° 1194 de la gestión rápida en que dichos procesos de los delitos de omisión a la asistencia familias duraban de 3 a 4 años y hasta prescribían. Pues ante este Decreto Legislativo antes referido, podemos resaltar que no se está llevando un éxito a que los procesos se realizan con eficacia porque tanto como en el Ministerio Publico y en los Juzgados de Lima Norte demoran estos procesos por la misma carga procesal que existe.

Por otro lado, siete de los diez entrevistados señalaron que la medida de la infracción de la omisión a la asistencia familiar no resguarda el beneficio preferente del menor de edad, porque la materialización del Principio del Interés Superior del Niño y Adolescente debe traducirse en medidas efectivas que vengan como consecuencia el cumplimiento de la obligación alimentaria. Sin embargo, en muchos casos se analiza deudas de los alimentos impagas y sanciones penales atenuadas o benevolentes en pro del condenado y que en muchos casos no se cumplen, además por el tiempo que dura la investigación, el menor de edad continúa esperando que su progenitor cumpla con abonar su pensión de alimentos.

Así como también mucho se vulnera el artículo IX del Título Preliminar del código de los Niños y Adolescentes el cual es un derecho el interés superior del menor de edad, de modo que demora mucho la investigación que se realiza y finalmente porque no son efectivas las medidas para el cumplimiento de estas.

¿Cuál es la ley que ampara al interés superior del niño y adolescente para tutelar su derecho en los delitos de omisión a la asistencia familiar?

Vega (2018) consideró que: Existen varios instrumentos jurídicos que ampara el interés superior del niño y adolescente. Como la ley 30466, donde plasma parámetros y restricciones a favor del menor de edad.

Tuesta (2018) manifestó que el Código de Niños y adolescente, la Constitución Política del Perú entre otros dispositivos legales amparan el beneficio preferente del menor de edad para tener un tutor.

Montoya (2018) señaló que el Artículo XI del Título Preliminar del Código Penal de los Niños y Adolescentes, el Artículo IV de la Constitución Política del Perú y el Artículo 149 del Código Penal.

Canepa (2018) señaló en nuestro ordenamiento jurídico tenemos varios dispositivos legales, como el Código de niños y adolescentes y la constitución Política del Perú. Pero en específico para la sanción que contempla el Código Penal que está tipificado en el Art. 149.

Para Huamán (2018) el beneficio preferente del menor es tutelado por el artículo 149 del Código Penal en el primer párrafo.

Elías (2018) sostuvo que la Ley N° 27337.- aprueba el nuevo código de los niños y adolescentes. Ley N° 27337, ley que vela por el cuidado especial, cautelando de una manera imperiosa las normas consagradas en ella.

Obregón (2018) manifestó que existe la Ley N° 27337, que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes.

Asimismo, Quispe (2018) manifestó que no está una ley definida que pueda amparar al beneficio primordial del menor frente a estos delitos; solamente se aplica el Código del niño y el adolescente, y supletoriamente el Código Civil, Procesal Civil y las normas fundamentales.

Elías y Obregón coincidieron con la misma Ley al igual que Farro (2018) que también mencionó que la Ley N° 27337- Código de los Niños y Adolescentes.

Para Gonzales (2018) tiene el Decreto Legislativo N° 1194, que contempla la gestión rápida.

Análisis e Interpretación: Se puede apreciar que de los diez entrevistados, ocho entrevistados señalan que existen varios instrumentos jurídicos que amparan el beneficio supremo del menor los mismos que detallan como Ley N° 27337 Código de los Niños y Adolescentes, artículo 4 de la Constitución Política del Perú y el artículo 149 del Código Penal, de los otros dos una Fiscal Provincial hace referencia que ampara el interés superior del menor el Decreto Legislativo N° 1149 para evitar los delitos de flagrancia, y un asistente en función fiscal señala que no hay una ley específica que ampare sus derechos.

Por tanto, cabe precisar que la Ley 27337 es la que regula el Código de los menores de edad y que en su artículo IX del Título Preliminar se encuentra el beneficio supremo del menor, para generar mayor concientización en los poderes del Gobierno a nivel Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como tal lo menciona el artículo N°4, para fomentar una relación directa entre la madre y el anciano, sino se cumple la sanción puede contemplar hasta 3 años.

Ante lo expuesto no cabe duda de que el beneficio supremo del menor está bien protegido y amparado ante toda esas leyes y normas que hay porque no solamente están esas leyes porque también está amparado internacionalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, artículo N°16, donde la Convención sobre los

Derechos del Niño, artículo N°1, 3 y 9 dan a conocimiento de los derechos como tal. Sin embargo, nuestra sociedad no se llega a cumplir al cien por ciento estos dispositivos legales. Por ello existen niños y adolescentes desamparados.

¿A su criterio el interés superior del niño y adolescente prevalece sobre toda norma para resolver los procesos del delito de omisión a la asistencia familiar?

Sobre si prevalece sobre toda norma para resolver los procesos del delito de OAF en el sistema penal peruano, Vega (2018) sostiene que:

Sí. Pues es un principal derecho acaparará nuestra Constitución y resguardados por el Código del niño y adolescente concordante con derechos internacionales; por ende, los derechos del niño deben ser protegidos prevaleciendo más que otros derechos pues se encuentran en vulneración.

Tuesta (2018) de igual forma sostuvo que si, pues el derecho al menor debe prevalecer ante otro derecho pues se encuentran en vulneración el sustento básico como es la alimentación, vestimenta, recreación, salud, para ello los padres deben brindar la protección necesaria al menor.

Elías (2018) también manifestó que: Si, tratándose del desarrollo de una persona indefensa, que se considera como el futuro de nuestro país, entonces si no lo aturamos sobre todas las otras normas, estaríamos deshumanizando a la sociedad, teniendo en cuenta que son el futuro de nuestro país.

Mientras que Canepa (2018) señaló que, debería ser así pues los derechos del niño y adolescentes se encuentran institucionalizados a nivel nacional e internacional. Además, debe prevalecer ante otra norma como es bien saber se encuentra es nuestra carta magna.

Obregón (2018) sostuvo que el beneficio supremo del menor debe estar siempre protegido, más aún en caso en que se debe resolver un procedimiento familiar, pero sobre todo debemos tener en cuenta que se debe realizar la ponderación de derechos en caso de ser necesario.

Asimismo, Farro (2018) señaló que, a su criterio si debiera prevalecer sobre toda norma, pero sin dejar de lado las Convenciones Internacionales en favor de los menores y adolescentes.

Sin embargo, Huamán (2018) consideró que no, por cuanto en la vía penal y las normas procesales con garantías de los derechos del imputado o investigado, además considerando que la libertad se restringe como última ratio. El interés superior del menor prevalece más en la vía civil.

Aunada lo expuesto el autor Gonzales (2018) también señaló que: No prevalece el beneficio supremo del menor porque cuando ya son sentenciados los procesados por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en el caso que sean primarios, se les sentencia con el castigo de su libertad y si no cumplen con las normas de comportamiento el Ministerio Público solicita la Revocatoria por incumplimiento, el Juez los Amonesta y no les revoca la pena suspendida en forma directa, pese a que está dentro de sus facultades, entonces con ello queda claro que no está siendo resguardado en primer término en beneficio supremo del menor porque el colocar la pena suspendida y no revocarle en forma inmediata se está prefiriendo el interés del sentenciado.

Montoya (2018) también sostuvo que: No siempre los Jueces penales y el Representante del Ministerio Público también tienen que garantizar la plena vigencia del Principio de Legalidad que incluye la sanción y las Normas y Principios que los regulan a lo que tienen derecho todas las personas involucradas en el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en calidad de imputados.

Quispe (2018) sostuvo que: Según la teoría, este es un principio que, si prevalece sobre toda norma, más aún que está regulado en Convenciones y Tratados Internacionales; pero en la práctica no sucede eso, ya que muchos factores, tales como la demora de la remisión de los actuados del PJ a MP demora muchísimo, asimismo, por la demasiada carga procesal que padece el MP, muchas veces se demora avanzar.

Análisis e Interpretación, de los diez entrevistados tres sostuvieron que el beneficio supremo del menor si prevalecen sobre toda norma para resolver los métodos de los delitos de omisión a la asistencia familiar, mientras los otros tres entrevistados señalan que deberían prevalecer, y los cuatro entrevistados manifiestan que no prevalecen sobre toda norma.

De lo antes mencionado podemos deducir que los tres entrevistados que mencionan que si prevalece sobre toda norma para resolver dicho proceso del delito de O.A.F agregan que dichos deberes están en la Constitución y en el Código de los Niños y Adolescentes y los derechos internacionales y debe prevalecer ante cualquier otro derecho porque se encuentra en vulneración de un sustento para su desarrollo del menor y que para ello los padres deben de dar protección correspondiente y los otros 3 entrevistados suponen que debería prevalecer ya que los valores de los niños y adolescentes están institucionalizados nacional e internacionalmente, Así mismo precisan que mucho más a un es estos tipos de delitos como es el delito de O.A.F, y los cuatro entrevistados que sostienen que no prevalece el beneficio supremo del menor en la vía penal y otras normas con garantías de los derechos del procesado, además añaden que cuando los sentencian a los sujetos por el delito de O.A.F en el caso que son primarios, se les da pena suspendida y no cumplen con las Reglas de conducta y cuando el Ministerio Público solicita la Revocatoria por no acatar dichas normas el Juez los amonesta y no les revoca la pena estando dentro de sus criterios al hacerlo. Dado que no siempre los jueces también tienen que garantizar el principio de legalidad, puesto que en la práctica no sucede a que se prevalezca dicho derecho por muchos factores que se presentan en el proceso uno de ellos la gran ineficacia en la remisión de actuados del Poder Judicial al Ministerio Publico.

Ante este escenario pues se puede aducir que no siempre prevalece el interés superior del menor ante toda norma menos aun en estos procesos de los delitos de O.A.F. por lo que se aprecia la vulneración de los derechos de los menores de edad y cuando paso esto el agraviado alimentista se encuentra desprotegido ante estos hechos desnaturalizados.

¿Cuál es la medida de protección más adecuada para tutelar el interés superior del niño y adolescente ante la imposibilidad de afectar el delito de la omisión a la asistencia familiar?

Sobre una medida de protección correcta para tutelar el beneficio supremo del menor frente la imposibilidad de afectar el delito de OAF, Vega (2018) considera que: La medida de protección más adecuada es que se cumpla de manera rápida y efectiva del pago, pues el Juez debe solicitar de manera oportuna si el sentenciado tiene bienes, como se sabe el fin de esta infracción es el acatamiento de la asistencia hacia el alimentista.

Asimismo, Huamán (2018) piensa similar a Vega por que manifiesta que las medidas de cumplimiento de pago de devengados se satisfagan en la vía civil, mediante medidas cautelares a los diversos obligados, no solo el padre biológico, aunque sea injusto, pero solo así se tutelaría el beneficio supremo del menor.

Mientras que Montoya (2018) señaló que las medidas cautelares que establece el Código Procesal Civil con la finalidad de afectar el patrimonio del obligado y con ello hacerse cobro de la deuda alimentaria existente lo que debe tener un mayor margen de ejecución y afectación en favor del demandante por alimentos.

Tuesta (2018) señaló que en un primer plano el Estado brindar un fondo necesario para el menor afectado o afecto que se encuentre por el delito de omisión a la asistencia familiar, para ello se realizar una evaluación para cada grupo familiar si tiene los recursos económicos.

Canepa (2018) manifestó que el Gobierno debe tener en cuenta a los niños y adolescentes para que sus derechos no sean subestimados y se mantenga a salvo en la sociedad.

Elías (2018) mencionó que toda providencia referente al beneficio supremo del menor que adopte el Gobierno será ejecutada por sus poderes como el Poder Legislativo, Ejecutivo, sus Ministerios, respetando sus derechos.

Obregón (2018) explicó que existen medidas de cuidado ante las decisiones más acordes para identificar sus necesidades, esto se va a dar en base a su interés superior y el principio de idoneidad, dicha medida debe garantizar que la niña, niño o adolescente viva en una familia o en un entorno familiar adecuado, para cubrir la asistencia familiar para que el estado sea el responsable de cubrir la necesidad de su alimentación.

Para Farro (2018) proteger a los menores de edad que se estén en una situación de riesgo o abandono, correspondiendo al Estado en forma subsidiaria, el velar por las personas.

Mientras que Gonzales (2018) señaló que la medida más idónea seria que se impida colocar al sentenciado una pena suspendida, debería ser una pena efectiva, aunque por ser primera vez pueda convertirse con servicios comunitarios, pero luego ante el primer incumplimiento se le Revocaría la Pena en forma inmediata.

Quispe (2018) mencionó que una de las medidas ante estas cosas sería la creación de una ley específica que protege el beneficio supremo del menor, al margen del Código del niño y adolescente y el Decreto Legislativo 1297 sobre el amparo del niño, niñas sin protección de sus padres; yo creo que eso mejoraría esta situación.

Análisis e Interpretación: Tres entrevistados mencionan que una de las medidas adecuadas es que deberían hacer cumplir de una forma muy rápida y efectiva el cumplimiento de pago de devengados. Y conforme a las proporcionadas cautelares que está en el Código Procesal Civil con el fin de que se pueda tocar el patrimonio del procesado y de ello realizar el pago monetario de la deuda de los alimentos, y de los otros cinco entrevistados indican que el Estado es el garante del menor cuando el menor de edad este desamparado o si algún derecho se le ha vulnerado, puesto que los dos últimos entrevistados se encuentra la Fiscal Provincial en la que manifiesta que la medida más idónea sería que no se le brinde al sentenciado una pena suspendida, sino una pena efectiva, y el Asistente en Función Fiscal precisa que una de las medidas sería la creación de una ley específica que protege el beneficio supremo del menor.

Por lo cual, dichas medidas cautelares que existe en nuestro Código Procesal Civil y las facultades del Estado hacia el menor deben primar para una garantía oportuna y estable para los menores que se encuentran en riesgo de vida.

Objetivo específico 1

Determinar cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

¿Explique usted a que se debe que la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código Penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

Respecto a la explicación a tener en cuenta en la prórroga del tiempo de detención de la pena del inciso 2 del artículo 59 del CP incide en la valoración del beneficio supremo del menor, Vega (2018) sostiene una medida de protección reglamentada en el Código Penal y queda a discreción del Juez aplicar la prórroga u otra medida, no actuando de manera consecutiva.

Asimismo, Tuesta (2018) refiere que: Como se sabe se encuentra establecido en el Código Penal, pues la Corte Suprema ha establecido, castigos por el desacato al cumplimiento de normas de comportamiento dadas por el Juez para cada caso en concreto.

Por otro lado, Canepa (2018) señala que el aplazamiento del periodo de interrupción del castigo transgrede en el interés superior al menor, porque el menor en este tiempo se encuentra afecto a sus derechos, pues por un lado se tiene más consideración al sentenciado por otro lado se deja en vulnerabilidad al alimentista que está en la necesidad de sus derechos básicos.

Canepa y Gonzales (2018) tienen una respuesta parecida ya que Gonzales nos menciona que precisamente a que se le está prefiriendo al sentenciado como persona y no al beneficio supremo del menor, de lo contrario no se Revocaría de forma inmediata la pena suspendida.

Mientras que Elías (2018) Indica que: La prórroga por ningún motivo debe superar los tres años, en realidad, los padres irresponsables cuando saben que la pena será efectiva así sea por un año, cambian y deciden pagar, teniendo en cuenta que se trataría de un delito por omisión de alimentos y se trataría de personas que en su mayoría son padres irresponsables.

Por su parte Obregón (2018) señala que en el caso que el juez prorrogue la sanción del castigo correspondiente al beneficio supremo del menor, antes de ejecutar la pena se intenta que el deudor cumpla con el abono de la deuda o el resarcimiento civil.

Igualmente, Quispe (2018) señala que influye mucho, ya que al realizarse o determinarse una pena bajo suspensión, lo que se trata de salvaguardar el beneficio y el derecho integro de los menores y adolescentes, pues así, el sentenciado pague el monto adecuado de las pensiones devengadas bajo reglas de conducta, y tiene que ser cumplidos cabalmente.

Para Farro (2018) incide a que se ven protegidos hacer efectivo la cancelación de alimentos al apoyo del deudor alimentario.

Huamán (2018) explica que la aplicación de la prórroga tiene dos dimensiones, se debe para darle la oportunidad al sentenciado que se ponga a derecho y cumpla la obligación

impuesta en la sentencia, por otro lado, también se aplica en la creencia de que el investigado pueda cumplir tal pago de devengados estando fuera de la cárcel por las posibilidades económicas que pueda tener a raíz de su trabajo ambos intereses aportan a “prevalecer” el Interés Superior del Menor.

Finalmente, Montoya (2018) menciona al inciso 2 del Artículo 59 del Código Penal tiene como finalidad darle la oportunidad al condenado a que se cumpla con las normas de Conducta los cuales están el abono de la deuda de alimentos y la Reparación Civil lo que no podría cumplir si es que se le revoca la suspensión de la pena. Hecho que es valorado por el juez.

Análisis e Interpretación: Como hemos visto que dos entrevistados manifiestan que es una medida de protección fijada en el Código Penal y queda a facultad del Juez dar la prórroga u otra opción, por lo que otros dos de los entrevistados señalan que la prórroga de suspensión de la pena transgrede en el beneficio supremo del menor, porque se le está dando más consideración al sentenciado y no en el caso que si no se le revoca la pena suspendida. Por otro lado, una Fiscal Provincial explica que los padres irresponsables cuando saben que la pena será efectiva cambian de opinión y pagan sabiendo que sería delito de incumplimiento de alimentos. Sin embargo, cinco entrevistados mencionan que incide ya que al darle una pena suspendida estaría dando un beneficio al menor y adolescente y oportunidad al sentenciado porque de esa manera el condenado pagara el monto respectivo de los devengados y reparación civil.

Ante esta incertidumbre la mayoría de los entrevistados señalan que el Juez al darle prórroga ininterrumpida del castigo al condenado podría hacer realidad los pagos que debe sobre el pago en beneficio supremo del menor. Sin embargo, el Tribunal constitucional ha resaltado que no es necesario que se le de las dos primeras opciones del artículo 59 del Código Penal los mismos que son: Amonestar al infractor, Prorrogar la cesación del castigo o Revocar la cesación del castigo. Puesto que se le puede revocar directamente ya que el Juez tiene la facultad y el criterio de hacer cumplir y valer dicha norma al no cumplirse las normas de comportamiento estando procesado con pena suspendida. Puesto que el Juez al brindarle esa opción de amonestar o prorrogar al sentenciado se estaría dando más oportunidades pese a que ya se le ha otorgado como primero de ellas el principio de oportunidad, luego pena suspendida y darle esta última otra oportunidad amonestándole o

prorrogándole la pena al obligado, puesto que se ve que el Juez le está dando muchas facilidades al condenado. Y no dándole importancia al niño y adolescente.

¿Cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código Penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

Vega (2018) sostiene la prórroga del periodo de suspensión si es reincidente al beneficio supremo del menor, pues el agraviado pensara al darle este beneficio se estaría dando caso omiso, protegiendo al sentenciado.

Sin embargo, Tuesta (2018) considera que el Juez debe actuar de manera discrecional para cada caso concreto, esto quiere decir que puede decidir qué medida o sanción puede aplicar sin llegar a la afectación a los derechos del menor.

Por su parte Canepa (2018) explica que: La prórroga es una de las tres medidas aplicadas en el artículo 59 del Código Penal pues en la práctica los magistrados de acuerdo al estudio de cada caso en concreto.

Mientras Elías (2018) menciona que Incide, por cuanto no le darían la importancia debida al cumplimiento del pago de los devengados correspondientes.

Puesto que Obregón (2018) refiere que la forma en que incidiría sería que, al cumplir el deudor con el pago de la deuda, el niño o adolescente se vería beneficiado con este pago.

Para Huamán (2018) que, las ambas dimensiones explicadas en la pregunta N° 5 tienen trascendencia directa con el Interés Superior del Menor.

Mientras que Gonzales (2018) señala que: La prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del código penal afecta el beneficio supremo del menor porque luego de continuar el camino ante el Juzgado de Paz, luego ante el Juzgado Penal con la presentación del Proceso Inmediato y ser sentenciado sin embargo nuevamente ve obstaculizado el poder obtener los alimentos el menor.

Por otro lado, Farro (2018) menciona que pues resulta desproporcional a los intereses de la persecución y sanción penal.

Mientras que Quispe (2018) señala que influye de manera cómo concluye los procesos de esos tipos, y generalmente concluye por terminación anticipada, conclusión anticipada del proceso, etc. Todo ello en beneficio del menor, sobre todo que el padre pague la obligación como tal y la deuda de pensiones devengadas. Por esos motivos es que se realizan las prórrogas, con la finalidad de beneficio de menor.

Para Montoya (2018) es: Otorgándole más plazo al sancionado para el cumplimiento de las normas de comportamiento para lograr que el menor alimentista tenga la posibilidad de recibir el desembolso de los pagos alimentarios adeudadas decisión que se toma en función al beneficio supremo del menor.

Análisis e Interpretación: De lo que se ha podido apreciar es que dos entrevistados deducen que incide en la valoración del beneficio supremo del menor en la que el agraviado pensara al darle este beneficio donde decaería en desacato a ello y se estaría salvaguardando al condenado y además afecta al interés superior del niño por los procedimientos seguidos y es ahí donde se ve obstaculizado el derecho de los alimentos, dos de los entrevistados sostienen que el Juez tiene el criterio de evaluar cada caso en concreto para que hagan cumplir conforme a ley sin vulnerar los derechos del niño y adolescente, por consiguiente otro entrevistado señala que incide en que no le brindarían la importancia pertinente al cumplimiento de pago de devengados, por otro lado otro entrevistado indica que la manera en que incidiría es que cuando el deudor cumple con el pago de devengados el menor estaría beneficiado, otro de los entrevistados señala que deviene desproporcional a los interés de la sanción penal y tres de los entrevistados mencionan que al darle esa prórroga al sentenciado le favoreciera al agraviado ya que así podría cumplir con los pagos que adeuda los que son los devengados, de modo que tiene trascendencia ante el beneficio supremo del menor .

No cabe duda que el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal que establece el aplazamiento del plazo de interrupción del castigo, esto aplicado a criterio del Juez, de modo que los Jueces deberían de motivar dichas sentencias de manera justa porque el inciso 2 del artículo 59 del CP es una de las opciones que se puede o no aplicar para el sentenciado, porque si ya el sentenciado no cumplió con su oportunidad de cancelar sus deudas devengadas en las fechas establecidas, pues no se le debería dar otra oportunidad porque sobre todo incide mucho en afectar el derecho a la alimentación del menor, por lo mismo

que de dichos procesos que se siguen demoran demasiado y la espera ante este derecho alimentista es vulnerado ante todo este entorpecimiento en beneficio del condenado.

¿Cuál es la motivación que el Juez decide sobre el interés superior del niño y adolescente en los delitos de omisión a la asistencia familiar?

Respecto a la motivación que el Juez decide sobre el beneficio supremo del menor en los delitos de OAF, Vega (2018) manifiesta que:

La motivación principal que tienen los Jueces la informalidad de las normas de comportamiento, principalmente el abono la cual debe cumplir. Esto dependerá de cada caso en concreto evaluándolo pues no se debe aplicar la misma pena y medida para todos.

Para Tuesta (2018) la motivación que el Juez toma en el caso de delitos de negligencia a la asistencia familiar es que el sancionado debe cumplir con las reglas de conducta impuestas en una sentencia para ello evaluara la conducta del sentenciado y además las ganas de querer cumplir con el pago.

Gonzales (2018) manifiesta que, la motivación que tiene el Juez para decidir por encima de todo el beneficio supremo del menor es cuando ante el incumplimiento de las Reglas de Conducta del sentenciado se ve reflejado cuando le Revoca en forma inmediata su pena suspendida.

Canepa (2018) precisa que la motivación del Juez es efectuar el abono de las retribuciones devengadas a fin de proteger al menor.

Asimismo, Obregón (2018) piensa al igual que Canepa ya que manifiesta que la motivación del juez para prorrogar la cesación de la penalidad es el cumplimiento del abono monetario de la deuda, la cual no se cumpliría en caso se prive de la libertad al condenado

Por otro lado, la exigencia de pagar la reparación civil, es de carácter de urgencia para identificar los principios del Gobierno para que sean dignos de tutelar, más aún si el condenado ha cumplido con cancelar por lo menos 50% adeudado por lo que estaría incurso dentro de la excepción que señala la Sentencia Casatoria N° 131-2014.

Sin embargo, Elías (2018) señala que la pronta necesidad de la alimentación del menor para su supervivencia y su desarrollo personal.

Por su parte Huamán (2018) precisa que el Juez decide revocar la pena suspendida en la confianza que estando el sentenciado privado de su libertad para acogerse a un beneficio penitenciario debe necesariamente pagar los devengados de alimentos.

Farro (2018) señala que los derechos fundamentales deben ser efectivos en beneficio supremo del menor.

Seguidamente, Quispe (2018) precisa que: La motivación trascendental de una decisión judicial sobre estos casos, es el beneficio y la protección de los Derechos del menor; pues a veces cuando se condena a una persona la condena exclusiva de independencia ya no hay posibilidad de pagar íntegramente la deuda; mas solo la reparación civil que es mínimo. Por eso es que dan salidas alternativas, como es la Terminación Anticipada, etc.

Por lo que Montoya (2018) menciona que:

Viene hacer la afectación de los derechos elementales y de necesidad básica para el crecimiento y desarrollo de la personalidad del menor agraviado, como es la alimentación propiamente dicha educación, salud y vestido entre otros que requiere el menor de edad imposibilitado para velarse por sí mismo.

Análisis e Interpretación: De los diez entrevistados un entrevistado señaló que la motivación que dan los Jueces es la infracción de las normas de comportamiento, poniendo en primer plano el pago que se debe cumplir, el siguiente entrevistado sostiene que la motivación del Juez es que el obligado debe cumplir con las Reglas de Conducta, mientras que dos entrevistados manifiestan que la motivación de Juez es hacer consumir el pago de la deuda la reparación civil, dado que otro entrevistado menciona que la eficaz necesidad de la alimentación del niño y adolescente para su subsistencia, otro entrevistado detalla que al revocar el Juez la pena al obligado puede acogerse a un beneficio para ello tendría que cancelar los devengados, otro entrevistado refiere que asegurar los efectos de los derechos que le corresponde a los menores, puesto que otro entrevistado señala que la motivación valiosa es una determinación ante esos delitos dando el beneficio y reguardo de los derechos del menor por que precisa que ay veces que cuando se les sentencia a pena privativa de libertad no habría como este cancele su deuda por ello es que existe esta opción, por ultimo un entrevistado resalta que deviene a la afectación de los derechos elementales para el desarrollo del menor.

Por lo expuesto distintos entrevistados tienen una opinión distinta respecto a la motivación que el Juez decide ante los delitos de O.A.F , puesto que señalan más que el Juez debe hacer cumplir las Reglas de Conducta otros entrevistados en no afectar los derechos del menor, otros que el Juez al revocar la pena suspendida al obligado ante todo que lo primordial esta ante todo el interés superior del niño puesto que revocando la pena de manera inmediata se estaría haciendo efectiva y dando importancia el interés superior del niño y adolescente. Como sabemos las normas de comportamiento del Artículo 60 del Código Penal el Juez aplica cuando al obligado se le ha dado pena suspendida, puesto que muchos de los sentenciados no cumplen con dichas reglas ya que una de ellas es cumplir con los devengados y cancelar la reparación civil al agraviado quien es el menor de edad. Es ahí donde se ve afectado el menor al hacer caso omiso el obligado.

¿Cómo define usted el delito de omisión a la asistencia familiar, y cuáles deben ser los requisitos legales?

La definición de la infracción de omisión a la asistencia familiar y sus requisitos legales, Vega (2018) señala que el incumplimiento de los derechos básicos que tiene toda persona siendo la alimentación, vivienda, vestimenta, salud, recreación, dando por consecuencia ante una omisión la pena.

Tuesta (2018) define que el delito de omisión a la asistencia familiar se contempla en el artículo N°149, para reprimir a quien no cumpla con su responsabilidad de orden judicial a favor del menor de edad.

Por su lado Montoya (2018) señala en lo que respecta el primer párrafo del Artículo 149 del Código Penal este consiste en la omisión de acatar o cumplir el requerimiento de pago expreso en cantidad, periodo y tiempo de cumplimiento que se hace al obligado mediante Resolución Judicial. Los requisitos deben ser: Resolución Judicial firme, destinatario identificado que provenga de autoridad competente y que se ha puesto en conocimiento del obligado en la forma y modo que establece la ley.

Canepa (2018) menciona que la falta definiría como el incumplimiento del abono de las personas devengadas.

Elías (2018) explica que la temática analizada a mayor amplitud pretende dar soluciones a la sociedad, para modificar las sanciones y se haga un desarrollo justo.

Para Obregón (2018) refiere que desde el sitio social es la declaración de falta de valores de amor, responsabilidad, por parte de la persona que omite la asistencia familiar a sabiendas de la necesidad y responsabilidad que como padre o madre tiene y la constitución lo establece.

De lo antes señalado también hace referencia aduciendo que, el derecho penal prolonga el tiempo del velatorio del derecho hasta la etapa de finalización. Asimismo, una infracción de riesgo, contra la familia. Los requisitos legales tienen que ser aplicados desde este punto de vista, es decir el solo incumplimiento debe ser castigado.

Por su lado Huamán (2018) define que: El delito de O.A.F es permanente que tiene su origen por el incumplimiento de una sentencia civil en materia de alimentos, se convierte en delito cuando el obligado incumple el pago económico impuesto en la sentencia, el mismo que va en perjuicio de un menor, porque el investigado de manera dolosa recae en la comisión del delito de O.A.F. Requisito: 1) Existencia de un dictamen que ordene la cancelación de la asignación de Alimentos con la debida medida al pago de pensión de devengados. 2) Que, haya negativa de pago del investigado ante el requerimiento judicial de pago. 3) Que, el imputado haya sido debidamente informado.

Farro (2018) define que el investigado tenga conocimiento de la denuncia en su contra, que la liquidación de pensiones debe ser aprobada y que exista una sentencia firme pese a ser debidamente requerido, los requisitos legales deben ser que el sentenciado sea debidamente notificado y con ello aprobado que tenía pleno conocimiento de su omisión.

Gonzales (2018) afirma que de debe tener en cuenta al sentenciado por Alimentos incumple con pagar al alimentista

Para Quispe (2018) el delito de O.A.F es un tipo de sanción que no debe exceder a los 5 años. A todo aquel que incumple u omite suministrar provisiones establecidos en una resolución judicial.

Requisitos legales: incumplimiento de Resolución Judicial que ordena prestar alimentos y simulación de obligación de prestar alimentos.

Análisis e Interpretación: Como hemos apreciado de los diez entrevistados dos entrevistados señalan que el Artículo 149 del Código Penal define que el que omite cumplir una resolución judicial será condenado con pena privativa de libertad no mayor de tres años, y otros tres entrevistados sostienen que es el incumplimiento de sus necesidades y derechos e incumplimiento de devengados de alimentos en la que recae una omisión de este hecho para una sanción correspondiente, finalmente cinco de los entrevistados explican que es uno de los problemas que hay en la sociedad que es un peligro para la familia por falta de valores quien omite la asistencia alimenticia en la que omite una sentencia tiene como consecuencia el delito de O.A.F, y los requisitos son Resolución judicial firme, haber sido notificado, y que exista la negación de pago de devengados.

En tal sentido cabe precisar que la sanción está tipificada en el Artículo 149 del Código Penal. Sin embargo este delito generalmente recae el castigo suspendido porque el Juez así lo ordena, la cual es un criterio desproporcional para los agraviados ya que se le está dando oportunidad al sentenciado para que supuestamente cumpla con su pensión alimenticia pero en mayoría esto no se llega a cumplir y pues este delito generalmente es cometido por padres irresponsables, inmaduros, que tienen problemas sociales y también que se hacen los desentendidos con el alimentista o porque estos padres están separados por distintos problemas.

Objetivo específico 2:

Establecer de qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

¿Explique a que se debe la frecuencia del delito de omisión a la asistencia familiar influye en el principio del interés superior del niño y adolescente?

Sobre a qué se debe la frecuencia del delito de OAF interviene en el beneficio supremo del menor, Vega (2018) explica que la existencia de vacíos en la norma, debería haber una unificación de criterios a fin de cumplir con el pago hacia el alimentista.

Tuesta (2018) sostiene la frecuencia de la infracción de omisión a la asistencia familiar es porque está fallando los medios de control social esto quiere decir el entorno

familiar, falta de educación, comunicación y las penas pues parece que lo que se quiere es castigar, pero no prevenir para no generar este tipo de delitos.

Por otro lado, Canepa (2018) señala que en su conocimiento y por las declaraciones instructivas de los imputados muchos alegan la falta económica esto quiere decir falta de trabajo, falta de estudios y carga familiar.

Asimismo Elías (2018) expresa que si no se cumple de forma económica se puede realizar un reclamo en el Perú, la frecuencia de juicios para solicitar una pensión alimentaria es la más frecuente y al concluir con la sentencia, no cumplen en el pago, pues no le dan la importancia debida, teniendo que hacer el respectivo requerimiento de ley y recién pasa al ministerio público para que se denuncie por la omisión a la asistencia familiar que con el nuevo procedimiento se trataría de un proceso inmediato y se le da la rapidez del caso.

Obregón (2018) explica que las problemáticas suscitadas con parte de la sociedad en general por lo cual debemos basarnos en el cumplimiento de los abonos.

Por su parte Huamán (2018) señala que: La frecuencia de la comisión del delito de O.A.F. Se debe a la falta de valores y responsabilidad del obligado de no saber asumir su condición de padre, por cuanto dicho comportamiento de los adultos influyen en el bienestar de un menor de edad es estos casos sobre sus hijos se observa la no prevalencia del beneficio supremo del menor.

Farro (2018) refiere al desinterés por parte del denunciado y conflicto de intereses entre ambos padres.

Gonzales (2018) menciona que: La frecuencia de la infracción de omisión a la asistencia familiar beneficia al supremo del menor porque el menor no cuenta con sus alimentos diarios y este delito se vuelve frecuente porque la norma creada incluso con el Proceso Inmediato termina resultando ser un saludo a la bandera por cuanto al momento de sentenciarlo se le condena con Pena Suspendida.

Por otro lado, Quispe (2018) explica que: Estos tipos de delitos es muy relacionado con el interés superior del niño y del adolescente, tanto desde el inicio de un proceso en el poder judicial y hasta que nos remiten al MP, ya que la obligación y responsabilidad del padre e hijo siempre esta.

Por su lado Montoya (2018) señala que: Porque a más casos por el delito de omisión a la asistencia familiar existen más menores afectados en sus derechos alimentarios y de crecimiento personal lo que es protegido por el beneficio supremo del menor, en consecuencia la vigencia de este último derecho se manifestara en gran medida cuando se adopten medidas de protección con la consumación del delito antes indicado o una vez judicializado este tenga resultado efectivo en favor de los menores alimentistas.

Análisis e Interpretación: Cabe precisar que ante lo expuesto de los diez entrevistados, cuatro explican que la frecuencia del delito a la O.A.F influye beneficio supremo del menor por falta de valores y conflicto entre los padres, uno de los diez entrevistados deduce que por vacíos de la norma y que debería hacerse criterios para que se cumpla el pago a los alimentistas, por otro lado uno de los entrevistados menciona que los obligados alegan que económicamente no están en sus condiciones porque no cuentan con trabajo estable entre otros, mientras que otro indica que cuando se dicta sentencia pues el sentenciado no cumple con el pago y se delega al Ministerio Público para que se con la finalidad de que se denuncie por el delito de O.A.F con la secuencia rápida que establece el Decreto Legislativo N° 1194. Sin embargo dos de los entrevistados detallan que afecta el beneficio supremo del menor, porque el alimentista no tiene sus alimentos cotidianos y este delito de incumplimiento de pensión alimentista se da frecuente en tanto que con el Proceso Inmediato no se cumple ya que la desde un inicio de dicho proceso en el Poder Judicial hasta que remitan al Ministerio demoran mucho y finalmente el Juez condena con Pena Suspendida, y el ultimo entrevistado precisa que a más delitos de dicha omisión más afectados hay en sus derechos puesto que cuando se adoptan medidas de protección con la consumación debe tener un resultado positivo a favor de ellos.

La frecuencia del delito de O.A.F influye en el beneficio supremo del menor porque proviene de padres que no asumen su responsabilidad humana para con sus hijos. Además, que los Juzgadores no aplican un criterio influyente en amparo del beneficio supremo del menor Puesto que existe el Decreto legislativo N° 1194 de Incoación del Proceso Inmediato la cual hace a que se realice de manera rápida este proceso, de modo que este Decreto en la práctica no se muestra de forma inmediata ya que con ello y con el incumplimiento de pasar pensión alimentista al menor se denota que se vulnera sus derechos del niño y adolescente. En consecuencia, no se ve que la aplicación del el Artículo IX del Título Preliminar donde ampare a los menores, pues afecta de forma directa esta norma al igual que otras.

¿Cree usted, que los Jueces están dando importancia el interés superior del niño y adolescente en el proceso del delito de omisión a la asistencia familiar?

Vega (2018) menciona que No, en la realidad los Jueces parece que solo quieren cumplir con la norma, no viendo más allá, buscando una solución entre el omisor y el alimentista, que lo más importante debería prevalecer el núcleo familiar.

Siguiendo la misma idea Tuesta (2018) señala que a su parecer No, pues los Jueces solo se están dedicando a cumplir lo que dicen las normas y no ir más allá como es que se genera este tipo de delito, cuáles son las verdaderas causas para su incumplimiento.

De igual forma Canepa (2018) considera que no, que los Jueces solo aplican la norma pensando proteger al menor, pero a la larga no brinda gran beneficio al contrario fracciona al núcleo familiar.

Asimismo, Gonzales (2018) también considera que no se le está dando mayor importancia al beneficio supremo del menor porque pese a que el sentenciado ya se le ha requerido bajo apercibimiento de ser denunciado que cumpla pagar con los alimentos sin embargo reincide en lo mismo, y por otro lado, siendo sentenciado con Pena Suspendida tampoco cumple con las Reglas de Conducta porque sabe que lo Amonestan pero no se le revocara en forma inmediata su Pena para hacerla efectiva.

Por otro lado, Montoya (2018) de igual forma menciona que: Creo que en algunos casos no se está adaptando las medidas judiciales más apropiadas en favor de la Iniciación del beneficio supremo del menor y ellos se reflejan en la gran cantidad de casos resueltos que están en la etapa de ejecución penal por no cumplir con las normas de comportamiento que se les impone a los condenados en este delito.

Por su parte Farro (2018) destaca que muy poco, por la recargada labor y cantidad de Procesos Penales.

Para Huamán (2018) sostiene que algunos jueces si, ya que depende de la discrecionalidad del Juez, como se mencionó en la pregunta. N° 3, el Juez penal debe ser garantista en el debido proceso y los derechos que le asiste al investigado.

Sin embargo, Elías (2018) menciona que Si, teniendo en cuenta las ultimas disposiciones legales donde se procede la Incoación del Proceso Inmediato, por lo que se ha hecho de carácter obligatorio

Asimismo, Obregón (2018) también coincide con Elías ya que piensa que Si, los jueces en la medida de lo posible están aplicando a norma pensando en el beneficio supremo del menor.

Quispe también refiere que por supuesto que sí, precisamente por eso es que muchas veces los procesos terminan con audiencias de terminación o conclusión anticipada ya que de esa manera se le condenaría al denunciado solamente con pena suspendida, teniendo como prioridad de abonar la deuda devengada consecuencia de ello.

Análisis e Interpretación: Appreciamos que de los diez entrevistados cinco entrevistados consideran que los Jueces no están dando importancia al beneficio supremo del menor del delito de omisión a la asistencia familiar porque los Jueces solo aplican la norma sin el criterio a beneficio del menor, ya que al condenado ya se le ha pedido bajo apercibimiento de ser denunciado que cumpla en cancelar los alimentos pero este reincide, y teniendo pena suspendida también no cumple con las reglas de conducta porque ya tiene conocimiento que lo amonestaran y que no le revocaran la pena por ello tampoco adaptan medidas dado que se denota en la gran cantidad de casos resueltos que están en la etapa de ejecución. Uno de los entrevistados señala que no tanto el Juez está tomando importancia al interés superior del menor ya que existe recarga procesal, y cuatro entrevistados mencionan que el Juez si está tomando importancia aplicando la norma tomando en cuenta el beneficio supremo del menor a discrecionalidad y con el proceso de Incoación Inmediato así como también por ello los procesos con terminación anticipada para que puedan pagar la deuda de pensiones correspondientes.

Cabe resaltar que la mayoría de los entrevistados manifiestan que los Jueces no toman mucha importancia el beneficio supremo del menor en el delito de O.A.F. ante lo mismo que dan más beneficios al condenado dándoles oportunidades y ello afecta al menor por la lentitud del proceso y el incumplimiento de todo lo que se le brinda al obligado, a pesar que el Juez tiene la facultad de considerar un criterio más rígido como es el de revocar la pena suspendida al sentenciado porque así evitarían muchos obligados en caer en un desacato judicial y en forma natural el incumplimiento de los alimentos a los hijos menores. En cuanto

a los que dicen que si toman importancia se basan en que al darles esas oportunidades a los condenados podrían así pagar sus devengados a los alimentistas, puesto que al verse estos casos es demasiado que se les brinde esas cadenas de facilidades, ya que así generan un largo proceso y reincidencias en sus desacatos.

Análisis documental

Respecto, al objetivo general: Analizar de qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017. Se ha analizado el siguiente documento.

Resolución N° Dos, del Tercer Juzgado de la Investigación Preparatoria – Sede central del Expediente N° 06566-2017-34-0901-JR-PE-03

En el presente documento materia de análisis para justificar el objetivo general, fue amerito de la Resolución N° Dos de fecha dieciocho de junio del dos mil dieciocho, proceso de Delito de Omisión de Asistencia Familiar presentado por la representante legal del menor agraviado Mary Elizabeth Mejía Jacinto, al principal solicitando se revoque la condicionalidad de la pena al sentenciado por incumplimiento de pago de pensiones devengadas y reparación civil y advirtiéndose de autos que el sentenciado Zenon Arone Salcedo, no ha cumplido con el pago íntegro de la reparación civil y pensiones devengadas a quien se le ordeno en el tiempo a dos de mayo del año dos mil dieciocho adeudando hasta la una cuota vencida, este Juzgado de Investigación Preparatoria ante el Ministerio Publico – Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra, al respecto uno de los considerando de la presente resolución se fundamenta en el primer considerando un criterio para proceder, por lo que dispuso:

Requerir por última vez al sentenciado Zenon Arone Salcedo a efectos de que cumpla con cancelar el monto íntegro de la Reparación Civil en las pensiones devengadas cuyas cuotas se encontraban vencidas, luego de haber sido notificado quedo su caso incumplido.

El Juez de Investigación Preparatoria de Lima Norte ha brindado una última oportunidad al sentenciado Zenon Arone Salcedo pese a que dicho condenado tiene un mandato judicial bajo reglas de conducta, dado que el sentenciado no ha cumplido con dichas normas de comportamiento, de tal manera recae en efectos de incumplimiento de reglas de

conducta la cual está tipificada en el artículo 59 del Código Penal en la que el Juez debe sancionar al infractor.

Ante este pedido de parte de la representante del menor quien es la madre, de dicho desacato por parte del sentenciado, el Juez no acepto su solicitud de anulación de suspensión del castigo de la recurrente.

Análisis: Por lo tanto, se aprecia la poca importancia del beneficio supremo del menor y la vulneración de dicho derecho dado en vez que se le dé prioridad al menor se está dando al obligado al otorgarle otra oportunidad. Porque mientras tanto el proceso demora y el menor continúa esperando que su padre o madre cumpla con pasar su pensión de alimentos.

Resolución N° UNO de fecha ocho de junio del 2018 del 5to Juzgado de Investigación Preparatoria (Ex 6°) Flagrancia- Sede Central. Expediente N° 01315-2018-27-0901-JR-PE-06 dirigido a la Tercera Fiscalía Mixta de puente Piedra, en la presente Resolución detallaremos lo siguiente:

Una vez finalizado el proceso penal con sentencia firme esta debe componer con sus cláusulas; por consiguiente, se dispone a INICIAR el cumplimiento del dictamen de Terminación Anticipada de fecha treinta de mayo del año dos mil dieciocho. REQUIRIÉNDOSE al sentenciado, para que cumpla estrictamente con las normas de comportamiento establecidas en dicha sentencia, bajo expreso apercibimiento de aplicarse lo dispuesto en el artículo 65 del Código Penal, en caso de incumplimiento. Previo requerimiento del señor fiscal; teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 488° inciso 3 del Código Procesal Penal. Interviniendo la especialista de causa de conformidad en el artículo 24 del Reglamento del Nuevo despacho Penal Corporativo aprobada con Resolución Administrativa N° 014-2017 –CE-PJ. Notificándose a todas las partes; y al sentenciado, en sus domicilios real y procesal.

Análisis: Ante la Resolución emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria podemos reflejar el delito actual, ya que el Juez ha sentenciado al obligado con Pena suspendida bajo reglas de conducta. Y para que se llegue a esta sentencia ha tenido que ser llamado primero para aplicar el principio de oportunidad a efectos que se lleve un acuerdo conciliatorio tanto como el sentenciado y con el representante del agraviado que viene a ser

la madre del menor, sin embargo se deduce que el obligado no ha respetado el acuerdo para que cumpla con sus pagos alimenticios, en consecuencia el juez ha sentenciado con pena suspendida, entonces el menor no es prioridad ya que le da más importancia al irresponsable por no haber cumplido con sus obligaciones, queda claro que primo aquí el sentenciado otorgándole ese tipo de sentencia y el agraviado quien es el menor queda a la espera de sus alimentos con un proceso que demorara, porque este delito de omisión a la asistencia familiar no protege por el tiempo que dura la investigación y el menor continua en espera de que su padre o madre cumpla con depositar su pensión alimenticia.

Objetivo Específico 1

Determinar cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código Penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

Sentencia del Tribunal Constitucional

Expediente. N° 00741-2010-PHC/TC

En la ciudad de Lima 28 de mayo del 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional dispone

Asunto

Recurso de agravio legislativo intercalado por don Hernán Gorin Cajusol Chepe, abogado de don Ernesto Santiago García Arana, hacia el dictamen emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de fecha 20 de enero de 2010, que declaró improcedente la sanción de hábeas corpus.

Antecedentes

7 de diciembre del 2009, don Enrique Santiago García Arana intercala una demanda de hábeas corpus solicitando la anulación de la Resolución N.º 04, de fecha 1 de diciembre del 2008, expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que confirmó la Resolución de fecha 19 de agosto del 2008, expedida por el Cuarto Juzgado Especializado Penal de Coronel Portillo, mediante la cual se revocó sanción a la libertad por dos años y dispuso pena efectiva. Puesto que el reclamante que se le estableció un proceso de alimentos (Exp. N.º 0070-1994) donde se le pidió el pago de S/.

6,515 soles por la liquidación de alimentos devengados; y que, sin embargo, al ser una persona de edad, no tener un trabajo fijo, no pudo cumplir con el pago requerido, por lo que se le inició proceso por omisión de asistencia familiar (Expediente N.º 2005-00299-0-2402-JR-PE-2), en el que fue condenado a dos años de pena privativa de la libertad suspendida, bajo regla de conducta, entre otras, a que cumpla con el pago total de pensiones devengadas. Por lo que manifiesta que como no pudo cumplir con el pago, primero fue amonestado por Resolución del 13 de abril del 2007, y que mediante Resolución del 6 de setiembre del 2007 se revocó la suspensión de la pena, y que contra esta última resolución interpuso apelación, que fue confirmada mediante Resolución de fecha 30 de abril del 2008.

Dado que pudo reunir el dinero, el mismo que fue entregado en efectivo a su hijo, quien ya es mayor de edad, con firmas legalizadas, y que este documento de transacción judicial fue presentado al juzgado; por consiguiente, mediante Resolución de fecha 19 de agosto del 2008 se instaura que la resolución que revocó la suspensión de la pena tiene carácter de cosa juzgada, por lo que ya no puede ser modificada; igual pronunciamiento se obtuvo de la Resolución de fecha 1 de diciembre del 2008. Ante ello, afirma que intercaló recurso de nulidad, el que fue declarado improcedente por Resolución de fecha 14 de enero del 2009. Y señala que ante esta decisión se vulnera sus derechos a la estimulación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual.

El Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Pucallpa, con fecha 17 de diciembre del 2009, declaró injustificada la demanda, infundado un reexamen de la Resolución N° 4, de fecha 1 de diciembre del 2008 y se revalore las pruebas. Asimismo, señala que de la resolución antes mencionada guarda congruencia respecto de los hechos y lo decidido, existiendo una fundamentación jurídica.

La Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali revocó la reclamada declarándola inadecuada al considerar que la pretensión que se deje sin efecto la revocatoria de la suspensión de la pena, envuelve una valoración de la resolución cuestionada.

Fundamentos

1. Se pide que la demanda se declare la nulidad de la Resolución N.º 04, de fecha 1 de diciembre del 2008, expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal de la Corte

Superior de Justicia de Ucayali, aduciéndose que vulnera los derechos a la motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual.

El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha precisado que el derecho a la libertad personal no es un derecho absoluto, sino relativo.

Conforme al artículo 59 del Código Penal, ante el incumplimiento de las reglas de conducta fijadas en la resolución que dispone la suspensión de la ejecución de la pena, el juez puede *según, los casos*: Amonestar al infractor; Prorrogar el período de suspensión hasta la mitad del plazo inicialmente fijado, o Revocar la suspensión de la pena. Dicha norma no obliga al juez a aplicar tales alternativas en forma sucesiva, sino que, ante el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, la suspensión de la ejecución de la pena puede ser revocada sin necesidad de que previamente sean aplicadas las dos primeras alternativas.

Por Resolución de fecha 13 de abril del 2007, se amonestó a don Enrique Santiago García Arana para el pago de las pensiones devengadas, bajo el apercibimiento de prorrogar o revocar la suspensión de la ejecución de la pena en el proceso por el delito de omisión de asistencia familiar (Exp. N. ° 2005-00299-0-2402-JR-PE-2). Mediante Resolución de fecha 4 de junio del 2007, se dispuso la prórroga del plazo de suspensión de la pena. Y, ante el reiterado incumplimiento por Resolución de fecha 6 de setiembre del 2007, se resolvió revocar la suspensión de la ejecución de la pena y se dispuso a hacer efectiva la pena de dos años de pena privativa de la libertad. Esta resolución fue confirmada por Resolución de fecha 30 de abril del 2008. A fojas 15 de autos se aprecia la Resolución de fecha 19 de agosto del 2008, por la que se declara improcedente el pedido de dejar sin efecto la revocatoria, pues el recurrente ya habría cumplido con cancelar las pensiones devengadas al considerar que la resolución que dispuso la revocatoria ya es cosa juzgada. Por Resolución N° 04, de fecha 1 de diciembre del 2008 se afirma la improcedencia antes referida. Dado que se evidencia que no revocó la condicionalidad de la pena de forma arbitraria e irrazonable, sino luego de haberse aplicado conforme a ley el artículo 59° del Código Penal; además, en su motivación, se expresa de manera objetiva y razonada los fundamentos que utilizaron para su sentencia, de acuerdo al considerando Segundo de las Resoluciones de fechas 6 de setiembre del 2007 y 30 de abril del 2008. Cabe resaltar que a la fecha en que se emitió la Resolución de fecha 30 de abril del 2008, no se había cumplido con los pagos de pensiones devengadas.

Finalmente, el TC considera que lo que en puridad intenta el accionante no es la tutela urgente ante una supuesta vulneración de sus derechos constitucionales invocados, sino la revisión del fondo de una decisión judicial que ha adquirido la calidad de cosa juzgada., por lo que la demanda debe ser desestimada en aplicación, *contrario sensu*, del artículo 2° del Código Procesal Constitucional. Por lo que el TC declaró **infundada** la demanda.

Análisis: La sentencia antes señalada muestra que el procesado por el delito de omisión a la asistencia familiar ante el incumplimiento de los pagos de pensiones devengadas se le ha sentenciado a dos años pena privativa de la libertad suspendida, con reglas de conducta en la que una de ellas era que cancele el pago de pensiones alimentarios devengados dado que el sentenciado no cumplió los pagos devengados en su debido momento. Sin embargo, el juez lo amonesto, bajo el apercibimiento de prorrogar o revocar la suspensión de la ejecución de la pena en el proceso por el delito de omisión de asistencia familiar. Mediante Resolución de fecha 4 de junio del 2007, se dispuso la prórroga del plazo de suspensión de la pena. Y en reiterado incumplimiento por Resolución de fecha 6 de setiembre del 2007, se decidió revocar la suspensión de la ejecución de la pena y se dispuso a hacer efectiva la pena de dos años de pena privativa de la libertad. Esta resolución fue confirmada por Resolución de fecha 30 de abril del 2008. Así como se aprecia la Resolución de fecha 19 de agosto del 2008, por la que se declara improcedente el pedido de dejar sin efecto la revocatoria, de ahí el demandado ya habría cumplido con pagar las pensiones devengadas al considerar que la resolución que dispuso la revocatoria ya es cosa juzgada. Por Resolución N° 04, de fecha 1 de diciembre del 2008 se confirma la improcedencia antes mencionada. Ante este escenario el condenado recurre al Tribunal Constitucional presentando Recurso de Agravio Constitucional contra la sentencia dictada por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali en fecha 20 de enero de 2010 el mismo que se declaró improcedente de habeas corpus.

En consecuencia, el Tribunal Constitucional la vulneración de los derechos a la motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual. En vista de que el juez le ha dado muchas facilidades al obligado como la suspensión de la pena, amonestación y por último prórroga de la suspensión de la pena este procesado no ha cumplido su responsabilidad ante la justicia, por tanto, incide mucho en la afectación y vulneración del

artículo N° IX del Título Preliminar del Código de Niños y Adolescentes N° 92 del Código de los Niños y Adolescentes en la que menciona compartir en la etapa del postparto.

Por lo expuesto ante las comisiones vulnerados del niño y adolescente, el Gobierno y las instituciones deberían dar importancia a esos derechos ya que influye mucho a los menores de edad porque así se les dé más oportunidades a aquellos padres irresponsables no cumplen con sus pensiones alimenticias. Además, el Tribunal Constitucional menciona que no es necesario aplicar las alternativas del artículo 59 del Código Penal en forma sucesiva. Lo que debería hacer la justicia es ya no brindarle estos tipos de facilidades porque estos obligados se ven muy amparados y vuelven a reincidir en lo mismo.

Objetivo Específico 2

Establecer de qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

La justificación de este segundo objetivo sobre el establecimiento en la que de qué manera la continuidad del delito, donde expone el Expediente N° 01544-2009-0-0601-JR-PE-01 del Juzgado Penal Liquidador Transitorio, de la Provincia de Cajamarca detalla lo siguiente:

El demandado Hugo Herminio Quilcate Sánchez, fue sentenciado en la Provincia de Cajamarca; por juicio por omisión a la asistencia familiar, el 19 de abril y se amparó a la conclusión anticipada, para obtener beneficios legales, cancelo los 14,120 soles que debía por alimentos y otros 400 soles de reparación civil; y negoció a su favor una sentencia de cárcel suspendida. Para ir contra el fallo.

En cuanto a la Reserva de Fallo en el 2012, contra Hugo Herminio Quilcate Sánchez se continuó un sumario civil por alimentos el cual culminó con sentencia en la que se ordenaba el pago de 250 soles periódicos en favor del menor A.R.Q.G. Sin embargo, el condenado no cumplió, puesto que acumuló hasta abril del 2009 una deuda de 3,532 soles. Sentencia dictada el 25 de setiembre del 2012.

El juez Javier Chávez Rojas al sentenciar en el año 2012, emite sentencia 12, después que la policía pone al obligado a disposición del juez, ello tiene en cuenta que al ser arrestado

el sentenciado había dispuesto pagar su devengado de 3,532 soles. En consecuencia, el juez resuelve ordenando la reserva del fallo condenatorio contra el obligado, la que resulto próspero. De tal manera que el fallo condenatorio fue en calidad de autor del delito de O.A.F. El juez fijo de 100 soles en dicha sentencia por reparación civil a favor del demandante; ordeno que el obligado cumpla con las normas de conducta; y así como levantar las órdenes de captura que pesaban en su contra, informando al Juzgado Unipersonal de Cajamarca.

El 19 de abril de 2017, se realizó el nuevo juicio oral en contra de Quilcate Sánchez por el delito de omisión a la asistencia familiar en agravio de A.R.Q.G. El juicio se realiza bajo la presidencia del magistrado Santos Luis Vásquez Plasencia, en el Expediente 01959-2014-2-0601-JR-PE-01. Donde se fundamenta la sentencia,

El juez después del acuerdo entre Ministerio Público y el demandado resuelven de la sanción de 18 meses en la libertad privativa, siendo 19 de abril del 2017.

Análisis: De la sentencia antes detallada se muestra que el demandado ha tenido muchas facilidades por parte de la justicia, y a pesar de ello este ha seguido incumpliendo su obligación de pagar las cuotas de alimentos para su menor hijo, pese a que le ha dado en dos oportunidades pena suspendida la misma que está tipificado en el Artículo 57 del Código Penal en la que el juez puede suspender la ejecución de la pena cuando cuente con estos requisitos que la pena sea no exceda a los cuatro años, que el agente no tenga la condición de reincidente. Puesto que el juez ya no debió otorgarle pena suspendida porque ya se le había concedido años atrás. Por tanto, le ha vuelto a conceder y mientras el alimentista afectado por todo el proceso que se ha dado ante este delito de O.A.F cometido por el obligado. Por tanto, no cabe duda de que la frecuencia del delito de omisión a la asistencia familiar afecta el interés superior del niño y adolescente porque el menor no cuenta con sus alimentos diarios y este delito se vuelve habitual porque la norma creada incluso con el Proceso Inmediato termina resultando ser un saludo a la bandera por cuanto al momento de sentenciarlo al demandado se le condena con Pena Suspendida.

Jurisprudencia
Suspensión De La Ejecución De La Pena
Caso N° 40
Pago de las Pensiones de Alimentos Adeudadas como Regla de Conducta
Distrito Judicial de Loreto
Exp. N° 98-0163-191601-SP-01
Iquitos, 01 de julio de 1999

VISTOS, conforme al dictamen del Fiscal Superior que obra a fojas 112; según sus fundamentos; y, CONSIDERANDO también que, el delito de negligencia de asistencia familiar se configura cuando el sujeto omite cumplir con su obligación de pasar alimentos que ordena una resolución judicial, tal como lo establece el artículo 149 del Código Penal; en el caso que el demandado Daniel Rojas Torres no consuma con pagar el monto total de las pensiones alimentarias vencidas ascendente 6,300 Nuevos Soles, tal como manda la resolución judicial obrante a fojas 20, no obstante haber sido pedido mediante resolución de fojas 24; que, dicho demandado no ha acreditado que es un insolvente y que no cuenta con trabajo que le genere ingresos en todo caso estas situaciones debió hacerlas validar en el proceso de alimentos, haciendo tomar conocimiento que las pensiones adeudadas pertenecen solo hasta el mes de Diciembre de 1997.

Que, el enjuiciado Ríos Torres ha señalado poca consideración para su cónyuge e hijo a llegando a consignar hasta el momento la irrisoria suma de 50.00 nuevos Soles, dado que no hay duda sobre su autoría en el delito que se le imputa; que, por otra parte, la pena y reparación civil aplicadas en la sentencia de primera instancia tienen relación con el principio de proporcionalidad, logrando confirmarse; sin embargo debe mencionarse que la restitución de las pensiones adeudadas es una norma de comportamiento que deberá observar el condenado de conformidad con lo dispuesto por el inciso cuarto del artículo 58 del Código Penal; de estos fundamentos CONFIRMARON la sentencia apelada contenida en la resolución N° 10 de fecha 17 de Mayo de 1999, en la que Declara al acusado Daniel Ríos Torres autor reo del delito de Omisión de Asistencia Familiar en agravio de MMRN y ADRR y lo condena a 2 años de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de prueba de 1 año bajo las reglas de conducta que en dicha sentencia se mencionan; fija la suma de 1,000.00 Nuevos Soles de Reparación Civil que deberá abonar el sentenciado a favor de los dos agraviados, a razón de 500.00 Nuevos Soles para cada uno; y ordena la restitución de la suma

de 6,259.00 Nuevos Soles a favor de dichos agraviados, correspondiendo considerarse este último extremo como regla de conducta de la suspensión de la pena; con lo demás que contiene y los devolvieron, interviniendo el señor Ventura Cueva por licencia del Señor Atarama Lonzoy; Siendo Vocal Ponente el señor Hinostroza Pariachi.

Análisis: Habiendo presentado la jurisprudencia antes referida, y respecto a la continuidad de la sanción familiar hacer figura en el beneficio supremo del menor. Cabe resaltar que al sentenciado se le ha condenado con pena suspendida, imponiéndole reglas de conducta el mismo es conocido en el artículo 58 del Código Penal.

Asimismo, la falta de valores de parte del condenado de no saber asumir su responsabilidad como padre, este comportamiento de los adultos influyen en el bienestar de un menor de edad es estos casos sobre sus hijos se nota la no prevalencia del Principio del Interés Superior del Menor. Además, el desinterés por parte del denunciado y conflicto de intereses entre ambos padres.

Por tanto, la frecuencia del delito de O.A.F afecta el beneficio supremo del menor porque el pequeño no cuenta con sus alimentos diarios y este delito se vuelve frecuente porque la norma creada incluso con el Proceso Inmediato termina resultando ser un saludo a la bandera por que al momento de sentenciarlo al demandado el juez lo condena con Pena Suspendida.

IV. Discusión

En este presente trabajo de investigación se reflejarán la comparación de mis resultados de investigación, los mismos que han sido obtenidos mediante las entrevistas realizadas a operadores jurídicos y el análisis documental, asimismo se contrastan con las diferentes teorías planteadas de autores que están en nuestro marco teórico.

Mis resultados respecto a mi objetivo General son: Analizar de qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017.

De acuerdo con mis resultados obtenidos se ha analizado que hay puntos de vistas diversos. Sin embargo, no se cuida de forma directa y por tanto se ha podido comprobar que no se da importancia plena al beneficio supremo del menor.

Las entrevistas realizadas a los ejecutores jurídicos especialistas y el análisis documental de las casaciones, resoluciones y sentencias; del cual se contrastan con el marco teórico con el fin de resolver los problemas de la investigación, se ha obtenido el siguiente resultado:

Objetivo General

Determinar de qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017

De las distinguidas ejecutadas siete especialistas en derecho penal y operadores jurídicos han determinado que el delito no beneficia al supremo del menor, porque la materialización del Principio del Interés Superior del Niño y Adolescente debe traducirse en medidas efectivas que vengán como consecuencia el cumplimiento de sus obligaciones.

Sin embargo, en la mayoría de los casos se ha notado deudas de los alimentos impagas y sanciones penales atenuadas o benevolentes en pro del condenado y que en muchos casos no se cumplen, además por el tiempo que dura la investigación, el menor de edad continúa esperando que su progenitor cumpla con depositar su pensión de alimentos.

Sin embargo teniendo como una norma importante en la que protege el interés superior del niño el cual es el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes la cual tipifica el Interés Superior del Niño y Adolescentes así como también el artículo 92 del código del menor de edad en la que es un derecho fundamental los Alimentos, lo cual no se llega a priorizar con dichos derechos hacia los menores ya que se ha connotado que el sentenciado sale más beneficiado que el niño y adolescente.

Respecto al Análisis Documental de la Resolución N° Dos emitido por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria cuyo Expediente N° 06566-2017 mediante el cual menciona que, al momento de sentenciar al obligado, el juez condena a la libertad privativa suspendida y disponiendo normas de comportamiento que deberá de cumplir, y una de ellas es pagar las pensiones devengadas que se le ha fijado.

De modo que el juez le da una última oportunidad al sentenciado para que pague la reparación civil y los pagos de pensiones devengadas, frente a este caso a criterio del juez es que le da mayor beneficio al sentenciado irresponsable más no al interés superior del niño porque al darle dicha oportunidad el menor queda desamparado.

Entonces la actual regulación la Ley N° 30466, Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del Interés Superior del niño, Ley N° 27337, artículo N°74 con los deberes y derechos de los padres.

Ante toda circunstancia el menor de edad que ampare el Gobierno mediante los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tendrá en cuenta el principio de interés a favor de este.

Asimismo, se entiende que el niño debe gozar de una defensa especial y disponer de una vida digna y merecedora al éxito, donde no protege directamente el beneficio supremo del menor visto en la Resolución antes referida. Por lo que estos derechos son vulnerados.

Como hemos podido apreciar no es conforme manda las normas y leyes que amparan al menor, sino que aquí más prima el criterio del Juez al decidir si el demandado se va a prisión efectiva o prisión suspendida, de tal manera hay desproporcionalidad para estos casos.

En este criterio el juez no ve de por medio el interés superior del menor es ahí donde se ve el desinterés de los jueces al aplicar oportunidades a los procesados. Porque al seguir los procesos el menor seguirá en espera de sus alimentos en consecuencia se ve desamparado, como sabemos el alimento es un derecho fundamental cotidiano para la subsistencia del ser humano.

Respecto al obligado en el caso le condenen con pena efectiva por cometer el delito de incumplimiento alimentario, no se estaría vulnerando su libertad si bien es cierto conforme al artículo 2 del inciso 24 refiere el derecho de todo individuo en su libertad y seguridad personal, donde no hay prisión por deuda.

Dicho principio requiere el cumplimiento de la responsabilidad alimentaria. Nuestra Constitución bien claro lo expresa en dicha excepción que quiere decir que si condenan al demandado es por una sanción de gravedad ante afectación del derecho del niño y adolescente en cuanto a sus alimentos.

Al respecto habiendo analizado los resultados de los instrumentos que nos han sido de mayor importancia y aporte en recabar información para la investigación, es apreciable hacer comparación con teorías y doctrinas del marco teórico a efectos de presentar con claridad nuestro objetivo general asimismo hago referencia de lo mencionado por el autor Aguilar (2008), quien sostiene que el principio del interés contempla el artículo interamericano.

Por consiguiente, los niños son plenos sujetos de derecho. Asimismo, lo ha comprendido la Corte Interamericana al momento de juzgar (pág.223) del mismo modo Placido (2015), también señala que existe un Comité que vela por los derechos del niño; teniendo en cuenta que no es una definición nueva en el entorno de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Por lo que después de haber disuelto nuestro objetivo general comenzaremos con la discusión del primer Objetivo Especifico el mismo que tiene como título “Determinar cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código penal incide en la valoración del beneficio supremo del menor en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

Los operadores jurídicos, determinaron por mayoría que la prórroga del plazo de suspensión de la pena concederle al sentenciado tendría la posibilidad de poder pagar los devengados de alimentos, mientras que un entrevistado sostiene que le estarían prefiriendo al sentenciado como persona y no al beneficio supremo del menor.

Si es que no se le revocaría de forma rápida su pena suspendida, por otro lado, otro entrevistado también señala el aplazamiento del periodo de interrupción de la condena trasgrede en el interés superior del menor, ya que el menor se encuentra afectado a sus derechos, en tanto que se tiene más consideración al condenado y por otro lado se deja en vulnerabilidad al alimentista quien está en la necesidad de sus derechos fundamentales.

Asimismo, podemos deducir que en principio se está prefiriendo más al obligado que al menor ya que al otorgarle la prórroga de suspensión de la pena al condenado prácticamente una segunda opción, de acuerdo al artículo 59 del Código Penal incide de una manera directa en el beneficio supremo del menor porque el menor se encuentra desamparado de sus alimentos y, además de la demora de los procesos que existe en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Lima Norte.

El análisis documental planteado en la Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente. N° 00741-2010-PHC/TC muestra que el sentenciado por el delito de omisión a la asistencia familiar ante el incumplimiento de los pagos de pensiones devengadas se le ha brindado una sanción en la libertad de veinticuatro meses, con normas de conducta en la que una de ellas era que cancele el pago de pensiones alimentarios devengados.

Dado que este no cumplió. Sin embargo, el juez lo amonesto, en el proceso con fecha 4 de junio del 2007, se dispuso el aplazamiento del tiempo en la suspensión del castigo. Y en reiterado incumplimiento, revocaron la detención del cumplimiento de la sanción con pena de prisión efectiva de dos años.

La resolución fue confirmada., por la que se declara improcedente el pedido de dejar sin efecto la revocatoria, de ahí el demandado ya habría cumplido con pagar las pensiones devengadas al considerar que la resolución que dispuso la revocatoria ya es cosa juzgada. Puesto que se confirma la improcedencia antes mencionada. Ante este caso el condenado recurre al Tribunal Constitucional presentando Recurso de Agravio Constitucional en Ucayali la misma que declaró improcedente el habeas corpus.

El Tribunal Constitucional declaro infundada la demanda ya que no se ha acreditado la vulneración de los derechos a la motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual. En vista de que el juez le ha dado varias oportunidades al obligado como la suspensión de la pena, amonestación y por último la prórroga de la detención de la condena este procesado no ha considerado su responsabilidad ante la justicia.

Para ello se brinda al sentenciado esas tres alternativas del artículo 59 del Código Penal no permite ponerlo a derecho, por lo mismo que reincide en la omisión, puesto que al hacerla efectiva eso no quiere decir que no tendría que pagar sus deberes alimenticios, como padre tendrá que cumplir de alguno u otra forma ese cargo y cumplir con la pena impuesta.

En tal sentido una vez analizado los resultados de los instrumentos que nos ha servido de mucha utilidad para obtener información de mucha importancia en la presente investigación, es relevante realizar una comparación de lo que sostiene López (2004) informa sobre el tiempo de prueba correspondiente al cumplimiento de la norma, asimismo La Corte Suprema ha establecido, una doctrina de reflexión y amparo para que el demandado cumpla con sus deberes.

De esa forma el juez será quien sancione a los demandados, sin estar obligado a aplicarlas de manera secuencial. Por tanto, la prórroga del plazo incide mucho en la valoración del beneficio supremo del menor ya que el juez otorga esta alternativa del artículo 59 del Código penal como otra oportunidad al condenado. Vulnerando sus derechos del menor.

El siguiente objetivo específico dos consiste en Establecer de qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

De las entrevistas los expertos en materia Penal han establecido, uno de ellos manifestando que por vacíos en la norma, por lo que debería haber una unificación de criterios para que se cumpla con el pago de pensiones alimenticias, otros mencionan por conflictos entre conyugues y falta de valores al asumir dicha responsabilidad, mientras que otros entrevistados establecieron una continuidad de omisión en beneficio supremo del menor porque no cuentan con sus alimentos diarios y dicho delito se vuelve frecuente porque

la norma creada como el del Incoación del Proceso Inmediato culmina saliendo un saludo a la bandera ya que al instante de sentenciarlo se le condena con pena suspendida y que existiendo más casos se incrementan más afectados en sus derechos alimenticios y de desarrollo el mismo que es protegido por el Principio, dado que la vigencia de este derecho se declarara en gran medida de protección con la consumación del delito o al judicializarse tenga consecuencia efectiva en beneficio de los menores.

El análisis documental recaída en el Expediente N° 01544-2009 culminada en sentencia se aprecia que el sentenciado ha tenido muchas oportunidades por parte de la justicia, y a pesar de ello este ha seguido incumpliendo su obligación de pagar las cuotas de alimentos para su menor hijo, pese a que se le ha condenado en dos oportunidades con pena suspendida la misma de acuerdo con el artículo 57 del Código Penal, el juez puede suspender a su criterio la ejecución de la pena. Puesto que el juez ya no debió otorgarle pena suspendida porque ya se le había sentenciado años atrás. empero le ha vuelto a sentenciar y mientras el alimentista afectado por todo el proceso que se ha dado ante este delito de O.A.F cometido por el obligado. Por tanto, no cabe duda de que la frecuencia de la infracción de omisión a la asistencia familiar afecta el beneficio supremo del menor porque el menor no cuenta con sus alimentos del día a día y este delito se vuelve habitual porque la norma creada incluso con el Proceso Inmediato termina resultando como una teoría porque en la práctica sucede que el juez sentencia con Pena Suspendida de la libertad. Es por ello que también existe la frecuencia del dicho delito, como procesado tiene conocimiento que le podrán dar esos beneficios que le favorezcan por eso incurre en reiteradas ocasiones en hacer caso omiso a sus obligaciones. Y en consecuencia deviene en forma significativa

Por lo antes señalado una vez analizado los resultados de los instrumentos que nos ha servido de mucha utilidad para obtener información de relevancia en la presente investigación, es preciso realizar una comparación del autor Carbonell (2007), donde considera que los beneficio supremo del menor, se contemplan en la eliminación de una matrimonio a favor de los menores de edad de la misma manera Núñez y Castillo (2013), señalan que el art. 18.1 de la Convención determina que los Estados las partes pondrán la gran perseverancia en garantizando el reconocer el principio de cualquiera de los dos padres tienen deberes en común referente a la formación y el desarrollo.

V. Conclusiones

En primer lugar, se concluye del objetivo general que se determinó que existe una regulación en beneficio superior del menor por cuanto se ha quebrantado dichas oportunidades así como los alimentos tal como se ha comprobado en las entrevistas y de la hermenéutica realizada a los análisis documental, la materialización del principio del interés superior del menor debe efectuarse en medidas efectivas que traigan como fin el cumplimiento de la obligación alimenticia en beneficio y por derecho del menor, amparada y sustentada en el artículo IX del Título Preliminar del Código del Niño y Adolescentes y artículo 92 del Código de los Niños y Adolescentes conforme se ha detallado en las discusiones.

En segundo lugar, mediante el Objetivo Especifico N° 1 se determinó que el aplazamiento del periodo de detención del castigo conforme al análisis documental del inciso 2 del artículo 59 del Código Penal interviene con el beneficio supremo del menor puesto que durante el tiempo transcurrido de dicha prorrogas, otorgado al sentenciado u amonestándole, cuya norma establecido en el inciso 1. Pese a que el juez habiendo dado esas opciones, el condenado no cumplía con sus obligaciones ante una orden judicial, resultando en desamparo el alimentista porque dicho tiempo demoraba demasiado y se pasaba más tiempo de lo prorrogado y más aun con la carga procesal que existía.

De lo que se desprende hasta el momento que, en tercer lugar, conforme al Objetivo Especifico N° 2 se estableció que la forma de la continuidad de la omisión permanentemente de forma significativa en el principio del beneficio supremo del menor por cuanto se ha deducido de la realización de las entrevistas así como en el momento de la interpretación de los análisis documentales de la Jurisprudencia, han dado más beneficios y oportunidades al condenado y no al beneficio supremo del menor, vulnerando este derecho, plasmado en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los niños y adolescentes, afectando al menor por la lentitud del proceso y la falta de responsabilidad e incumplimiento de sus alimentos de parte del obligado, a pesar que el Juez tenía la facultad de considerar un criterio más rígido como es el de revocar la pena suspendida conforme los establece el artículo 59 del Código Penal por la informalidad de normas de comportamiento al sentenciado, del cual se hubieran evitado a que muchos obligados caigan en desobediencia judicial y en forma natural el incumplimiento de los alimentos a los menores hijos.

VI. Recomendaciones

Antes de finalizar la presente investigación, formule las recomendaciones conforme a mis objetivos, considerando los resultados y las conclusiones se llegó a lo siguiente

Primero: Se recomienda proteger el beneficio supremo del menor, que se cumpla y sea efectiva conforme lo señala el artículo IX del Título Preliminar del Código de los niños y adolescentes, artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, y el artículo 4° de la Constitución Política de nuestro país.

Segundo: Se sugiere que no se aplique los incisos 1 y 2 del artículo 59 del Código Penal. Debido a que si no se cumple con los plazos se amoneste y sea el juez quien revoque esta sanción respecto al pago de la liquidación de pensiones de alimentos según el artículo N°4 de la constitución Política del Perú, donde establece que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente, así como la Ley 30466, además establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, para que se pueda cumplir con las normas.

Tercero: se recomienda que no debe ser frecuente la omisión a la asistencia familiar en cumplimiento al artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes que hace referencia al beneficio supremo del menor.

Referencias

- Aguilar, G. (2008). *El principio del interés superior de los niños y niñas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos*. Chile; Centro de Estudios Constitucionales de Chile.
- Aguirre, P. (2015), *El principio de interés superior del niño, niña y adolescente y el desarrollo integral como derecho, en la legislación ecuatoriana*, Ecuador. Recuperado de: <http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/2172/1/TUIAB047-2015.pdf>
- Arias, F. (1999). *El Proyecto de Investigación. Guía Para su Elaboración*. Caracas: Orial Ediciones.
- Aliaga, J. (2013). *El Interés Superior del niño y Adolescente en la Adopción Internacional en el Perú* Recuperada de: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4690/ALIAGA_GAMARRA_JIMENA_NINO_ADOLESCENTE.pdf
- Armaza, J. (2009). *Suspensión de cumplimiento de la pena privativa de libertad de corta duración – La Reforma del derecho penal y del derecho procesal penal en el Perú*. Anuario del derecho penal. Lima: Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Bravo de Mansilla, G. (2017). *Menores y crisis de pareja: la atribución del uso de la vivienda familiar*. Editorial Reus, S.A. Madrid-España.
- Bernal, C. (2006). *Metodología de la Investigación. Para Administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. (2.a ed.). Colombia: Pearson.
- Bernal, C. (2010). *Metodología de la Investigación. Para Administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. (2.a ed.). Colombia: Pearson.
- Campana, M. (2002). *El delito de omisión a la asistencia familiar*. Lima: Editorial Escriba - Fondo.
- Carbonell, F. (2007). *Manual de Derecho de los Niños y Adolescente*. Lima: Ediciones Jurídicas.
- Carrasco, D. (2013). *Metodología de la Investigación Científica*. Lima: San Marcos
- Cazau, P. (marzo de 2006). Recuperado el 11 de Mayo de 2018, de <http://alcazaba.unex.es/asg/400758/MATERIALES/INTRODUCCI%C3%93N%20A%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N%20EN%20CC.SS..pdf>

- Cillero, M. (1998). *El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño*. En: Emilio García Méndez, *Infancia, ley y democracia en América Latina. Análisis crítico del panorama legislativo en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1990-1998)* Colombia: Ed. Temis-Depalma.
- Cillero, M. (1999). *El interés superior del niño e el marco de la Convención Iternacional sobre Derechos del Niño*. *Justicia y Derechos del Niño*,(9),25-142.
- Condori, M (2011). “*La acusación fiscal en el delito de omisión a la asistencia familiar y consecuencias, sociales, económicas y jurídicas en los alimentistas en la provincia de San Ramón, año 2011*”, (Tesis de grado). Recuperada de <https://core.ac.uk/download/pdf/54222458.pdf>
- Dávila, P., y Naya, L. (2011), *Derechos de la Infancia y educación inclusiva en América Latina*. Recuperado de [https://books.google.com.pe/books?id=aXlfAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=D%C3%A1vila+y+Naya+\(2011\)&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwi1oK_j7pztAhWMHrkGHRHkCq4Q6AEwAHoECAUQA#v=onepage&q=D%C3%A1vila%20y%20Naya%20\(2011\)&f=false](https://books.google.com.pe/books?id=aXlfAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=D%C3%A1vila+y+Naya+(2011)&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwi1oK_j7pztAhWMHrkGHRHkCq4Q6AEwAHoECAUQA#v=onepage&q=D%C3%A1vila%20y%20Naya%20(2011)&f=false)
- Dávila, P., y Naya, L. (2013), *Derechos de la Infancia y educación inclusiva en América Latina*. Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=aXlfAAAAQBAJ&pg=PA63&dq=INTERES+SUPERIOR+DEL+NI%C3%91O+PERU+2013&hl=es419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=INTERES%20SUPERIOR%20DEL%20NI%C3%91O%20PERU%202013&f=false
- Díaz, Martín, Molero. (2013). *Reflexiones sobre la justicia Constitucional en Latinoamérica*. Primera Edición. España.
- Flores, M. Flores, A. Rincón, A. (2012). *La prevalencia del interés superior del menor en la carta política y en el código de la infancia y la adolescencia y su aplicación en las acciones de tutela por parte de la Corte Constitucional en el periodo comprendido entre 2009 y 2011*. (2012). Recuperada de <http://studylib.es/doc/4563699/la-prevalencia-del-inter%C3%A9s-superior-del-menor-en-la-carta...>
- Gálvez, Tomas & ROJAS, R. (2012). *Derecho Penal- Parte Especial*. Lima: Jurista editores.

- Gutiérrez, D. (2017). *Estado de los Procesos en el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar frente al Nuevo Código Procesal Penal y el Código de Procedimientos Penales en distrito judicial de Ica* (Tesis de grado). Recuperada de <http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/472/GUTIERREZ%20GUTIERREZ%2c%20DERLLY%20ALEXANDRA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. (2.a ed.). México: Mc GRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
- Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, M. (2010). *Metodología de la Investigación*. (5.a ed.). México: Mc GRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. (6.a ed.). México: Mc GRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
- Huamanchumo, H., & Rodríguez, J. (2015). *Metodología de la investigación en las organizaciones* (1era Edición ed.). Lima, Perú: Summit.
- Hurtado, J. (2005) *Manuel de Derecho Penal –Parte General I*. Lima: Grijley
- La importancia del Interés Superior del Niño*, Casación N° 1961-2012-Lima (Corte Suprema de Justicia de la Republica Sala Permanente Lima, 10 de septiembre del 2013).
- López, J. (2004). *Derecho penal – parte general* - Tomo III. Lima: Gaceta jurídica
- Maris, B. (2006), *El delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar en el derecho y jurisprudencia argentinos*. Recuperada de: <https://es.scribd.com/document/264471463/tesis-DE-OMISION-A-LA-ASISTENCIA-FAMILIAR>
- Miranda, M. (2006). *La convención frente al desamparo del menor. En Desarrollo de la convención sobre los derechos del niño en España*. Barcelona España: Edit. Bosch.
- Múrtula, V. (2015). *El interés superior del menor y las medidas civiles a adoptar es supuestos de violencia de género*. Madrid: Dykinson, S.L.
- Nieto, C. y Cordero, N. (2017). *La intervención con la familia: La incursión desde la perspectiva de la práctica profesional*. Madrid: Dykinson, S.L. Recuperada de [https://books.google.com.pe/books?id=gpwnDwAAQBAJ&pg=PA145&dq=Boccio+\(2015\)&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjS78Dmu8TtAhUPGrkGHVOiCzkQ6AEwAXoECAUQAg#v=onepage&q=Boccio%20\(2015\)&f=false](https://books.google.com.pe/books?id=gpwnDwAAQBAJ&pg=PA145&dq=Boccio+(2015)&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjS78Dmu8TtAhUPGrkGHVOiCzkQ6AEwAXoECAUQAg#v=onepage&q=Boccio%20(2015)&f=false)
- Niño, B. (2011) *Metodología de la Investigación* 1. a Ed. Colombia

- Olivari, K. (2016). *Incumplimiento del pago de pensión de alimentos en niños, niñas y adolescentes del distrito de Pueblo Nuevo*. Chepen – La Libertad. Recuperada de <http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/5264/OLIVARI%20VILLEGAS%20KIARA%20JANNET%20EMERITA%28FILEminimizer%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Orozco, G., Monereo, J y otros. (2015), *Tratado de Mediación en la Resolución de Conflictos*. Recuperado de: <https://books.google.com/books?id=3mzeDgAAQBAJ&pg=PT276&dq=EL+INTERES+SUPERIOR+DEL+NI%C3%91O+Y+ADOLESCENTE+EN+EL+PERU+2015&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwiEidDVrPHdAhVCnlkKHZzEB3wQ6AEIJzAA#v=onepage&q=EL%20INTERES%20SUPERIOR%20DEL%20NI%C3%91O%20Y%20ADOLESCENTE%20EN%20EL%20PERU%202015&f=false>
- Otiniano, N., & Benites, S. (2014). *Instrucciones para la Elaboración de Proyectos e Informes de Tesis*. Lima: Dirección de Investigación Universidad Cesar Vallejo.
- Omisión de Asistencia Familiar y su definición propiamente dicha como alarma de vulneración al interés superior del niño*, Expediente N° 06566-2017-34-0901-JR-PE-03- Lima (Tercer Juzgado de la Investigación Preparatoria, 2017).
- Pago de las Pensiones de Alimentos Adeudadas como Regla de Conducta*, Exp. N° 98-0163-191601-SP-OI –Loreto (Juzgado Penal, año 1998).
- Patzi, A. (2011). “*Sanciones Alternativas al incumplimiento a la asistencia familiar*”. Recuperada de: <http://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/13136/T3409.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Peña, F. (2015). *Omisión de asistencia familiar Derecho penal*. Parte especial. Lima; Idemsa.
- Peña, R. (2016). *Tratado de Derecho Penal, Parte especial*. Lima; Ediciones Jurídicas.
- Placido, A.F. (2015). *Manual de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes*. Lima: Pacifico Editores S.A.A.
- Rojas, F; Infantes, A; y Quispe, L. (2007). *Código Penal- Dieciséis años de Jurisprudencia Sistematizada. Parte Especial Tomo II*: Idemsa.
- Quispe, J. (2017), “*El Interés Superior del niño frente al incumplimiento de la obligación alimentaria*”

Recuperado de: [http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/226/QUISPE-Q-Trabajo El%20inter% C3%A9s.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/226/QUISPE-Q-Trabajo%20inter%20C3%A9s.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Responsabilidad penal en el Delito de Omisión de Asistencia familiar, S.T.C. N° 00741-2010-PHC/TC – Ucayali (Tribunal Constitucional, 28 de mayo del 2010).

Responsabilidad penal en el Delito de Omisión de Asistencia Penal y la valoración de la prueba del Juez Penal, Expediente N° 01544-2009-0-0601-JR-PE-01- Cajamarca (Juzgado Penal Liqandiauidador Transitorio, año 2009).

Revocación de la Pena Impuesta por Omisión de Asistencia Familiar, STC N° 1584-2012 – Arequipa (Tribunal Constitucional, 06 de Julio del 2012).

Reyna, L. (2011). *Delitos contra la familia y de violencia doméstica*. (Segunda edición). Lima; Jurista editores.

- Ruiz, M. (sin fecha). *El delito de omisión a la asistencia familiar, reflexiones y propuesta para la mejor aplicación dela normatividad que regula el Derecho de Alimentos*. Recuperado de: http://historico.pj.gob.pe1/CorteSuprema/cij/documentos/C4-10_delito_omision_asistencia_familiar_210208.pdf.

Ruiz, O. (2012). *Metodología de la investigación cualitativa*. (5ª. ed). España: Universidad de Deusto.

Salinas, R. (2012). *Derecho Penal- Parte Especial*. (Quinta edición). Lima Grigley.

Situación de Irreparabilidad del menor o adolescente, STC N° 04058-2012-PA/TC – Huaura (Tribunal Constitucional, 30 de abril de 2014).

Sanz, A.(2002), *El nuevo proceso penal del menor*.(1° ed). España. Recuperado de: https://books.google.com.pe/books?id=-_9Q2xGmwtAC&pg=PA214&dq=principio+de+oportunidad&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwissMrqqu_tAhX5HrkGHd7ECgMQ6AEwB3oECAgQAg#v=onepage&q=principio%20de%20oportunidad&f=false

Tapia Vives: Citado por Campana Valderrama en su libro: *Delito a la Omisión Familiar*, y por Luis Manuel Reyna Alfaro. Cuaderno Jurisprudencial. Lima. Perú.

Violencia Familiar como agravante de la Omisión de Asistencia Familiar, Expediente N° 01315-2018-27-0901-JR-PE-06- Lima (5to Juzgado de Investigación Preparatoria (Ex 6°) Flagrancia- Sede Central, 08 de junio del 2018).

Villavicencio, F. (2017) *Derecho Penal -Parte general*. (Sexta reimpresión). Lima: Grijley E.I.R.L.

Yanes, L. (2016). *El interés superior del niño en los procesos de niñez y adolescencia en la ciudad de Ambato*, Recuperada de: <http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/4981>.

Anexos

Anexo N° 01

Matriz de consistencia para elaboración de informe de tesis

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Deysi Palmira Mora Otolea

FACULTAD/ESCUELA: E.A.P. de Derecho

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	El Interés Superior del Niño y Adolescente con respecto al Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el Distrito de Puente Piedra, 2017
PROBLEMA GENERAL	<p>¿De qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017?</p> <p><u>Problema Específico1:</u></p> <p>¿Cómo la prórroga del plazo de la suspensión de la pena incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en el Juzgado de Investigación Preparatoria?</p>
PROBLEMAS ESPECÍFICOS	<p><u>Problema Específico2:</u></p> <p>¿De qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del interés superior del niño y adolescente en el juzgado de Investigación Preparatoria?</p>
SUPUESTO JURÍDICO GENERAL	<p>La actual regulación protege de una manera inadecuada en el caso de delitos de omisión a la asistencia familiar, tomando desinterés al interés superior del niño y adolescente.</p> <p><u>Supuesto Específico1</u></p> <p>La prórroga del plazo de la suspensión de la pena incide negativamente en la valoración del interés superior del niño y adolescente en el Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.</p>
SUPUESTOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS	<p><u>Supuesto Específico2</u></p> <p>La frecuencia del delito de omisión a la asistencia familiar influye en el principio del interés superior del niño y adolescente de forma significativa en el principio.</p>
OBJETIVO GENERAL	<p>Determinar de qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017</p>

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<u>Objetivo Específico1:</u>
	Determinar cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.
	<u>Objetivo Específico2:</u>
	Establecer de qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del interés superior del niño y adolescente en el Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.
CATEGORÍAS	<u>Categoría Independiente:</u>
	El Interés Superior del Niño y Adolescente
	<u>Categoría dependiente:</u>
	Delito de Omisión a la Asistencia Familiar
TIPO DE INVESTIGACIÓN	Tipo Descriptivo y Diseño Cualitativo
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	Teoría Fundamentada
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATO	Instrumento de recolección es: - la entrevista - el análisis de documentos normativos.
POBLACIÓN Y MUESTRA	<u>Población:</u> Jueces, Resoluciones Judiciales, abogados y Jueces Civiles del Distrito de Puente Piedra
	<u>Muestra</u> Entrevistas a jueces y abogados especializados en la materia de la omisión de asistencia familiar así como en el derecho de familia

Anexo N° 2

Guía de Entrevista

(Dirigido a abogados, jueces, especialistas, Estudiantes de Derecho, catedráticos especialistas)

Título: El Interés Superior del Niño y Adolescente con respecto al Delito de Omisión a la Asistencia Familiar en el Distrito de Puente Piedra, 2017

Datos del entrevistado

Entrevistado: _____ **Cargo/Profesión/Grado Académico:** _____
Institución: _____ **Lugar:** _____ **Fecha:** _____ **Duración:** _____

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017

1. ¿Cree usted que la actual regulación del delito de omisión a la asistencia familiar protege el interés Superior del niño y adolescente?

2. ¿Cuál es la ley que ampara al interés superior del niño y adolescente para tutelar su derecho en los delitos de la omisión a la asistencia familiar?

3. ¿A su criterio el Interés Superior del niño prevalece sobre toda norma para resolver los procesos del delito de omisión a la asistencia familiar?

4. ¿Cuál es la medida de protección más adecuada para tutelar el interés superior del niño y adolescente ante la imposibilidad de afectar el delito de la omisión a la asistencia familiar?

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Determinar cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte

5. ¿Explique usted a que se debe que la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59° del Código Penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

6. ¿Cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

-
-
-
7. ¿Cuál es la motivación que el Juez decide sobre el interés superior del niño y adolescente en los delitos de omisión a la asistencia familiar?

8. ¿Cómo define Usted el delito de omisión a la asistencia familiar y cuáles deben ser los requisitos legales?

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Establecer de qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del interés superior del niño y adolescente en el Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte

9. ¿Explique a que se debe la frecuencia del delito de omisión de Asistencia familiar influye en el principio del interés superior del niño o adolescente?

10. ¿Cree Ud., que los Jueces están dando importancia al interés superior de los niños y adolescentes en el proceso del delito de omisión de Asistencia Familiar?

Nombre del entrevistado	SELLO y FIRMA

Anexo N° 03

Guías de Análisis Documentales

N°	Sujeto	Sexo	Cargo	Entidad donde labora
1	Luis Alberto Vega Buenaño	M	Secretario Judicial	Corte Superior de Justicia de Lima Norte
2	Miguel Angel Canepa Sulca	M	Asistente Judicial	Corte Superior de Justicia de Lima Norte
3	Ronald Tuesta Azanero	M	Secretario Judicial	Corte Superior de Justicia de Lima Norte
4	Gladys Liliana Gonzales Obando	F	Fiscal Provincial Titular	Ministerio Público
5	Waldir Victor Montoya	M	Fiscal Provincial Provisional	Ministerio Público
6	Sandra Zully Huaman Panana	F	Fiscal Adjunta Provincial Provisional	Ministerio Público
7	Hebert Edwin Farro Aquino	M	Fiscal Adjunto Provincial Provisional	Ministerio Público
8	Maria Azucena Elias Santana	F	Fiscal Provincial Penal	Ministerio Público
9	Yovanna Jenny Obregón Soto	F	Abogada	Litigante
10	Sender Vilardo Quispe Ventocilla	M	Asistente en Función Fiscal	Ministerio Público

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: RESOLUCIÓN N° DOS- EXP N° 06566-2017

NOMBRE DEL DEMANDANTE: Elizabeth Mejía Jacinto

AÑO : 2017

OBJETIVO GENERAL

Analizar de qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra. 2017.

ÍTEM	MARCAR	
	SI	NO
En el presente documento materia de análisis para justificar el objetivo general, fue amerito de la Resolución N° Dos de fecha dieciocho de junio del dos mil dieciocho, proceso de Delito de Omisión de Asistencia Familiar presentado por la representante legal del menor agraviado Mary Elizabeth Mejía Jacinto, al principal solicitando se revoque la condicionalidad de la pena al sentenciado por incumplimiento de pago de pensiones devengadas y reparación civil y advirtiéndose de autos que el sentenciado Zenon Arone Salcedo, no ha cumplido con el pago íntegro de la reparación civil y pensiones devengadas a quien se le ordeno en la sentencia de fecha dos de mayo del año dos mil dieciocho adeudando hasta la una cuota vencida, este Juzgado de Investigación Preparatoria ante el Ministerio Publico – Tercera Fiscalía Provincial Mixta de Puente Piedra, al respecto uno de los considerando de la presente resolución	X	

<p>se fundamenta en el primer considerando un criterio para proceder de qué manera la actual regulación del Delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege en Interés Superior del Niño y Adolescente, por lo que dispuso:</p> <p>Requerir por última vez al sentenciado Zenon Arone Salcedo a efectos de que cumpla con cancelar el monto integro de la Reparación Civil en las pensiones devengadas cuyas cuotas se encontraban vencidas, dentro de los cinco días de haber sido notificado con la presente resolución, bajo expreso apercibimiento de procederse de aplicar las medidas correctivas que establece el artículo 59 del Código Penal, en caso de incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta.</p> <p>El Juez de Investigación Preparatoria de Lima Norte ha brindado una última oportunidad al sentenciado Zenon Arone Salcedo pese a que dicho condenado tiene un mandato judicial bajo reglas de conducta, dado que el sentenciado no ha cumplido con dichas reglas de conducta, de tal manera recae en efectos de incumplimiento de reglas de conducta la cual está tipificada en el artículo 59 del Código Penal en la que el Juez debe Amonestar al infractor, Prorrogar o Revocar la suspensión de la pena.</p> <p>Ante este pedido de parte de la representante del menor quien es la madre, de dicho desacato por parte del sentenciado, el Juez no acepto su solicitud de revocación de suspensión de la pena de la recurrente.</p>		
---	--	--

Por lo tanto se aprecia la poca importancia del interés superior del niño y adolescente y la vulneración de dicho derecho dado que en vez que se le dé prioridad al menor se está dando al obligado al otorgarle otra oportunidad. Porque mientras tanto el proceso

demora y el menor continua esperando que su padre o madre cumpla con pasar su pensión de alimentos.

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: EXP N° 00741-2010-PHC/TC

NOMBRE DEL DEMANDANTE: Enrique Santiago García Arana

AÑO: 2009.

OBJETIVO ESPECIFICO 1

Determinar cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código Penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima

ÍTEM	MARCAR	
	SI	NO
En el presente caso de Recurso de agravio constitucional, don Enrique Santiago García Arana interpone demanda de hábeas corpus solicitando la nulidad de la Resolución N.º 04, de fecha 1 de diciembre del 2008, expedida por la Primera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que confirmó la Resolución de fecha 19 de agosto del 2008, expedida por el Cuarto Juzgado Especializado Penal de Coronel Portillo, mediante la cual se revocó la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad por dos años y dispuso pena efectiva. Puesto que el reclamante que se le estableció un proceso de alimentos (Exp. N.º 0070-1994) donde se le pidió el pago de S/. 6,515 soles por	X	

<p>la liquidación de alimentos devengados, por lo que se le inició proceso penal por el delito de omisión de asistencia familiar (Expediente N.º 2005-00299-0-2402-JR-PE-2), en el que fue condenado a dos años de pena privativa de la libertad suspendida, bajo regla de conducta. Primero fue amonestado por Resolución del 13 de abril del 2007, y que mediante Resolución del 6 de setiembre del 2007 se revocó la suspensión de la pena, y que contra esta última resolución interpuso apelación, que fue confirmada mediante Resolución de fecha 30 de abril del 2008.</p> <p>Por consiguiente mediante Resolución de fecha 19 de agosto del 2008 se instaure que la resolución que revocó la suspensión de la pena tiene carácter de cosa juzgada, por lo que ya no puede ser modificada; en la que se afirma que interpuso recurso de nulidad, el que fue declarado improcedente por Resolución de fecha 14 de enero del 2009. Y señala que ante esta decisión se vulnera sus derechos a la motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual.</p> <p>El Primer Juzgado Especializado en lo Penal de Pucallpa, en el año 2009, declaró infundada la demanda, por considerar que lo que se pretende es un reexamen de la Resolución N° 4, de fecha 1 de diciembre del 2008 y se revalore las pruebas. Asimismo, señala que de la resolución antes mencionada guarda congruencia respecto de los hechos y lo decidido, existiendo una fundamentación jurídica.</p> <p>La Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali revocó la apelada declarándola improcedente al considerar que la pretensión que se deje sin efecto la revocatoria de la suspensión de la pena, envuelve una valoración de la resolución</p>		
---	--	--

<p>cuestionada que excede el objeto del hábeas corpus.</p> <p>En el fundamento 3, menciona que Por Resolución de fecha 13 de abril del 2007, se amonestó a don Enrique Santiago García Arana para el pago de las pensiones devengadas, bajo el apercibimiento de prorrogar o revocar la suspensión de la ejecución de la pena en el proceso por el delito de omisión de asistencia familiar (Exp. N.º 2005-00299-0-2402-JR-PE-2). Mediante Resolución de fecha 4 de junio del 2007, se dispuso la prórroga del plazo de suspensión de la pena. Y, ante el reiterado incumplimiento por Resolución de fecha 6 de setiembre del 2007, se resolvió revocar la suspensión de la ejecución de la pena y se dispuso hacer efectiva la pena de dos años de pena privativa de la libertad. Esta resolución fue confirmada por Resolución de fecha 30 de abril del 2008. A fojas 15 de autos se aprecia la Resolución de fecha 19 de agosto del 2008, por la que se declara improcedente el pedido de dejar sin efecto la revocatoria, pues el recurrente ya habría cumplido con cancelar las pensiones devengadas al considerar que la resolución que dispuso la revocatoria ya es cosa juzgada. Por Resolución N.º 04, de fecha 1 de diciembre del 2008 se afirma la improcedencia antes referida. Dado que se evidencia que no revocó la condicionalidad de la pena de forma arbitraria e irrazonable, sino luego de haberse aplicado conforme a ley el artículo 59º del Código Penal; además, en su motivación, se expresa de manera objetiva y razonada los fundamentos que utilizaron para su sentencia, de acuerdo al considerando Segundo de las Resoluciones de fechas 6 de setiembre del 2007 y 30 de abril del 2008. Cabe resaltar que a la fecha en que se emitió la Resolución de fecha 30 de abril del 2008, no se había cumplido con los pagos de pensiones devengadas.</p>		
---	--	--

Finalmente el TC declaro infundada la demanda porque no se ha acreditado la vulneración de los derechos a la motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual.		
--	--	--

La sentencia antes señalada muestra que el procesado por el delito de omisión a la asistencia familiar ante el incumplimiento de los pagos de pensiones devengadas se le ha sentenciado a dos años pena privativa de la libertad suspendida, con reglas de conducta en la que una de ellas era que cancele el pago de pensiones alimentarios devengados dado que el sentenciado no cumplió los pagos devengados en su debido momento. Sin embargo el juez lo amonesta, bajo el apercibimiento de prorrogar o revocar la suspensión de la ejecución de la pena en el proceso por el delito de omisión de asistencia familiar. Mediante Resolución de fecha 4 de junio del 2007, se dispuso la prórroga del plazo de suspensión de la pena. Y en reiterado incumplimiento por Resolución de fecha 6 de setiembre del 2007, se decidió revocar la suspensión de la ejecución de la pena y se dispuso hacer efectiva la pena de dos años de pena privativa de la libertad. Esta resolución fue confirmada por Resolución de fecha 30 de abril del 2008. Así como se aprecia la Resolución de fecha 19 de agosto del 2008, por la que se declara improcedente el pedido de dejar sin efecto la revocatoria, de ahí el demandado ya habría cumplido con pagar las pensiones devengadas al considerar que la resolución que dispuso la revocatoria ya es cosa juzgada. Por Resolución N° 04, de fecha 1 de diciembre del 2008 se confirma la improcedencia antes mencionada. Ante este escenario el condenado recurre al Tribunal Constitucional presentando Recurso de Agravio Constitucional contra la sentencia dictada por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali en fecha 20 de enero de 2010 el mismo que se declaró improcedente de habeas corpus.

En consecuencia el Tribunal Constitucional declaro infundada la demanda ya que no se ha acreditado la vulneración de los derechos a la motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual. En vista de que el juez le ha dado muchas facilidades al obligado como la suspensión de la pena, amonestación y por último

prórroga de la suspensión de la pena este procesado no ha cumplido su responsabilidad ante la justicia, por tanto incide mucho en la afectación y vulneración del artículo N° IX del Título Preliminar del Código de Niños y Adolescentes en la que señala el interés superior del niño y adolescente en que en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad se considera el principio del interés superior del niño y adolescente y el respeto a sus derechos, y el artículo N° 92 del Código de los Niños y Adolescentes en la que menciona que se considera alimentos, lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, atención médica y recreación del niño o adolescente. Y los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del postparto.

Por lo expuesto ante los derechos vulnerados del niño y adolescente, el Estado y las instituciones deberían dar importancia a esos derechos ya que influye mucho a los menores de edad porque así se le dé más oportunidades a aquellos padres irresponsables no cumplen con sus pensiones alimenticias. Además el Tribunal Constitucional menciona que no es necesario aplicar las alternativas del artículo 59 del Código Penal en forma sucesiva. Lo que debería hacer la justicia es ya no brindarle estos tipos de facilidades porque estos obligados se ven muy amparados y vuelven a reincidir en lo mismo cometiendo el mismo delito de omisión a la asistencia familiar.

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: EXP N° 01544-2009

NOMBRE DEL DEMANDANTE: INICIALES A.R.Q.G

AÑO : 2009

OBJETIVO ESPECIFICO 2

Establecer de qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

MARCAR		
ÍTEM	SI	NO
<p>N este caso el demandado Hugo Herminio Quilcate Sánchez, fue sentenciado en la Provincia de Cajamarca; por juicio por omisión a la asistencia familiar, el 19 de abril y se acogió a la conclusión anticipada, para obtener beneficios legales, cancelo los 14,120 soles que debía por alimentos y otros 400 soles de reparación civil; y negoció a su favor una sentencia de cárcel suspendida. Lo sucedido no era la primera vez que Quilcate Sánchez era llevado ante la justicia. Por el mismo delito de omisión a la asistencia familiar, se dio otro juicio y concluyó en el 2012, el juez de Cajamarca Javier Chávez Rojas falló en contra de Quilcate con la reserva del fallo condenatorio. El agraviado en estos sucesivos procesos penales es el menor A.R.Q.G.</p> <p>En cuanto a la Reserva de Fallo en el 2012, contra Hugo Herminio Quilcate Sánchez se continuó un proceso civil por alimentos el cual culmino con sentencia en la que se ordenaba el pago de 250 soles mensuales en favor del menor A.R.Q.G. Sin embargo el condenado no cumplió, puesto que acumulo hasta abril del 2009 una deuda de 3,532 soles, la misma que origino una demanda penal. De modo que el Ministerio Publico demando por delito contra la vida, la que es omisión a la asistencia familiar. Al no presentarse a este proceso penal, el juez lo declaro reo contumaz. Sentencia dictada el 25 de setiembre del 2012.</p> <p>El juez Javier Chavez Rojas al sentenciar en el año 2012, emite sentencia 12, después que la policía pone al obligado a disposición</p>	X	

<p>del juez, ello tiene en cuenta que al ser arrestado el sentenciado había dispuesto pagar su devengado de 3,532 soles. En consecuencia el juez resuelve ordenando la reserva del fallo condenatorio contra el obligado, la que resulto próspero. De tal manera que el fallo condenatorio fue en calidad de autor del delito de O.A.F. El juez fijo de 100 soles en dicha sentencia por reparación civil a favor del demandante; ordeno que el obligado cumpla con las normas de conducta; y así como levantar las ordenes de captura que pesaban en su contra, informando al Juzgado Unipersonal de Cajamarca. Asimismo vuelve a incumplir y lo acaban de sentenciar pese a la oportunidad que el juez le concedió al condenado este no implicó cumplimiento, dejando de pagar la cuota asignada para su menor hijo. Por lo que se le inició un nuevo proceso penal en el año 2014 por el mismo delito, omisión a la asistencia familiar.</p> <p>El 19 de abril de 2017, se realizó el nuevo juicio oral en contra de Quilcate Sánchez por el delito de omisión a la asistencia familiar en agravio de A.R.Q.G. El juicio se realiza bajo la presidencia del magistrado Santos Luis Vásquez Plasencia, en el Expediente 01959-2014-2-0601-JR-PE-01. El fiscal al hacer acusación ante el Juzgado, el obligado había acumulado deuda de 14,120 soles ante ello pedía que sea sentenciado a un año y seis meses de pena privativa de la libertad y que cancele la reparación civil. El demandado solicita acogerse a la conclusión anticipada del juzgamiento. De ahí el acusado acepto los cargos y cancelo con tres depósitos bancarios la deuda que debía por alimentos de 14,120 soles y la reparación civil de 400 soles. De ello los pagos realizados fueron de 8,000 soles, 6,12 soles, y 400 soles.</p> <p>El juez después del acuerdo entre Ministerio Público y el</p>	
--	--

demandado confirma resolviendo condenar a un año y seis meses de pena privativa de la libertad suspendida por el periodo de prueba de un año, bajo reglas de conducta establecidas en el artículo 58 del Código Penal. Así como también ordena "Dejar sin efectos la órdenes de ubicación y captura contra el citado acusado, oficiándose a donde corresponda con fecha 19 de abril 2017.		
---	--	--

De la sentencia antes detallada se muestra que el demandado ha tenido muchas facilidades por parte de la justicia, y a pesar de ello este ha seguido incumpliendo su obligación de pagar las cuotas de alimentos para su menor hijo, pese a que le ha dado en dos oportunidades pena suspendida la misma que está tipificado en el Artículo 57 del Código Penal en la que el juez puede suspender la ejecución de la pena cuando cuente con estos requisitos: Que la pena sea a pena privativa de la libertad no mayor de cuatro años, que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente permitan inferir al juez que no volverá a cometer otro delito, que el agente no tenga la condición de reincidente. Puesto que el juez ya no debió otorgarle pena suspendida porque ya se le había concedido años atrás. Sin embargo le ha vuelto a conceder y mientras el alimentista afectado por todo el proceso que se ha dado ante este delio de O.A.F cometido por el obligado. Por tanto no cabe duda que la frecuencia del delito de omisión a la asistencia familiar afecta el interés superior del niño y adolescente porque el menor no cuenta con sus alimentos diarios y este delito se vuelve habitual porque la norma creada incluso con el Proceso Inmediato termina resultando ser un saludo a la bandera por cuanto al momento de sentenciarlo al demandado se le condena con Pena Suspendida.

Anexo N° 04

Fichas de validación de entrevistas



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Rodriguez Figuera José Jorge
 1.2. Cargo e institución donde labora: Dr. P. UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista
 1.4. Autor(a) de Instrumento: Deysi Palmyra Mora Dolees

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MÍNIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje comprensible.													
2. OBJETIVIDAD	Está adecuado a las leyes y principios científicos.													
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.													
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.													
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.													
6. INTENCIONALIDAD	Está adecuado para valorar las categorías.													
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.													
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos jurídicos.													
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde a una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.													
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al método científico.													

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

96 %

Lima, del 2018

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. Telf.

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Rodriguez Figueroa José Jorge
 1.2. Cargo e institución donde labora: Analista Operativa
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Deysa Palmira Mara Ochoa
 1.4. Autor(a) de Instrumento: Deysa Palmira Mara Ochoa

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MÍNIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje comprensible.													
2. OBJETIVIDAD	Está adecuado a las leyes y principios científicos.													
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.													
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.													
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.													
6. INTENCIONALIDAD	Está adecuado para valorar las categorías.													
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.													
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos jurídicos.													
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde a una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.													
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al método científico.													

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

☐
☐

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

76 %

Lima, de 2018

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE
 DNI No. Telf.

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Flores Medina, Eleazar Arayando
 1.2. Cargo e institución donde labora: D.P. UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista
 1.4. Autor(a) de Instrumento: Daysi Palmira Mora Otaola

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MÍNIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje comprensible.												X	
2. OBJETIVIDAD	Está adecuado a las leyes y principios científicos.												X	
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												X	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.												X	
6. INTENCIONALIDAD	Está adecuado para valorar las categorías.												X	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												X	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos jurídicos.												X	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde a una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.												X	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al método científico.												X	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, del 2018

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE
 DNI No. Telf.:

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Flora Medina Escobar Arroyando
 1.2. Cargo e institución donde labora: D.P. UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Estrategista
 1.4. Autor(a) de Instrumento: Deysi Palmyra Mora Cota

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MÍNIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje comprensible.												X	
2. OBJETIVIDAD	Está adecuado a las leyes y principios científicos.												X	
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												X	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.												X	
6. INTENCIONALIDAD	Está adecuado para valorar las categorías.												X	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												X	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos jurídicos.												X	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde a una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.												X	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al método científico.												X	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, del 2018


FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. Telf.:

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Flores Medina Eleazar Armando
 1.2. Cargo e institución donde labora: D.T.P. UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de análisis documental
 1.4. Autor(a) de Instrumento: Deyse Palomera Mera Doleca

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MÍNIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje comprensible.												X	
2. OBJETIVIDAD	Está adecuado a las leyes y principios científicos.												X	
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												X	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												X	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.												X	
6. INTENCIONALIDAD	Está adecuado para valorar las categorías.												X	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												X	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos jurídicos.												X	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde a una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.												X	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al método científico.												X	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, del 2018


 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE
 DNI No. Telf.:

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Salas Quispe, Mariano Rodolfo
 1.2. Cargo e institución donde labora: DTC - USV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista
 1.4. Autor(a) de Instrumento: Deysi Palmira Mora Ojeda

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MÍNIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje comprensible.												x	
2. OBJETIVIDAD	Está adecuado a las leyes y principios científicos.												x	
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												x	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												x	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.												x	
6. INTENCIONALIDAD	Está adecuado para valorar las categorías.												x	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												x	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos jurídicos.												x	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde a una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.												x	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al método científico.												x	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95%

Lima, del 2018

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 06989923 Telf.: 953526951

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: Salas Quispe Huarano Rodolfo
 1.2. Cargo e institución donde labora: DTC - UCV
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Análisis Documental
 1.4. Autor(a) de Instrumento: Dafni Palopira Mora Cotocha

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

CRITERIOS	INDICADORES	INACEPTABLE						MÍNIMAMENTE ACEPTABLE			ACEPTABLE			
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1. CLARIDAD	Está formulado con lenguaje comprensible.												✓	
2. OBJETIVIDAD	Está adecuado a las leyes y principios científicos.												✓	
3. ACTUALIDAD	Está adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.												✓	
4. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica.												✓	
5. SUFICIENCIA	Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales.												✓	
6. INTENCIONALIDAD	Está adecuado para valorar las categorías.												✓	
7. CONSISTENCIA	Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.												✓	
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre los problemas, objetivos y supuestos jurídicos.												✓	
9. METODOLOGÍA	La estrategia responde a una metodología y diseño aplicados para lograr verificar los supuestos.												✓	
10. PERTINENCIA	El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al método científico.												✓	

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

Si

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95%

Lima, del 2018

540
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. Telf.:
 06989923 953526951

Anexo N° 04

Entrevistas

Anexo 2

Guía de entrevista

Título: El interés Superior del Niño y Adolescente con respecto al delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito de Puente Piedra, 2017

Entrevistado..... Miguel Angel Canepa Sullca

Cargo/Profesión/Grado Académico.....

Institución..... Corte Superior de Justicia de Lima Norte

Lugar..... Puente Piedra Fecha 23/10/18 Duración.....

Objetivo general

Analizar de qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017

1. ¿Cree usted que la actual regulación del delito de omisión a la asistencia familiar protege el interés Superior del niño y adolescente?

Creo que no, debe existir una regulación que sea mas eficaz
a fin de proteger los intereses basicos del niño y adolescentes.
ya que en la ley actual no se esta otorgando una debida
protección al interes superior del niño.

2. ¿Cuál es la ley que ampara al interés superior del niño y adolescente para tutelar su derecho en los delitos de la omisión a la asistencia familiar?

En nuestro ordenamiento jurídico Tenemos Varios dispositi-
vos legales, como el Código de niños y adolescentes, y
la Constitución Política del Perú. Pero en específico

Para el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar esta el Código Penal que está tipificado en el Art. 149 d

3. ¿A su criterio el Interés Superior del niño prevalece sobre toda norma para resolver los procesos del delito de omisión a la asistencia familiar?

Debería ser así pues los derechos del niño y adolescentes se encuentran institucionalizados a nivel nacional e internacional, además debe prevalecer ante otra norma como es bien saber se encuentra en nuestra carta magna.

4. ¿Cuál es la medida de protección más adecuada para tutelar el interés superior del niño y adolescente ante la imposibilidad de afectar el delito de la omisión a la asistencia familiar?

El Estado reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, es decir, como titulares de derechos y obligaciones que, en razón de su situación de vulnerabilidad, deben ser protegidos por el estado, la familia y la comunidad.

Objetivo específico 1

Determinar cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

5. ¿Explique usted a que se debe que la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código Penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

la prórroga del periodo de suspensión de la pena incide en el interés superior del menor, porque el menor en este tiempo se encuentra afecto a sus derechos, pues por un lado se le tiene mas consideración al sentenciado por otro lado se deja en vulnerabilidad al alimentista que esta en la necesidad de sus derechos basicos.

6. ¿Cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

la prórroga es una de las tres medidas aplicadas en el artículo 59 del código penal pues en la practica los magistrados de acuerdo al estudio de cada caso en concreto aplica estas medidas por el incumplimiento de las reglas de conducta.

7. ¿Cuál es la motivación que el Juez decide sobre el interés superior del niño y adolescente en los delitos de omisión a la asistencia familiar?

la motivación del juez es cumplir con el pago de las pensiones devengadas a fin de proteger al menor.

8. ¿Cómo define usted el delito de omisión a la asistencia familiar, y cuáles deben ser los requisitos legales?

el delito de omisión a la asistencia familiar la definiria como el incumplimiento del pago de las pensiones devengadas por parte del padre o madre hacia el menor.

Objetivo específico 2



Establecer de qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

9. ¿Explique a que se debe la frecuencia del delito de omisión a la asistencia familiar influye en el principio del interés superior del niño adolescente?

En mi conocimiento y por las declaraciones instructivas de los imputados muchos alegan la falta económica esto quiere decir falta de trabajo, falta de estudios y carga familiar.

10. ¿Cree usted, que los Jueces están dando importancia el interés superior del niño y adolescente en el proceso del delito de omisión a la asistencia familiar?

No, pienso que los Jueces solo aplican la norma pensando proteger al menor pero a la larga no brinda gran beneficio al contrario fracuba el núcleo familiar.

Nombre del entrevistado	Sello y firma
	  <p>PODER JUDICIAL DEL PERÚ MIGUEL ÁNGEL CAMPA SULLCA ASISTENTE DE FISCALÍA FISCALÍA DE PUENTE PEDRA CORTÉ SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE</p>

Anexo 2

Guía de entrevista

Título: El interés Superior del Niño y Adolescente con respecto al delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito de Puente Piedra, 2017

Entrevistado... Luis Alberto Vega Buenano

Cargo/Profesión/Grado Académico... Secretario Judicial

Institución... Corte Superior de Justicia de Lima Norte

Lugar... Puente Piedra Fecha... 23/10/18 Duración...

Objetivo general

Analizar de qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017

1. ¿Cree usted que la actual regulación del delito de omisión a la asistencia familiar protege el interés Superior del niño y adolescente?

NO, LA ACTUAL REGULACIÓN EN ESTE TIPO DE DELITO NO PROTEGE EFECTIVAMENTE EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y ADOLESCENTE, SI PUESE ASI NO SEVERIA EN LA ACTUALIDAD CASOS DE DELITOS POR INCUMPLIMIENTO ALIMENTICIO.

2. ¿Cuál es la ley que ampara al interés superior del niño y adolescente para tutelar su derecho en los delitos de la omisión a la asistencia familiar?

Existe varios instrumentos jurídicos que ampara el interés Superior del niño y adolescente. Como la Ley 30466, Ley QUE ESTABLECE PARAMETROS Y GARANTIAS PROCESALES PARA LA

CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO.
LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ, ART. 4, EL CODIGO PENAL
ART. 149.

3. ¿A su criterio el Interés Superior del niño prevalece sobre toda norma para resolver los procesos del delito de omisión a la asistencia familiar?

SI, PUES ES UNO DE LOS DERECHOS CONTEMPLADOS EN NUESTRA
CONSTITUCIÓN Y PROTEGIDOS POR EL CÓDIGO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE
CONCORDANTE CON DERECHOS INTERNACIONALES; POR ENDE
LOS DERECHOS DEL NIÑO DEBEN SER PROTEGIDOS PREVALECIENDO
MAS QUE OTROS DERECHOS PUES SE ENCUENTRA EN VUINERACIÓN.

4. ¿Cuál es la medida de protección más adecuada para tutelar el interés superior del niño y adolescente ante la imposibilidad de afectar el delito de la omisión a la asistencia familiar?

LA MEDIDA DE PROTECCIÓN MAS ADECUADA ES QUE SE CUMPLA DE
MANERA RAPIDA Y EFECTIVA EL PAGO DE LAS PENSIÓNES
DEVENGADAS, PUES EL JUEZ DEBE SOLICITAR DE MANERA
OPORTUNA SI EL SENTENCIADO TIENE BIENES, CUENTAS BANCARIAS,
PUES COMO SE SABE EL FIN EN ESTE TIPO DE DELITO ES EL CUMPLIMIENTO
DE LA ASISTENCIA HACIA EL ALIMENTISTA.

Objetivo específico 1

Determinar cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

5. ¿Explique usted a que se debe que la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código Penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

SE DEBE A QUE ES UNA MEDIDA DE PROTECCIÓN REGULADA EN EL
CÓDIGO PENAL Y QUEDA A DISCRECIÓN DEL JUEZ APLICAR
LA PRORROGA. UOTRA MEDIDA, NO ACTUANDO DE MANERA
CONSECUTIVA.

6. ¿Cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

LA PRORROGA DEL PERIODO DE SUSPENSIÓN SI INCIDE EN LA
VALORACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y ADOLESCENTE,
PUES EL AGRAVIADO PENSARA AL DARLE ESTE BENEFICIO
SE ESTARIA DANDO CASO ORISO, PROTEGIENDO AL
SENTENCIADO.

7. ¿Cuál es la motivación que el Juez decide sobre el interés superior del niño y adolescente en los delitos de omisión a la asistencia familiar?

LA MOTIVACIÓN PRINCIPAL QUE TIENEN LOS JUECES ES EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE CONDUCTA, SIENDO EL
PRINCIPAL EL PAGO LA CUAL DEBE CUMPLIR, ESTO DEPENDERA
DE CADA CASO EN CONCRETO EVALUANDOLO — PUES NO SE
DEBE APLICAR LA MISMA PENA Y MEDIDA PARA TODOS.

8. ¿Cómo define usted el delito de omisión a la asistencia familiar, y cuáles deben ser los requisitos legales?

ES EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS BASICOS QUE TIENE TODA PERSONA
SIENDO LA ALIMENTACIÓN, VIVIENDA, VESTIMENTA, SALUD, RECREACIÓN,
DANDO POR CONSECUENCIA ANTE UNA OMISION LA PENA.

Objetivo específico 2


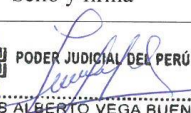
Establecer de qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

9. ¿Explique a que se debe la frecuencia del delito de omisión a la asistencia familiar influye en el principio del interés superior del niño adolescente?

LA EXISTENCIA DE VACÍOS EN LA NORMA, DEBERÍA HABER UNA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS AFÍN DE CUMPLIR CON EL PAGO HACIA EL ALIMENTISTA.

10. ¿Cree usted, que los Jueces están dando importancia el interés superior del niño y adolescente en el proceso del delito de omisión a la asistencia familiar?

NO, EN LA REALIDAD LOS JUECES PARECE QUE SOLO QUIEREN CUMPLIR CON LA NORMA, NO VIENDO MAS ALLA, BUSCANDO UNA SOLUCIÓN ENTRE EL OMISOR Y EL ALIMENTISTA, QUE LO MAS IMPORTANTE DEBERÍA PREVALECER EL NÚCLEO FAMILIAR.

Nombre del entrevistado	Sello y firma
	  PODER JUDICIAL DEL PERÚ LUIS ALBERTO VEGA BUENAÑO SECRETARIO JUDICIAL JUZGADO PENAL LIQUIDADOR PERMANENTE DE PUENTE PIEDRA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

Anexo 2

Guía de entrevista

Título: El interés Superior del Niño y Adolescente con respecto al delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito de Puente Piedra, 2017

Entrevistado.....Waldir Victor Montoya Gomez.....
Cargo/Profesión/Grado Académico.....Fiscal Provincial de Puente Piedra.....
Institución.....Ministerio Público.....
Lugar.....2º Despacho 1era Fiscalía Corporativa.....Fecha.....21/11/18.....Duración.....

Objetivo general

Analizar de qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017

1. ¿Cree usted que la actual regulación del delito de omisión a la asistencia familiar protege el interés Superior del niño y adolescente?

No, porque la materialización del Principio del Interés Superior del niño y Adolescente debe traducirse en medidas efectivas que tengan como consecuencia el cumplimiento de la obligación de alimentarse a favor de los menores alimentistas. Sin embargo en la mayoría de los casos se observa deudas de alimentos impagos y sanciones Penales atenuadas o benevolentes en pro del condenado y que en muchos casos no se cumplen.

2. ¿Cuál es la ley que ampara al interés superior del niño y adolescente para tutelar su derecho en los delitos de la omisión a la asistencia familiar?

El Artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, El Artículo N de la Constitución Política del Perú y el Artículo 149 del Código Penal.

WALDIR VICTOR MONTAYA GÓMEZ
Fiscal Provincial (P)
Segundo Despacho
3º Fisc. Prov. Penal Corporativa de
Puente Piedra del Distrito Fiscal de Lima Norte

3. ¿A su criterio el Interés Superior del niño prevalece sobre toda norma para resolver los procesos del delito de omisión a la asistencia familiar?

No siempre. Porque los Jueces Penales y el Representante del Ministerio Público también tienen que garantizar la plena vigencia del Principio de Legalidad que incluye la sanción y sus normas y principios que los regulan a lo que tiene derecho todas las personas involucradas en el delito de la Omisión a la Asistencia Familiar en calidad de imputados.

4. ¿Cuál es la medida de protección más adecuada para tutelar el interés superior del niño y adolescente ante la imposibilidad de afectar el delito de la omisión a la asistencia familiar?

Las medidas cautelares que establece el Código Procesal Civil con la finalidad de afectar el patrimonio del obligado y con ello hacer como de la deuda alimentaria existente lo que debe tener un mayor margen de ejecución y afectación en favor del demandante por alimentos.

Objetivo específico 1

Determinar cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

5. ¿Explique usted a que se debe que la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código Penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

WALDIR VICTOR MONTAÑA GÓMEZ
Fiscal Provincial (P)
Segundo Despacho
3º Fisc. Prov. Penal Corporativa de
Puente Piedra del Distrito Fiscal de Lima Norte

La prórroga a que se refiere el inciso 2 del art. 59 del Código Penal tiene como finalidad darle la oportunidad al condenado a que cumpla con las Reglas de Conducta entre las cuales están el pago de la deuda de alimentos y la Reparación Civil, lo que no podría cumplir si es que se le revoca la suspensión de la pena. Hechos que es Valioso por los jueces en función al Interés Superior del niño y adolescente.

6. ¿Cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

Organizándole más plazo al condenado para el cumplimiento de las Reglas de Conducta se puede lograr que el menor alimentista tenga la posibilidad de recibir el pago de las pensiones alimenticias adeudadas decisión que se toma en función al interés superior del niño y adolescente.

7. ¿Cuál es la motivación que el Juez decide sobre el interés superior del niño y adolescente en los delitos de omisión a la asistencia familiar?

Que viene hacer la afectación de los Derechos elementales y de necesidad básica para el Crecimiento y desarrollo de la personalidad del menor agraviado, como es la alimentación propiamente dicha educación, salud y vestido entre otros que requiere el menor de edad imposibilitado para valerse por sí mismo.

8. ¿Cómo define usted el delito de omisión a la asistencia familiar, y cuáles deben ser los requisitos legales?

Según lo que respecta el Primer Párrafo del Artículo 149 del Código Penal este consiste en la Omisión de pagar o cumplir el requerimiento de pago expreso en Cantidad, Período y tiempo de cumplimiento que se hace al obligado, mediante Resolución Judicial.

WALDIR VICTOR MONTOYA GOMEZ
Fiscal Provincial (P)
Segundo Despacho
3º Fisc. Prov. Penal Corporativa de
Pueblo Libre del Distrito Fiscal de Lima Norte

Los Requisitos deben ser: Resolución Judicial Firme, Destinatario identificado que provenga de autoridad competente y que se ha puesto en conocimiento del obligado en la forma y modo que establece la ley.

Objetivo específico 2

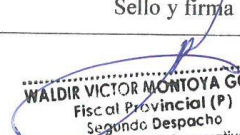
Establecer de qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

9. ¿Explique a que se debe la frecuencia del delito de omisión a la asistencia familiar influye en el principio del interés superior del niño adolescente?

Porque a más casos por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar existen más menores afectados en sus derechos alimentarios y de crecimiento personal lo que es protegido por el Principio del Interés Superior del Niño y adolescente, en consecuencia la vigencia de este último derecho o principio se manifiesta en gran medida cuando se adopten medidas de protección con la consumación del delito antes indicado o una vez judicializado este tenga resultado efectivo en favor de los menores alimentistas.

10. ¿Cree usted, que los Jueces están dando importancia el interés superior del niño y adolescente en el proceso del delito de omisión a la asistencia familiar?

Creo que en algunos casos no se está adoptando las medidas judiciales más apropiadas en favor del Principio del interés Superior del niño y adolescente y ellas se reflejan en la gran cantidad de casos resueltos que están en la etapa de ejecución Penal por incumplimiento de las Reglas de Conducta que se le impone a los condenados en este delito.

Nombre del entrevistado	Sello y firma
Waldir Victor Montoya Gomez.	 WALDIR VICTOR MONTAYA GOMEZ Fiscal Provincial (P) Segundo Despacho 3º Fisc. Prov. Penal Corporativa de Puente Piedra del Distrito Fiscal de Lima Norte

Deysi Mora Oldea

Anexo 2

Guía de entrevista

Título: El interés Superior del Niño y Adolescente con respecto al delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito de Puente Piedra, 2017

Entrevistado... Sandra Lully Hamán Ponana.....
Cargo/Profesión/Grado Académico... Fiscal Adjunta Provincial.....
Institución... Ministerio Público.....
Lugar... Puente Piedra..... Fecha 23/10/18..... Duración.....

1. ¿Cree usted que la actual regulación del delito de omisión a la asistencia familiar protege el interés Superior del niño y adolescente?

No, por el tiempo que dura dicha investigación, el menor de edad continúa esperando que se progenitor cumple con abonar su pensión de alimentos.

2. ¿Cuál es la ley que ampara al interés superior del niño y adolescente para tutelar su derecho en los delitos de la omisión a la asistencia familiar?

El interés superior del niño está tutelado por el artículo 149° del Código Penal primer párrafo.

3. ¿A su criterio el Interés Superior del niño prevalece sobre toda norma para resolver los procesos del delito de omisión a la asistencia familiar?

Considero que no, por cuanto en la vía penal y las normas procesales con garantías de los derechos del imputado o investigado, además considerando que la libertad se restringe como último refo. El interés superior del menor prevalece más en la vía civil

4. ¿Cuál es la medida de protección más adecuada para tutelar el interés superior del niño y adolescente ante la imposibilidad de afectar el delito de la omisión a la asistencia familiar?

Que, las medidas de cumplimiento de pago de devengadas se satisfagan en la vía civil, mediante medidas cautelares a los diversos obligados, no solo el padre biológico, aunque sea injusto pero solo así se tutelará el principio del Interés Superior del menor

5. ¿Explique usted a que se debe que la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código Penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

La aplicación de la prórroga tiene 2 dimensiones, se debe para darle la oportunidad al sentenciado que se ponga a derecho y cumpla la obligación impuesta en la sentencia; por otra lado, también se aplica en la creencia de que el investigado puede cumplir tal pago de devengadas estando fuera de la cárcel por las posibilidades económicas que pueda tener a raíz de su trabajo ambos intereses aportan a "prevalecer" el Interés Superior del menor.

6. ¿Cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

Que, las ambas dimensiones explicadas en la pregunta n° 5 tienen trascendencia directa con el Interés Superior del Menor.

7. ¿Cuál es la motivación que el Juez decide sobre el interés superior del niño y adolescente en los delitos de omisión a la asistencia familiar?

El juez decide revocar la pena cupondada en la confianza que usando el sentenciado privado de su libertad para acogerse a un beneficio penitenciario debe necesariamente pagar los devengados de alimentos.

8. ¿Cómo define usted el delito de omisión a la asistencia familiar, y cuáles deben ser los requisitos legales?


El delito O.A.F. es permanente que tiene su origen por el incumplimiento de una sentencia civil en materia de alimentos, se convierte en delito cuando el obligado incumple el pago económico impuesto en la sentencia, el mismo que va en perjuicio de un menor, porque el investigado de manera dolosa recae en la comisión del delito de O.A.F. Requisitos: ① Existencia de una sentencia que ordene el pago de la pensión de Alimentos con la debida liquidación de pensión de devengados. ② Que haya negativa de pago del investigado ante el requerimiento Judicial de pago. ③ Que el imputado haya sido debidamente notificado con el requerimiento de ley en su domicilio real y legal.

9. ¿Explique a que se debe la frecuencia del delito de omisión a la asistencia familiar influye en el principio del interés superior del niño adolescente?

La frecuencia de la comisión del delito de O.A.F. se debe a la falta de valores y responsabilidad del obligado de no saber asumir su condición de padre, por cuanto dicho comportamiento de los adultos influyen en el bienestar de un menor de edad, en estos casos sobre sus hijos, se observa la no prevalencia del Principio del Interés Superior del Menor.

10. ¿Cree usted, que los Jueces están dando importancia el interés superior del niño y adolescente en el proceso del delito de omisión a la asistencia familiar?

Algunos jueces si, ya que depende de la discrecionalidad del juez, como se menciona en la preg. n° 3, el Juez penal debiese garantizar el debido proceso y los derechos que le asiste al investigado.

Nombre del entrevistado	Sello y firma
Sandra Zully Huamán Panama	 SANDRA ZULLY HUAMAN PANAMA Fiscal Adjunta Provincial (P) Primer Despacho 3º Fisc. Prov. Penal Corporativa de Puente Piedra del Distrito Fiscal de Lima Norte

Anexo 2

Guía de entrevista

Título: El interés Superior del Niño y Adolescente con respecto al delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito de Puente Piedra, 2017

Entrevistado..... Ronald Tuesta Azanero.....
Cargo/Profesión/Grado Académico..... Secretario Judicial.....
Institución..... Corte Superior de Justicia de Lima Norte.....
Lugar..... Puente Piedra..... Fecha 23/10/18 Duración.....

Objetivo general

Analizar de qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017

1. ¿Cree usted que la actual regulación del delito de omisión a la asistencia familiar protege el interés Superior del niño y adolescente?

No, pues la actual regulación no protege debidamente al interés Superior del niño pues en la actualidad se vulnera mucho este derecho, el padre incumple reiteradamente el pago.

2. ¿Cuál es la ley que ampara al interés superior del niño y adolescente para tutelar su derecho en los delitos de la omisión a la asistencia familiar?

El Código de Niños y Adolescentes, La Constitución Política del Perú entre otros dispositivos legales amparan el interés Superior del niño y adolescente para tutelar su derecho en los

delitos de Omisión a la Asistencia Familiar

3. ¿A su criterio el Interés Superior del niño prevalece sobre toda norma para resolver los procesos del delito de omisión a la asistencia familiar?

Si, pues el derecho al menor debe prevalecer ante otro derecho pues se encuentran en vulneración el sustento básico como es la alimentación, vestido, recreación, salud, para ello los padres deben brindar la protección necesaria al menor.

4. ¿Cuál es la medida de protección más adecuada para tutelar el interés superior del niño y adolescente ante la imposibilidad de afectar el delito de la omisión a la asistencia familiar?

Pienso que en un primer plano el estado debe brindar un fondo necesario para el menor que se encuentre vulnerado o afectado por el delito de omisión a la asistencia familiar, para ello se debe realizar una evaluación para cada grupo familiar si tiene los recursos económicos.

Objetivo específico 1

Determinar cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

5. ¿Explique usted a que se debe que la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código Penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

Como se sabe se encuentra establecida en el código penal, pues la corte suprema ha establecido, como doctrina jurisprudencial que la aplicación de las sanciones por el incumplimiento de las reglas de conducta deben ser determinadas por el juez para cada caso en concreto.

6. ¿Cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

El juez debe actuar de manera discrecional para cada caso en concreto, esto quiere decir que puede decidir que medida o sanción puede aplicar sin llegar a la afectación a los derechos del menor.

7. ¿Cuál es la motivación que el Juez decide sobre el interés superior del niño y adolescente en los delitos de omisión a la asistencia familiar?

La motivación que el juez toma en el caso de delitos de omisión a la asistencia familiar es que el sentenciado debe cumplir con las reglas de conducta impuestas en una sentencia para ello evaluar la conducta del sentenciado y además las ganas de querer cumplir con el pago.

8. ¿Cómo define usted el delito de omisión a la asistencia familiar, y cuáles deben ser los requisitos legales?

El delito de omisión a la asistencia familiar se encuentra regulado en el artículo 149 del código es que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, o con prestación de servicio

comunitario de veinte a cincuenta y dos jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial.

Objetivo específico 2

Establecer de qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

9. ¿Explique a que se debe la frecuencia del delito de omisión a la asistencia familiar influye en el principio del interés superior del niño adolescente?

la frecuencia del delito de omisión a la asistencia familiar es porque esta fallando los medios de control social esto quiere decir el entorno familiar, falta de educación, comunicación y las penas pues parece que lo que se quiere es castigar pero no prevenir para no generar este tipo de delitos.

10. ¿Cree usted, que los Jueces están dando importancia el interés superior del niño y adolescente en el proceso del delito de omisión a la asistencia familiar?

A mi parecer no, que los jueces solo se están dedicando a cumplir lo que dice la norma y no ir mas alla como es que se genera este tipo de delito, cuales son las verdaderas causas para su incumplimiento.

Nombre del entrevistado	Sello y firma
	  <p>PODER JUDICIAL DEL PERÚ SECRETARIO JUDICIAL AZUGADO PENAL LICENCIADO PERMANENTE DE PUENTE PIEDRA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE</p>

Anexo 2

Guía de entrevista

Título: El interés Superior del Niño y Adolescente con respecto al delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito de Puente Piedra, 2017

Entrevistado..... Herbert Edwin Farro Aquino

Cargo/Profesión/Grado Académico..... Abogado

Institución..... Ministerio Público

Lugar..... Puente Piedra 19 Fecha. 19/11/18 Duración.....

Objetivo general

Analizar de qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017

1. ¿Cree usted que la actual regulación del delito de omisión a la asistencia familiar protege el interés Superior del niño y adolescente?

Creo que si se protege el interés Superior del niño y adolescente
pero que igual se debe verificar la afectación de los derechos
fundamentales de los menores o adolescentes, ya que cada
quien tiene una atención especial, circunstancias sociales diferentes.

2. ¿Cuál es la ley que ampara al interés superior del niño y adolescente para tutelar su derecho en los delitos de la omisión a la asistencia familiar?

La ley N° 27337 - Código de los Niños y Adolescentes.

3. ¿A su criterio el Interés Superior del niño prevalece sobre toda norma para resolver los procesos del delito de omisión a la asistencia familiar?

A mi criterio si deberá prevalecer sobre toda norma pero sin dejar de lado las convenciones internacionales en favor de los menores y Adolescentes.

4. ¿Cuál es la medida de protección más adecuada para tutelar el interés superior del niño y adolescente ante la imposibilidad de afectar el delito de la omisión a la asistencia familiar?

Proteger a los niños y Adolescentes que se encuentran en situación de riesgo o abandono, correspondiendo al Estado en forma subsidiaria, ya que el estado es el garante de los derechos fundamentales de la persona.

Objetivo específico 1

Determinar cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

5. ¿Explique usted a que se debe que la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código Penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

Incide en que se ven postergados hacer efectivo el pago de los alimentos o pensiones devengadas a favor del deudor alimentario.

6. ¿Cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

pues resulta desproporcional a los intereses de la persecución y sanción penal.

7. ¿Cuál es la motivación que el Juez decide sobre el interés superior del niño y adolescente en los delitos de omisión a la asistencia familiar?

Asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de los menores y adolescentes.

8. ¿Cómo define usted el delito de omisión a la asistencia familiar, y cuáles deben ser los requisitos legales?

- Que el investigado tenga conocimiento de la deudora en su contra.
- Que la liquidación de Pensiones devengadas debe ser aprobado.
- Que exista una sentencia firme.

Objetivo específico 2

Establecer de qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.


9. ¿Explique a que se debe la frecuencia del delito de omisión a la asistencia familiar influye en el principio del interés superior del niño adolescente?

- Desinterés por parte del denunciado.

- Conflicto de intereses entre ambos padres.

10. ¿Cree usted, que los Jueces están dando importancia el interés superior del niño y adolescente en el proceso del delito de omisión a la asistencia familiar?

- Muy poco, por la recargada labor y cantidad de procesos penales.

Nombre del entrevistado	Sello y firma
Herbert Forno Aquino	 Dr. HERBERT EDWIN FARRO AQUINO Fiscal Adjunto Provincial Provisional TÉRCER DESPACHO 3º Fisc. Prov. Penal Corporativa de Puente Piedra Distrito Fiscal de Lima Norte

Anexo 2

Guía de entrevista

Título: El interés Superior del Niño y Adolescente con respecto al delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito de Puente Piedra, 2017

Entrevistada: GLADYS LILIANA GONZALES OBANDO

Cargo/Profesión/Grado Académico: ABOGADA

Institución: MINISTERIO PUBLICO

Lugar: PUENTE PIEDRA Fecha: 19.11.2018 Duración: 30 minutos

Objetivo general

Analizar de qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017

1. ¿Cree usted que la actual regulación del delito de omisión a la asistencia familiar protege el interés Superior del niño y adolescente?

En realidad se ha dado un gran salto hacia adelante si lo comparamos con el proceso que se seguía antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1194 del Proceso Inmediato en que los procesos de Omisión a la Asistencia Familiar demoraban entre 3 a 4 años e incluso algunos prescribían.

2. ¿Cuál es la ley que ampara al interés superior del niño y adolescente para tutelar su derecho en los delitos de la omisión a la asistencia familiar?

El Decreto Legislativo N° 1194 que regula el Proceso Inmediato.


Gladys Liliana Gonzales Obando
FISCAL PROVINCIAL TITULAR
DE LA TERCERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE PUENTE PIEDRA
(PROCESO INMEDIATO)

3. ¿A su criterio el Interés Superior del niño prevalece sobre toda norma para resolver los procesos del delito de omisión a la asistencia familiar?

No prevalece el interés superior del niño porque cuando ya son sentenciados los procesados por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en el caso que sean primarios, se les sentencia con la Pena Privativa de la Libertad Suspendida y si no cumplen con las Reglas de Conducta y el Ministerio Público solicita la Revocatoria por incumplimiento, el Juez los Amonesta y no les revoca la pena suspendida en forma directa, pese a que está dentro de sus facultades, entonces con ello queda claro que no está siendo resguardado en primer término el interés superior del niño porque el colocar la pena suspendida y no revocarle en forma inmediata se está prefiriendo el interés del sentenciado.

4. ¿Cuál es la medida de protección más adecuada para tutelar el interés superior del niño y adolescente ante la imposibilidad de afectar el delito de la omisión a la asistencia familiar?

La medida más idónea sería que se impida colocar al sentenciado una pena suspendida, debería ser una pena efectiva aunque por ser primera vez pueda convertirse con servicios comunitarios pero luego ante el primer incumplimiento se le Revocaría la Pena en forma inmediata.

Objetivo específico 1

Determinar cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

5. ¿Explique usted a que se debe que la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código Penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

Se debe precisamente a que se le está prefiriendo al sentenciado como persona y no al interés superior del niño ya que si no se le Revocaría en forma inmediata su pena suspendida.


Gladys Ediana González Chando
FISCAL PROVINCIAL TITULAR
DE LA TERCERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL
CORPORATIVA DE PUENTE PIEDRA
JUNIO 2018

6. ¿Cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

La prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del código penal afecta al interés superior del niño porque luego de haber seguido un largo camino ante el Juzgado de Paz, luego ante el Juzgado Penal con la presentación del Proceso Inmediato y ser sentenciado sin embargo nuevamente ve obstaculizado el poder obtener los alimentos el menor.

7. ¿Cuál es la motivación que el Juez decide sobre el interés superior del niño y adolescente en los delitos de omisión a la asistencia familiar?

La motivación que tiene el Juez para decidir por encima de todo por el interés superior del niño es cuando ante el incumplimiento de las Reglas de Conducta del sentenciado se ve reflejado cuando le Revoca en forma inmediata su pena suspendida.

8. ¿Cómo define usted el delito de omisión a la asistencia familiar, y cuáles deben ser los requisitos legales?

El delito de omisión a la asistencia familiar es aquel en el que el sentenciado por Alimentos incumple con pagar al alimentista pese a ser debidamente requerido, los requisitos legales deben ser que el sentenciado sea debidamente notificado y con ello probado que tenía pleno conocimiento de su omisión.

Objetivo específico 2

Establecer de qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

9. ¿Explique a que se debe la frecuencia del delito de omisión a la asistencia familiar influye en el principio del interés superior del niño adolescente?



La frecuencia del delito de omisión a la asistencia familiar afecta el interés superior del niño o adolescente porque el menor no cuenta con sus alimentos diarios y este delito se vuelve frecuente porque la norma creada incluso con el Proceso Inmediato termina resultando ser


Gladys Patricia González Obando
FISCAL PROVINCIAL TITULAR
1ª TERCERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL
JURISDICCION DE PUENTE PIEDRA
2017-01-01-001

un saludo a la bandera por cuanto al momento de sentenciarlo se le condena con Pena Suspendida.

10. ¿Cree usted, que los Jueces están dando importancia el interés superior del niño y adolescente en el proceso del delito de omisión a la asistencia familiar?

No se le está dando mayor importancia al interés superior del niño porque pese a que el sentenciado ya se le ha requerido bajo apercibimiento de ser denunciado que cumpla con pagar los alimentos sin embargo reincide en lo mismo, y por otro lado, siendo sentenciado con Pena Suspendida tampoco cumple con las reglas de conducta porque sabe que lo Amonestarán pero no se le revocará en forma inmediata su Pena para hacerla efectiva.

Nombre del entrevistado	Sello y firma
	  FISCALIA PROVINCIAL TITULAR DE LA TERCERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PUENTE PIEDRA PUENTE PIEDRA

Anexo 2

Guía de entrevista

Título: El interés Superior del Niño y Adolescente con respecto al delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito de Puente Piedra, 2017

Entrevistado... Quispe Jentoulla Sander Vilardo

Cargo/Profesión/Grado Académico... ASISTENTE DE FUNCIÓN FISCAL-DERECHO

Institución... DISTRITO FISCAL LIMA NORTE

Lugar... Puente Piedra Fecha... Duración...

Objetivo general

Analizar de qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017

1. ¿Cree usted que la actual regulación del delito de omisión a la asistencia familiar protege el interés Superior del niño y adolescente?

No considero que no, puesto que es una norma muy Frágil, ya que se limita a describir a la omisión de cumplir lo establecido por mandato judicial solamente; cuando debería hacerse mención a la obligación del padre hacia su hijo, que es bastante amplia, y no basta con lo establecido solamente lo establecido por una resolución judicial. Además, la pena por dicha omisión es muy Irrisoria, debería ser mas dura.

2. ¿Cuál es la ley que ampara al interés superior del niño y adolescente para tutelar su derecho en los delitos de la omisión a la asistencia familiar?

Actualmente no existe una ley específica que pueda amparar al interés del niño y el adolescente frente a estos delitos; solamente se aplica el código del Niño y

el adolescente, y supletoriamente el código civil, Procesal civil y las Normas Internacionales.

3. ¿A su criterio el Interés Superior del niño prevalece sobre toda norma para resolver los procesos del delito de omisión a la asistencia familiar?

Según la Teoría, este es un Principio que si prevalece sobre toda norma, mas aún que esta regulado en convenciones y Tratados Internacionales. Pero en la práctica, no sucede eso, ya que por muchos factores, tales como la demora de la remisión de los actuados del Pj a MP demora muchísimo, asimismo, por la Demasiada Carga procesal que padece el MP, Mucha Vezes se demora Avanzar

4. ¿Cuál es la medida de protección más adecuada para tutelar el interés superior del niño y adolescente ante la imposibilidad de afectar el delito de la omisión a la asistencia familiar?

una de las medidas ante estos casos sería la creación de una ley específica que proteja el interés superior del niño y el adolescente, al margen del Código del niño y adolescente y ~~de~~ el decreto legislativo 1297 - sobre la protección de niño, niñas sin cuidador parentales, yo creo que eso mejoraría esta situación

Objetivo específico 1

Determinar cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

5. ¿Explique usted a que se debe que la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código Penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

influye mucho, ya que al realizarse o determinarse una Pena bajo Suspensión, lo que se trata de salvar es guardar el beneficio y el derecho íntegro de los ~~menores~~ menores y adolescentes, pues así, el sentenciado pagará el monto adeudado de las pensiones devengadas bajo reglas de conducta, y tiene que ser cumplidas cabalmente.

6. ¿Cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

influye de la manera como concluye los procesos de esotipos, y generalmente concluye por Terminación anticipada, conclusión anticipada del proceso, etc. todo ello en beneficio del menor, sobre todo que el padre pague la obligación como tal y la deuda pens. devengadas. Por esos motivos es que se realizan las Prórrogas, con la finalidad de Beneficio de menor.

7. ¿Cuál es la motivación que el Juez decide sobre el interés superior del niño y adolescente en los delitos de omisión a la asistencia familiar?

La motivación trascendental de una decisión judicial sobre estos casos, es el beneficio y ~~en~~ la protección de los Derechos del menor y pues a veces cuando se condena a una persona a pena Privativa de libertad ya no hay posibilidad de que pague íntegramente la deuda; mas solo la reparación civil que es mínima. Por eso es que dan salidas alternativas, como es la T. Anticipada, etc.

8. ¿Cómo define usted el delito de omisión a la asistencia familiar, y cuáles deben ser los requisitos legales?

EL Delito de O.A.F. es un tipo penal que sanciona con pena no mayor de 3 años, a todo aquel que incumple u omite prestar alimentos establecido en una resolución judicial.

- Requisitos legales: incumplimiento de Resolución judicial que ordena prestar alimentos
- simulación de obligación de prestar alimentos

Objetivo específico 2

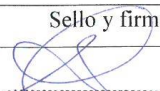
Establecer de qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

9. ¿Explique a que se debe la frecuencia del delito de omisión a la asistencia familiar influye en el principio del interés superior del niño adolescente?

Estos tipos de delitos esta muy relacionado con el interes superior del niño y del adolescente, Tanto desde el inicio de un proceso en el poder judicial y hasta que nos remiten al MP, ya que la obligación, responsabilidad de padre e hijo siempre esta.

10. ¿Cree usted, que los Jueces están dando importancia el interés superior del niño y adolescente en el proceso del delito de omisión a la asistencia familiar?

Por supuesto que si, Precisamente por eso es que muchas veces los procesos termina con audiencias de Terminación o conclusión anticipada ya que de esa manera se le condenaria al denunciado solamente con Pena Suspendida, teniendo como prioridad pagar la deuda de las pensiones devengadas y los intereses legales a consecuencia de ello.

Nombre del entrevistado	Sello y firma
Quispe Ventocilla Sender Vilardo	 SENDER VILARDO QUISPE VENTOCILLA Asistente en Función Fiscal CUARTO DESPACHO 3º Fisc. Prov. Penal Corporativa de Pto. Piedra Distrito Fiscal de Lima Norte

Anexo 2

Guía de entrevista

Título: El interés Superior del Niño y Adolescente con respecto al delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito de Puente Piedra, 2017

Entrevistado: YOVANNA JENNY OBREGÓN SOTO

Cargo/Profesión/Grado Académico: Abogada

Institución:

Lugar: Fecha: 19/10/18 Duración:

Objetivo general

Analizar de qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017

1. ¿Cree usted que la actual regulación del delito de omisión a la asistencia familiar protege el interés Superior del niño y adolescente?

Pienso que el Art. 148° del Código Penal peruano no protege de forma efectiva el interés superior del niño dado que por ser el derecho penal un sistema punitivo, está pensado en castigar a la persona que omite la asistencia familiar más no a dar una solución adecuada a la misma, dado que al privar de su libertad a quién comete el delito, se hace mucho más difícil o imposible que se cumpla con la Resolución Judicial, o retrasando su cumplimiento.

Algunos autores opinan que: "No todo bien jurídico requiere tutela penal", sólo a partir de la concurrencia de suficiente importancia material y de necesidad de protección por el derecho penal, puede un determinado interés social, obtener la calificación de "bien Jurídico Penal". Aduciendo que ésta sería una prisión por deudas, sin embargo esto no es así, dado que la familia debe ser protegido por el orden público, ésta protección está relacionada con los elementos básicos de supervivencia.

2. ¿Cuál es la ley que ampara al interés superior del niño y adolescente para tutelar su derecho en los delitos de la omisión a la asistencia familiar?

Ley N° 27337, que Aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes.

3. ¿A su criterio el Interés Superior del niño prevalece sobre toda norma para resolver los procesos del delito de omisión a la asistencia familiar?

El interés superior del niño debe ser siempre protegido, más aún en caso en que se debe resolver un proceso de omisión a la asistencia familiar, pero como en todo debemos tener en cuenta que se debe realizar la ponderación de derechos en caso de ser necesario.

4. ¿Cuál es la medida de protección más adecuada para tutelar el interés superior del niño y adolescente ante la imposibilidad de afectar el delito de la omisión a la asistencia familiar?

Las medidas de protección son actuaciones o decisiones que se adoptan a favor de una niña, niño o adolescente en situación de riesgo o desprotección familiar, para garantizar o restituir sus derechos y satisfacer sus necesidades.

Las medidas de protección pueden ser de carácter provisional o permanente, esto se va dar en base a su interés superior y el principio de idoneidad, dicha medida debe garantizar que la niña, niño o adolescente viva en una familia o en un entorno familiar adecuado, en caso de omisión a la asistencia familiar debe ser el estado el responsable de cubrir la necesidad de alimentos.

Objetivo específico 1

Determinar cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

5. ¿Explique usted a que se debe que la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código Penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

En el caso que el juez prorrogue la suspensión de la pena, incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en que antes de ejecutar la pena se intenta que el deudor cumpla con el pago de la deuda o la reparación civil.

6. ¿Cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

La forma en que incidiría sería que al cumplir el deudor con el pago de la deuda, el niño o adolescente se vería beneficiado con éste pago.

7. ¿Cuál es la motivación que el Juez decide sobre el interés superior del niño y adolescente en los delitos de omisión a la asistencia familiar?

La motivación del juez para prorrogar la suspensión de la pena es el cumplimiento del pago de la deuda o reparación civil, la cual no se cumpliría en caso se prive de la libertad al condenado.

Por otro lado, la exigencia de pagar la reparación civil, no se trata de preferir el carácter disuasorio de la pena en desmedro de la libertad individual del condenado, sino de dar prioridad a la eficacia del poder punitivo del Estado y los principios que subyacen a dicha eficacia, como son el control y la regulación de las conductas de acuerdo con ciertos valores y bienes jurídicos que se consideran dignos de ser tutelados, más aun si el condenado ha cumplido con cancelar por lo menos 50% adeudado por lo que estaría incurso dentro de la excepción que señala la Sentencia Casatoria N° 131-2014.

8. ¿Cómo define usted el delito de omisión a la asistencia familiar, y cuáles deben ser los requisitos legales?

Desde un punto de vista social es la manifestación de falta de valores de amor, responsabilidad, por parte de la persona que omite la asistencia familiar a sabiendas de la necesidad y responsabilidad que como padre o madre tiene y la constitución lo establece.

Desde el punto de vista del derecho penal, el delito de omisión a la asistencia familiar es un delito permanente, dado que la acción delictiva por sus propias características permite que se pueda prolongar en el tiempo, de modo que sea idénticamente violatorio del derecho, en cada uno de sus momentos, entonces todos los momentos de su duración puede imputarse

como de consumación. Asimismo es un delito de peligro, contra la familia. Los requisitos legales tienen que ser aplicados desde este punto de vista, es decir el solo incumplimiento debe ser castigado.

Objetivo específico 2

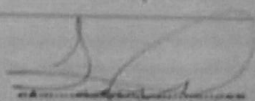
Establecer de qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del Interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

9. ¿Explique a que se debe la frecuencia del delito de omisión a la asistencia familiar influye en el principio del interés superior del niño adolescente?

Este delito forma parte de uno de los problemas estructurales que afronta la sociedad, y este delito seguirá constituyendo un problema social, y de peligro permanente no sólo contra la familia sino también contra la sociedad en general, si como vemos en la práctica la existencia sólo de la norma no permite cumplir a cabalidad el objeto para la cual fue dictada.

10. ¿Cree usted, que los Jueces están dando importancia el interés superior del niño y adolescente en el proceso del delito de omisión a la asistencia familiar?

Pienso que sí, los jueces en la medida de lo posible están aplicando la norma pensando en el interés superior del niño y adolescente.

Nombre del entrevistado	Sello y firma
Yovanna Obregón Soto	 YOVANNA OBRÉGON SOTO ABOGADA - Reg. CAL. N° 65832

Anexo 2

Guía de entrevista

Título: El interés Superior del Niño y Adolescente con respecto al delito de omisión a la asistencia familiar en el distrito de Puente Piedra, 2017

Entrevistado: MARIA AZUCENA ELIAS SANTANA.

Cargo/Profesión/Grado Académico FISCAL PROVINCIAL.

Institución: MINISTERIO PUBLICO.

Lugar: VENTANILLA Fecha 19 DE OCTUBRE DEL 2018 Duración.....

Objetivo general

Analizar de qué manera la actual regulación del delito de Omisión a la Asistencia Familiar protege el Interés Superior del niño y adolescente en el distrito de Puente Piedra, 2017

1. ¿Cree usted que la actual regulación del delito de omisión a la asistencia familiar protege el interés Superior del niño y adolescente?

_Definitivamente Que Si

2. ¿Cuál es la ley que ampara al interés superior del niño y adolescente para tutelar su derecho en los delitos de la omisión a la asistencia familiar?

Ley N° 27337.- aprueba el nuevo código de los niños y adolescentes. Ley n° 27337, ley que protege al niño y adolescente, reconociéndolos como sujetos de derechos, libertades, y una protección especial, cautelando de una manera imperiosa las normas consagradas en ella.

3. ¿A su criterio el Interés Superior del niño prevalece sobre toda norma para resolver los procesos del delito de omisión a la asistencia familiar?

Si, tratándose del desarrollo de una persona indefensa, que se considera como el futuro de nuestro país, entonces si no lo alturamos sobre todas las otras normas, estaríamos

deshumanizando a la sociedad, teniendo en cuenta que la niñez y la juventud son el futuro de nuestro país.

4. ¿Cuál es la medida de protección más adecuada para tutelar el interés superior del niño y adolescente ante la imposibilidad de afectar el delito de la omisión a la asistencia familiar?

Es toda medida Concerniente al Niño Y Al Adolescente que adopte el Estado Y sea Ejecutado Por sus poderes como el Poder Legislativo, Ejecutivo, sus Ministerios, considerando el Principio Del Interés Superior del Niño Y del Adolescente y el respeto a sus derechos.

Objetivo específico 1

Determinar cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.

5. ¿Explique usted a que se debe que la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del Código Penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

Indica que la prórroga por ningún motivo debe superar los tres años, en realidad, los padres irresponsables cuando saben que la pena será efectiva así sea por un año, cambian y deciden pagar, teniendo en cuenta que se trataría de un delito por omisión de alimentos y se trataría de personas que en su mayoría son padres irresponsables.

6. ¿Cómo la prórroga del periodo de suspensión de la pena del inciso 2 del artículo 59 del código penal incide en la valoración del interés superior del niño y adolescente?

Incide, por cuanto no le darían la importancia debida al cumplimiento del pago de los devengados correspondientes.

7. ¿Cuál es la motivación que el Juez decide sobre el interés superior del niño y adolescente en los delitos de omisión a la asistencia familiar?

La pronta necesidad de la alimentación del menor para su supervivencia y su desarrollo personal.

8. ¿Cómo define usted el delito de omisión a la asistencia familiar, y cuáles deben ser los requisitos legales?

Analizado este tema con mayor profundidad, encontramos que la omisión a la asistencia familiar, forma parte de uno de los problemas estructurales que afronta la sociedad, y este delito seguirá constituyendo un problema social, y de peligro permanente no sólo contra la familia sino también contra la sociedad en general, si como vemos en la práctica la existencia sólo de la norma no permite cumplir a cabalidad el objeto para la cual fue dictada, puesto que las normas jurídicas son medios para alcanzar la justicia la paz, y de no ser así deben ser modificadas o derogadas.

Objetivo específico 2

Establecer de qué forma la frecuencia del delito de Omisión a la Asistencia Familiar influye en el Principio del interés superior del niño y adolescente en los Juzgados de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima Norte.


9. ¿Explique a que se debe la frecuencia del delito de omisión a la asistencia familiar influye en el principio del interés superior del niño adolescente?

El abandono económico y requiere de un derecho de alimentos reconocido judicialmente, vale decir, es un reclamo de naturaleza patrimonial, en el Perú, la frecuencia de juicios para solicitar una pensión alimentaria es la más frecuente y al concluir con la sentencia, no cumplen en el pago, pues no le dan la importancia debida, teniendo que hace el respectivo requerimiento de ley y recién pasa al ministerio público para que se denuncie por la omisión a la asistencia familiar que con el nuevo procedimiento se trataría de un proceso inmediato y se le da la rapidez del caso.

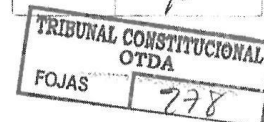
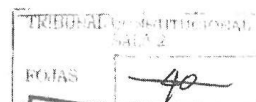
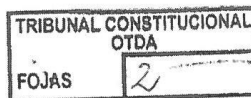
10. ¿Cree usted, que los Jueces están dando importancia el interés superior del niño y adolescente en el proceso del delito de omisión a la asistencia familiar?

Si, teniendo en cuenta las ultimas disposiciones legales que en el presente caso procede la

Incoación del Proceso Inmediato, por lo que se ha hecho de carácter obligatorio

Nombre del entrevistado	Sello y firma
VIARIA ELIAS SANTANA DNI 2549253 1	 ----- MARIA AZUCEN ELIAS SANTANA Fiscal Provincial Penal 2da Fiscalía Provincial Penal Colaborativa De Santa Rosa Primer Desempeño

Anexo N° 05
Instrumentos Documentales



EXP. N.º 04058-2012-PA/TC
HUAURA
SILVIA PATRICIA LÓPEZ FALCÓN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 30 días del mes de abril de 2014, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Silvia Patricia Lopez Falcón contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 311, su fecha 18 de julio de 2012, que declaró infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 4 de mayo de 2011, la recurrente interpone demanda de amparo contra la Juez de Familia de la Provincia de Barranca, doña Patricia Maura De La Cruz, solicitando la nulidad de la resolución N° 11, de fecha 26 de abril de 2011, mediante la cual se confirmó la resolución N° 6, de fecha 18 de febrero de 2011, que declaró la conclusión del proceso y ordenó el archivamiento definitivo de los actuados, en los seguidos contra don Elvis Andy Zúñiga Ríos, en representación de su hija S.M.Z.L., sobre alimentos.

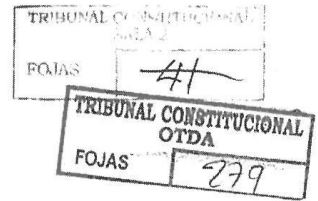
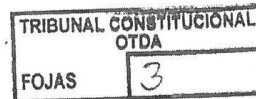
Sostiene la recurrente que en el proceso sobre alimentos se reprogramó fecha para la audiencia única a realizarse el día 18 de febrero de 2011, a las 12:00 horas, pero que por motivos de salud de su hija mayor llegó con dos minutos de retraso, es decir, cuando ya la secretaria cursora había culminado con el llamado a las partes; agrega que en ese momento se apersonó al juzgado, y que la juez le indicó que resolvería con la razón de la secretaria y la justificación pertinente. Refiere que, sin embargo, la juez no ha considerado la justificación presentada, dando por concluido el proceso. Considera que las resoluciones aludidas han transgredido sus derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso.

Con fecha 25 de mayo de 2011, la emplazada doña Patricia Maura De La Cruz Romero contesta la demanda aduciendo que se ha obrado conforme a ley, toda vez que se ha comprobado la inasistencia de las partes a la audiencia programada.

El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la demanda señalando que el amparo contra resoluciones judiciales no puede



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04058-2012-PA/TC
HUAURA
SILVIA PATRICIA LÓPEZ FALCÓN

servir para replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios.

El Primer Juzgado Civil de Barranca de la Corte Superior de Justicia de Huaura, con fecha 29 de diciembre de 2011, declaró fundada la demanda, por considerar que no resulta razonable aplicar al proceso de alimentos, que se rige por el Código de los Niños y Adolescentes, el tercer párrafo del artículo 203º del Código Procesal Civil, referido a la conclusión del proceso por inasistencia de las partes.

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, con fecha 18 de julio de 2012, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por considerar que pese a que no se analizó los medios de prueba a fin de justificar la inasistencia a la audiencia única, tampoco se ha probado en los autos lo dicho por la demandante sobre lo acontecido el día de la audiencia programada, por lo que los jueces han aplicado debidamente la ley pertinente a la situación procesal generada.

Mediante recurso de agravio constitucional de fecha 17 de agosto del 2012, la recurrente reitera los argumentos de su demanda, puntualizando que la jueza demandada no ha tenido en cuenta el pedido de reprogramación de audiencia solicitado, dejando de lado los argumentos sustentatorios de su pedido.

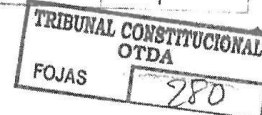
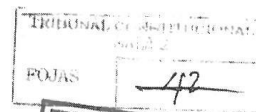
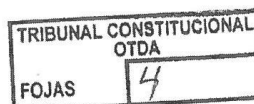
FUNDAMENTOS

Petitorio

1. Conforme se aprecia del petitorio de la demanda, el objeto del presente proceso constitucional es que se declare la nulidad de la resolución N° 6, de fecha 18 de febrero de 2011, que declara la conclusión del proceso y ordena el archivamiento definitivo de los actuados, y su confirmatoria, la resolución N° 11, de fecha 26 de abril de 2011, en los seguidos por la recurrente contra don Elvis Andy Zúñiga Ríos, en representación de su hija S.M.Z.L., sobre alimentos.
2. Expuesta la pretensión en los términos señalados, este Colegiado considera necesario determinar, a la luz de los hechos descritos en la demanda y de los recaudos que obran en ella, si se ha producido la vulneración de los derechos constitucionales invocados por la recurrente al haberse declarado la conclusión del proceso, por la inasistencia de las partes a la audiencia única programada.
3. Al respecto, la recurrente alega que promovió un proceso judicial de alimentos (Exp. N.º 2621-2010) contra don Elvis Andy Zúñiga Ríos, programándose la



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04058-2012-PA/TC

HUAURA

SILVIA PATRICIA LÓPEZ FALCÓN

audiencia única para el día 10 de febrero de 2011, fecha en la cual asistió en compañía de su abogada; sin embargo, no se llevó a cabo dicha diligencia toda vez que la juez se encontraba despachando en otro juzgado por motivos de vacaciones, por lo que reprogramada ésta para el día 18 de febrero de 2011, a horas 12:00, asistió con dos minutos de retraso, es decir, cuando ya se había realizado el llamado a las partes, apresurándose a subir al despacho de la señora juez (junto a la secretaria judicial), manifestándole las razones de su tardanza y solicitando que se tome en cuenta la asistencia de la parte demandada, quien ya se encontraba presente incluso antes del llamado, a fin de no frustrar la audiencia. Indica que mediante escrito presentado en la fecha solicitó la reprogramación de audiencia por los hechos expuestos debido al delicado estado de salud de su hija mayor. Sin embargo su pedido se proveyó con un decreto de "ESTESE A LO RESUELTO" (remitiéndose en ese sentido a la resolución de fecha 18 de febrero de 2011), mediante el cual se da por *concluido el proceso*; es decir, no se ha considerado los argumentos justificatorios de su tardanza a fin de reprogramar dicha audiencia, y no se ha realizado análisis alguno de su pedido, aplicándose en estricto la norma supletoria, decisión que ha sido confirmada por la juez revisora.

El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales

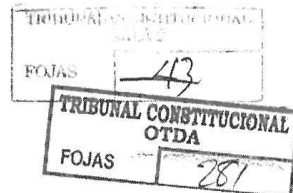
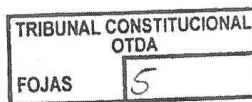
4. Este Colegiado aprecia que la cuestión constitucional que plantea el caso se vincula a la necesidad de que las resoluciones, en general, y las resoluciones judiciales en particular, estén debidamente motivadas, por ser éste un principio básico que informa el ejercicio de la función jurisdiccional, y, al mismo tiempo, un derecho de los justiciables de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente propuestas. Al respecto, en la STC 8125-2005-PHC/TC, fundamento 11, se ha señalado que:

[1]a exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139 de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (...).

5. Cabe, asimismo, puntualizar que en el proceso de amparo el análisis de si una determinada resolución judicial vulnera, o no, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04058-2012-PA/TC

HUAURA

SILVIA PATRICIA LÓPEZ FALCÓN

contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Y esto porque en este tipo de procesos, al Juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis *externo* de la propia resolución a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo en el que el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la apreciación e interpretación del Derecho, ni tampoco en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos del caso [...]"

Sobre la afectación del derecho a la debida motivación

6. Tomando en cuenta los hechos que se describen en la demanda, este Colegiado considera que el debate se centra en el reclamo sobre una presunta afectación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

Argumentos del demandante

7. Sostiene la demandante que como consecuencia de las resoluciones cuestionadas, se ha dispuesto la conclusión del proceso de alimentos iniciado a favor de su hija, aplicándose estrictamente lo prescrito en el Código Procesal Civil referido al apercibimiento de declararse la conclusión del proceso por inasistencia de las partes, sin antes evaluar su pedido de reprogramación de audiencia que contenía la justificación de su tardanza y/o inasistencia, y que fue presentado el mismo día de la frustrada audiencia.

Argumentos del demandado

8. La Juez emplazada aduce que ha basado su fallo revisor en la constatación de la inasistencia de la recurrente a la audiencia única programada, pese a estar debidamente notificada.

Consideraciones del Tribunal

9. En el caso de autos, se cuestiona la decisión de dar por concluido el proceso de alimentos a favor de la menor S.M.Z.L., por la inasistencia de las partes a la audiencia programada con fecha 18 de febrero de 2011, decisión sustentada en el apercibimiento decretado con anterioridad, en aplicación supletoria de lo previsto en el artículo 203º del Código Procesal Civil, para los procesos de alimentos, según el cual:



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
OTDA
FOJAS 6

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
OTDA
FOJAS 44

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
OTDA
FOJAS 82



EXP. N.º 04058-2012-PA/TC
HUAURA
SILVIA PATRICIA LÓPEZ FALCÓN

“La fecha fijada para la audiencia es inaplazable y se realizará en el local del juzgado. A ella deberán concurrir personalmente las partes, los terceros legitimados y el representante del Ministerio Público, en su caso. Las personas jurídicas y los incapaces comparecerán a través de sus representantes legales. Las partes y terceros legitimados pueden concurrir con sus abogados.

Salvo disposición distinta de este Código, sólo si prueba un hecho grave o justificado que impida su presencia, el Juez autorizará a una parte a actuar mediante representante.

Si a la audiencia concurre una de las partes, esta se realizará sólo con ella.

Si no concurren ambas partes, el Juez dará por concluido el proceso”.

10. Al respecto, se debe puntualizar que los procesos de alimentos se tramitan según lo establecido por el Código de los Niños y Adolescentes, mediante el proceso único, en el que está prevista la realización de la audiencia única (tachas excepciones, defensas previas, medios de pruebas, saneamiento procesal, conciliación, y sentencia), estableciéndose en el artículo 170º del código citado que:

“Contestada la demanda o transcurrido el término para su contestación, el Juez fijará una fecha inaplazable para la audiencia. Esta debe realizarse, bajo responsabilidad, dentro de los diez días siguientes de recibida la demanda, con intervención del Fiscal.
En los procesos de violencia familiar no hay audiencia de conciliación”.

11. Asimismo, se debe tener en cuenta que de la lectura del artículo antes citado no se aprecia sanción alguna respecto de la situación sobreviniente por la inasistencia de las partes a la audiencia programada; sin embargo, el artículo 182º del código en mención establece la *regulación supletoria*, al indicar que:

“Todas las cuestiones vinculadas a los procesos en materias de contenido civil en las que intervengan niños y adolescentes, contempladas en el presente Código, se regirán supletoriamente por lo dispuesto en el Código Civil y en el Código Procesal Civil.”

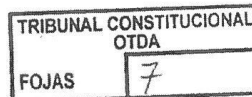
De lo que se desprende que toda aquella situación de vacío que en términos sustantivos y procesales se presente en la tramitación de los procesos contenidos en el Código de los Niños y Adolescentes, debe ser regulada tanto por el Código Civil como por el Código Procesal Civil.

12. La precisión antes hecha no resulta de por sí antojadiza, sino que obedece a las normas jurídicas y principios contenidos en el Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, cuyo artículo VII establece las fuentes que sirven de soporte para dicha herramienta normativa, al señalar que:

“En la interpretación y aplicación del presente Código se tendrá en cuenta los principios y las disposiciones de la Constitución Política del Perú, la Convención sobre los Derechos del Niño y de los demás convenios internacionales ratificados por el Perú. En todo lo relacionado con los niños y adolescentes, las instituciones familiares se rigen por lo



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04058-2012-PA/TC

HUAURA

SILVIA PATRICIA LÓPEZ FALCÓN

dispuesto en el presente Código y el Código Civil en lo que les fuere aplicable" (subrayado agregado).

13. Resulta relevante también mencionar el principio que rige a toda actuación del Estado y los particulares sobre cualquier decisión que relacione a los niños niñas y adolescentes, plasmado en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, referido al **Interés superior del niño y del adolescente**, el cual expresa que:

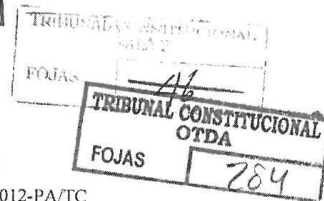
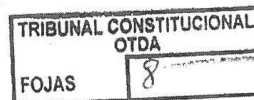
"En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos. Las normas del Código Civil, Código Penal, Código Procesal Civil y Código Procesal Penal se aplicarán cuando corresponda (subrayado nuestro) en forma supletoria al presente Código. Cuando se trate de niños o adolescentes pertenecientes a grupos étnicos o comunidades nativas o indígenas, se observará, además de este Código y la legislación vigente, sus costumbres, siempre y cuando no sean contrarias a las normas de orden público".

La protección del interés superior del niño, niña y adolescente como contenido constitucional

14. En anterior oportunidad el Tribunal Constitucional [STC 02132-2008-PA/TC] ha precisado que el principio constitucional de protección del interés superior del niño, niña y adolescente constituye un contenido constitucional implícito del artículo 4º de la Norma Fundamental, en cuanto establece que "La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, (...)". Tal contenido de fundamentalidad es reconocido a su vez por la "Convención sobre los Derechos del Niño" de 1989, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por el Estado Peruano mediante Resolución Legislativa N.º 25278 del 3 de agosto de 1990, publicada en el diario oficial *El Peruano* el 4 de agosto de 1990. El texto de la mencionada Convención se publicó en Separata Especial el 22 noviembre 1990 y mediante Ley N.º 25302, publicada el 4 de enero de 1991, se declaró de preferente interés nacional la difusión de la "Convención sobre los Derechos del Niño".
15. La mencionada Convención sobre los Derechos del Niño establece, entre otras disposiciones, las siguientes:



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04058-2012-PA/TC

HUAURA

SILVIA PATRICIA LÓPEZ FALCÓN

Artículo 3

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Artículo 27

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.

(...)

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño (...).

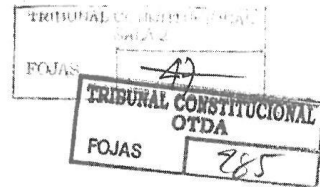
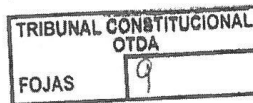
16. Teniendo en cuenta que el artículo 55° de la Constitución establece que "Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional" y que la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución prevé que "Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú", no queda sino convenir en que los contenidos de tal Convención sobre los Derechos del Niño resultan vinculantes en el ordenamiento jurídico peruano, conclusión resultante de la aplicación del control de convencionalidad al que estamos sujetos.

17. Este Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en anteriores oportunidades respecto del contenido constitucional del interés superior del niño, niña y adolescente, y en la exigencia de su atención especial y prioritaria en los procesos judiciales. Así, en la sentencia del Expediente N.º 03744-2007-PHC/TC estableció que:

(...) es necesario precisar que, conforme se desprende la Constitución, en todo proceso judicial en el que se deba verificar la afectación de los derechos fundamentales de niños o menores de edad, los órganos jurisdiccionales debe procurar una atención *especial y prioritaria* en su tramitación. En efecto, como uno de los contenidos constitucionalmente protegidos del artículo 4° de la Constitución que establece que "La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente (...)", se encuentra la preservación del interés superior del niño y del adolescente como una obligación ineludible de la comunidad y principalmente del Estado. Desarrollado tal contenido, el Código de los Niños y Adolescentes ha precisado en el artículo IX que "En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04058-2012-PA/TC

HUAURA

SILVIA PATRICIA LÓPEZ FALCÓN

Adolescente y el respeto a sus derechos" (resaltado agregado).

Tal atención a prestarse por los órganos jurisdiccionales, como se desprende de la propia Norma Fundamental (artículo 4º), debe ser *especial* en la medida en que un niño o un adolescente no se constituye en una parte más en el proceso sino una que posee características singulares y particulares respecto de otras, por lo que más allá del resultado del caso, debe procurarse un escrupuloso tratamiento y respeto de sus derechos durante el proceso. (Resaltado agregado). Asimismo, tal atención deber ser *prioritaria* pues el interés superior del niño y del adolescente tiene precedencia en la actuación estatal respecto de aquellas decisiones judiciales en las que no se encuentran comprometidos sus derechos fundamentales.

18. Ahondando en ello, mediante la sentencia recaída en el Expediente N.º 06165-2005-HC/TC, este Tribunal reconoció que:

(...) La tutela permanente que con esta disposición se reconoce tiene una base justa en lo que se ha señalado como **interés superior del niño y del adolescente**, doctrina que se ha admitido en el ámbito jurídico como parte del bloque de constitucionalidad del mencionado artículo 4º, a través del artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes y, **en el espectro internacional, gracias al principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño y al artículo 3º, inciso 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño** 1[15] (...) (resaltado agregado).

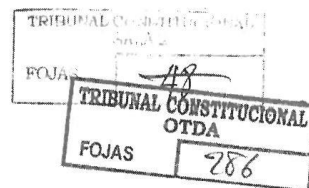
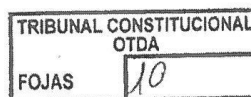
19. De lo antes descrito se tiene que el principio constitucional de protección del interés superior del niño, niña y adolescente presupone que los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente, y en última instancia su dignidad, tienen fuerza normativa superior no sólo en el momento de la producción de normas, sino también en el momento de la interpretación de ellas, constituyéndose por tanto en un principio de ineludible materialización para el Estado, la sociedad en su conjunto y la propia familia, incluidos claro está el padre, la madre o quien sea el responsable de velar por sus derechos fundamentales.

Solución del caso en concreto

20. La demandante sostiene que en los seguidos contra don Elvis Andy Zúñiga Ríos, en representación de su hija S.M.Z.L. sobre alimentos, se ha hecho caso omiso a su pedido de reprogramación de audiencia, pese a haber justificado las razones de su tardanza o inasistencia a la audiencia, emitiéndose la resolución N° 6, de fecha 18 de febrero de 2011, que declara la conclusión del proceso y el archivamiento definitivo de los actuados, decisión posteriormente confirmada mediante resolución N° 11, de fecha 26 de abril de 2011.
21. Al respecto, de autos se observa que la audiencia única programada para el 18 de febrero de 2011, no se llevó a cabo por inasistencia de las partes, tal como lo hace saber la secretaria judicial (fojas 56 del expediente acompañado 02621-2010-0-1301-JO-FC-01); sin embargo, se verifica que la recurrente solicitó la



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



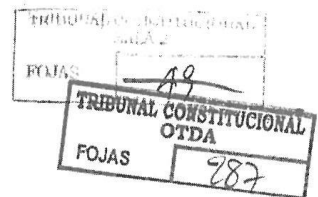
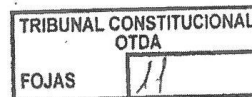
EXP. N.º 04058-2012-PA/TC
HUAURA
SILVIA PATRICIA LÓPEZ FALCÓN

reprogramación de audiencia mediante escrito presentado en la fecha (18 de febrero de 2011), justificando las razones de su tardanza y /o inasistencia, indicando una serie de hechos ocurridos a partir del momento en que llegó al juzgado, alegando incluso haber solicitado ante el despacho de la juez el pedido de realización de la audiencia con la parte demandada, quien se encontraba presente (pero que no había registrado su asistencia). La recurrente expresaba que su llegada tardía se debió a las dificultades de salud que atravesaba su hija mayor S.A.L.F., adjuntando la documentación pertinente para corroborar sus afirmaciones. No obstante, aparece de autos la resolución cuestionada N° 6, de fecha 18 de febrero de 2011, mediante la cual la jueza del proceso, con la constancia de inasistencia, resolvió declarar concluido el proceso aplicando supletoriamente el artículo 203° del Código Procesal Civil, proveyendo a su vez en la misma fecha el pedido de reprogramación con un decreto que disponía "...estese a lo dispuesto mediante resolución seis...". De todo ello se desprende que la jueza a cargo de la causa para la resolución que ponía fin al proceso no tuvo en consideración el escrito presentado oportunamente, aplicando de forma tangencial las normas procesales, sin avizorar las implicancias en la menor alimentista, toda vez que se trataba de derechos alimentarios en donde está en juego la vida y la subsistencia de la persona, más aún tratándose de una infante.

22. Debe resaltarse que si las justificaciones vertidas por la demandante generaban algún tipo de duda en la autoridad judicial que conocía del proceso, bien pudo corroborarse lo afirmado con la exigencia de las instrumentales del caso. La magistrada emplazada, pese a ello, optó por el fácil camino de dar por concluido el proceso, sin tener en cuenta la naturaleza especial del mismo e incluso sin tener en cuenta que la recurrente contaba con una medida cautelar de asignación anticipada de alimentos en forma de retención judicial, en la cual, de acuerdo con el artículo 658° del Código Procesal Civil, la liquidación de las pensiones devengadas y de los intereses computados se realizan a partir del día siguiente de la notificación de la demanda.
23. También se observa que la actividad judicial realizada no ha previsto los mecanismos de protección y adecuación de las actuaciones del Estado en este caso en el ámbito jurisdiccional, a fin de dar pertinente y oportuna protección a la infante parte de dicho proceso, en aplicación del interés superior del niño, siendo de mayor relevancia el que, aun cuando hubieran sido imprecisas las justificaciones presentadas, el solo hecho de accionar un pedido a fin de que no se dé por concluida la causa, evidencia una actitud diligente y protectora de la madre, quien tiene bajo su cuidado la responsabilidad de la vida de su hija; cuanto más si se aprecia que hasta ese entonces no se había dado indicio alguno de inactividad procesal por parte de la madre en sus actuaciones como representante legal.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04058-2012-PA/TC
HUAURA
SILVIA PATRICIA LÓPEZ FALCÓN

24. Cabe recordar que en todo caso también se aprecia la inobservancia, entre otros, del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que establece que:

"El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.

En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias del caso".

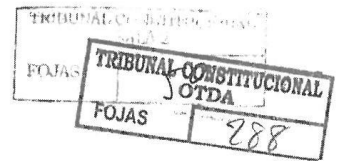
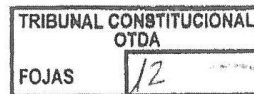
25. En dicho contexto, conviene subrayar que el principio del interés superior del niño, comprende, entre otras cosas, una actuación tuitiva por parte de los operadores jurisdiccionales, a quienes corresponde la adecuación y flexibilización de las normas y la interpretación que de ellas se realice, a fin de lograr la aplicación más favorable con el fin de dar solución a la controversia reclamada, siendo de especial importancia este principio toda vez que se trata niños, niñas y adolescentes, que tienen especial cuidado y prelación de sus intereses frente al Estado.

Irreparabilidad parcial de la demanda de amparo de autos

26. No obstante la descripción detallada de los hechos producidos y pese al hecho de la emisión de que las resoluciones judiciales cuestionadas obedece a una actuación arbitraria e inadecuada de las normas y principios que deberían regir para los casos en donde se involucren intereses de los niños, niñas y adolescentes, este Colegiado aprecia que el declarar la nulidad de las resoluciones cuestionadas trayendo como consecuencia la reposición de las cosas al estado anterior a la violación del derecho invocado, con la consiguiente continuación del proceso de alimentos en el estado en que se encontraba hasta antes del vicio determinado, resulta innecesario. En efecto, se advierte del reporte de expediente visualizado en la fecha en el portal institucional del Poder Judicial, <http://cej.pj.gob.pe/cej/forms/paginar.html?pagina=1> que mediante resolución N° 19, de fecha 8 de julio de 2013, expedida por el Juez del Juzgado de Familia de Barranca, Exp. 00429-2012-0-1301-JP-FC-01, se confirma la resolución del *a quo* que declaró fundada en parte la demanda, ordenado que don Elvis Andy Zúñiga Ríos cumpla con pasar la pensión alimenticia mensual y adelantada de trescientos nuevos soles a favor de su hija S.M.Z.L., resolución que se encuentra en etapa de ejecución.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 04058-2012-PA/TC
HUAURA
SILVIA PATRICIA LÓPEZ FALCÓN

27. Por consiguiente y al margen de que en el presente caso se presente una situación de irreparabilidad, el Tribunal Constitucional estima que, en aplicación del segundo párrafo del propio artículo 1º del Código Procesal Constitucional, y atendiendo a que está acreditada en autos la afectación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, conforme a los fundamentos precedentes, corresponde declarar fundada la demanda, no con el propósito de reponer las cosas al estado anterior a la violación denunciada –lo cual resulta inviable–, sino con el objetivo de evitar que conductas como las que aquí se han analizado puedan repetirse.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar **FUNDADA** la demanda de amparo, al haberse acreditado la vulneración del derecho a la debida motivación.
2. Exhortar a las autoridades jurisdiccionales a que se abstengan de incurrir en el futuro en las acciones lesivas iguales o similares a las descritas en los fundamentos de la presente sentencia.
3. Establecer como Doctrina Jurisprudencial Vinculante, conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, los criterios contenidos en los fundamentos 10, 11, 19 y 25 de la presente sentencia.

Publíquese y notifíquese.

SS.

MESÍA RAMÍREZ
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA

Lo que certifico:

OSCAR ZAPATA ALCÁZAR
SECRETARIO GENERAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RTE SUPERIOR DE JUSTICIA
IA NORTE - Sistema de
ificaciones Electrónicas SINOE
CARLOS IZAGUIRRE N° 176
PENDENCIA,
retario: CASTILLO OBREGON
e (FAU20159981216)
hs: 20/06/2018 12:34:57 Razon:
SOLUCION
ICIAL.D.Judicial: LIMA NORTE
IA NORTE FIRMA DIGITAL

3° JUZGADO DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA - SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE : 06566-2017-34-0901-JR-PE-03
JUEZ : CAJAHUANCA CADILLO GERSIÑO WALTER
ESPECIALISTA : CASTILLO OBREGON JOSE
MINISTERIO PUBLICO : 3 FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE PUENTE PIEDRA,
REPRESENTANTE : MEJIA JACINTO, MARY ELIZABETH
IMPUTADO : ARONE SALCEDO, ZENON
DELITO : OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR
AGRAVIADO : A M, RC
A M, ME

RESOLUCIÓN N° Dos
Independencia, dieciocho de junio
Del dos mil dieciocho.

DADO CUENTA: Al escrito de fecha 13-06--2018, presentado por la representante legal de menor agraviado **MARY ELIZABETH MEJÍA JACINTO**, al principal solicitando se revoque la condicionalidad de la pena al sentenciado por incumplimiento de pago de pensiones devengadas y reparación civil y advirtiéndose de autos que el sentenciado **ZENÓN ARONE SALCEDO**, hasta la fecha no han cumplido con el pago íntegro de la **REPARACION CIVIL y LAS PENSIONES DEVENGADAS** ordenada en la sentencia de fecha dos de mayo del año dos mil dieciocho adeudando hasta la uno cuota vencida; Por lo que, **SE DISPONE:**

1. **REQUERIR POR ULTIMA VEZ** al sentenciado **ZENÓN ARONE SALCEDO** afectos de que cumpla con cancelar el monto íntegro de la Reparación Civil en la pensiones devengadas cuyas cuotas se encuentran vencidas, dentro de los CINCO días de haber sido notificado con la presente resolución, bajo expreso apercibimiento de procederse a aplicar las medidas correctivas que establece el artículo 59° del Código Penal, en caso de incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta. Previo requerimiento del Representante del Ministerio Público.
2. **NOTIFÍQUESE** al Ministerio Público con copia del escrito, a fin que se pronuncie de conformidad con sus atribuciones de ley, teniendo en cuenta el artículo 488° del código procesal penal, en correspondencia con los lineamientos fijadas en la Casación N° 79-2009-Piura, de fecha 17 de setiembre de 2010, mediante la cual reconoce derechos y facultades a las partes en el proceso penal de ejecución, todos ellos están facultado para plantear al juez los requerimiento y observaciones que legalmente corresponda en este ámbito, (*comprende la Sanción, la reparación civil y las consecuencias accesorias impuestas en la sentencia*), el apartado tres del precitado precepto normativo, impone al fiscal una atribución adicional controlar la ejecución de las sanciones penales en general; **control que se materializa instando las medidas de supervisión y control que corresponda, y formulando al juez de Investigación preparatoria los requerimientos que fueren necesarios para la correcta aplicación de la ley.**
3. Notifíquese al sentenciado en su domicilio real y procesal señalado en autos.

PODER JUDICIAL DEL PERU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CEDULA ELECTRONICA
LIMA NORTE
Av. Carlos Izaguirre N° 176 Independen

27/06/2018 12:40:01
Pag 1 de 1
Número de Digitalización
0000260172-2018-ANX-JR-PE



420181333282017065660901137034024

NOTIFICACION N°133328-2018-JR-PE

EXPEDIENTE	06566-2017-34-0901-JR-PE-03	JUZGADO	3° JUZGADO DE LA INVESTIGACION PREPARATOR
JUEZ	CAJAHUANCA CADILLO GERSIÑO WALTER	ESPECIALISTA LEGAL	CASTILLO OBREGON JOSE
IMPUTADO	: ARONE SALCEDO, ZENON		
AGRAVIADO	: A M, ME		
DESTINATARIO	3 FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE PUENTE PIEDRA		

DIRECCION : **Dirección Electrónica - N°31607**

Se adjunta Resolucion DOS de fecha 18/06/2018 a Fjs : 2
ANEXANDO LO SIGUIENTE:
RESOLUCION N°02 DE FECHA 18/06/2018. PRONUNCIESE DE CONFORMIDAD CON SUS ATRIBUCIONES.

27 DE JUNIO DE 2018

PODER JUDICIAL DEL PERU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
LIMA NORTE
Av. Carlos Izaguirre N° 176 Independencia

13/06/2018 12:10:18
Pag. 1 de 1

Cargo de Ingreso de Escrito
(Centro de Distribucion General)
54990-2018

Cod. Digitalizacion: 0000288684-2018-ESC-JR-PE

ediente : 06566-2017-34-0901-JR-PE-03 F.Inicio: 16/05/2018 15:12:20
gado : 3° JUZGADO DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA - SEDE CENTRAL
umento : ESCRITO
ngreso : 13/06/2018 12:10:17 Folios : 1
sentado : TERCERO DEFENSORIA PUBLICA
pecialista : CASTILLO OBREGON JOSE
ntia : .00 N Copias/Acomp :
Jud : 0 SIN DEPOSITO JUDICIAL

ancel : 0 SIN TASAS

nilla :
SOLICITO SE REQUIERA EL PAGO Y SE CORRA TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO
DE LA REVOCATORIA DE PENA

servacion :

RIANA, OSORIO MONTES
ntanilla 1
dulo 1

12.10 pm



Recibido



MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA
Dirección Distrital de Lima Norte.

Expediente: 06566 - 2017

Esp. Legal. : Ramos Loayza Alferez

Sumilla : SOLICITO SE REQUIERA EL PAGO Y SE
CORRA TRASLADO AL MINISTERIO PUBLICO DE LA
SOLICITUD DE REVOCATORIA DE PENA.

SEÑOR JUEZ DEL TERCERO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA
NORTE:

MARY ELIZABETH MEJIA JACINTO, identificada con DNI N° 41302814, con domicilio real, sito en:
Asociación de Vivienda Buen Progreso Mz. C, Lote 4 del Distrito de Puente Piedra (Ref. Entrando por Electra), en
el proceso de Incoación de Proceso Inmediato solicitado por la Fiscalía, por el delito de Omisión a La Asistencia
Familiar en contra de ZENON ARONE SALCEDO, en agravio de RIVALDO LUIS Y RINALDO CIPRIANO ~~AR~~ ONE MEJIA;
a Ud. Con el debido respeto me presento y digo:

Señor Juez, estando a que el presente caso se encuentra en etapa de ejecución, cúmplase con la Sentencia de
Terminación Anticipada de fecha 02.05.2018, la misma que quedo consentida en la misma fecha; sin embargo,
debo hacer de su conocimiento que el sentenciado no está cumpliendo con las reglas de conducta; esto es, no está
cumpliendo entre otras, *iii) con el pago íntegro de la Reparación Civil y de las pensiones alimenticias devengadas
adeudadas en el plazo y modo ordenado en sentencia, esto es S/. 5,308 (sumado pensiones devengadas,
intereses legales y Reparación Civil)*, pago que debe hacerlo en 08 cuotas mensuales de S/.663.50 Nuevos Soles,
siendo que en fecha 02.06.2018 debió haber cancelado, sin embargo hasta la fecha no ha cancelado esta cuota;
siendo así, solicito que se le requiera el pago bajo apercibimiento de Revocarse la Pena Suspendida y hacerse
Efectiva con el Internamiento en un Centro Penitenciario en caso de incumplimiento; por lo que ante tal omisión a
lo dispuesto por la Magistratura, Solicito a su digno despacho CORRA TRASLADO DEL PRESENTE ESCRITO AL
MINISTERIO PUBLICO A FIN DE QUE SOLICITE LA REVOCATORIA DE LA SUSPENSION DE LA PENA a fin de que su
despacho haga efectivo el apercibimiento y Revocando la suspensión de la ejecución de la pena haga efectiva la
misma, toda vez que el presente proceso se rige por las reglas procesales del NCPP, de conformidad lo establecido
en el Art. 488 inciso 3 del Código procesal Penal, en tanto dispone: "...corresponde al Ministerio Público el control
de la Ejecución de las sanciones penales en general, instando las medidas de supervisión y control que
correspondan, y formulando al Juez de la Investigación Preparatoria los requerimientos que fueran necesarios
para la correcta aplicación de la Ley.

POR LO EXPUESTO:

A Usted Señor Juez, solicito a usted se tenga en cuenta lo expuesto y se provea de acuerdo a Ley.

Lima Norte, 12 de Junio del 2018.

5° JUZGADO INV. PREPARAT (EX 6°) - FLAGRANCIA - SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 01315-2018-27-0901-JR-PE-06
JUEZ : CERNA MANYARI ANTHONY CHRISTIAN
ESPECIALISTA : SANCHEZ VARGAS BERTHA YESENIA
MINISTERIO PUBLICO: 3 FISCALIA MIXTA DE PUENTE PIEDRA,
REPRESENTANTE : CERNA PALACIOS, MARIA PEREGRINA
IMPUTADO : NUÑEZ ARCE, OSCAR JOHNNY
DELITO : OMISIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR
AGRAVIADO : N C, JM

RAZÓN

SEÑOR JUEZ:

En cumplimiento de mis funciones informo a usted que se me hizo entrega del presente expediente, a fin de proceder con su ejecución conforme a lo dispuesto mediante sentencia de fecha treinta de mayo del año dos mil dieciocho.-

Lo que informo a usted para los fines pertinentes.

Independencia, 8 de junio de 2018

RESOLUCIÓN N° UNO

Independencia, ocho de junio del año dos mil dieciocho.-

DADO CUENTA: Estando a la razón que antecede: Téngase presente; y, estando a que una vez concluido el proceso penal con sentencia firme, ésta debe ejecutarse con sus propios términos y contenido; en consecuencia se dispone: **INICIAR la ejecución de la sentencia de Terminación Anticipada** de fecha treinta de mayo del año dos mil dieciocho. **REQUIRIÉNDOSE al sentenciado, para que cumpla estrictamente con las reglas de conducta establecidas en dicha sentencia, bajo expreso apercibimiento de aplicarse lo dispuesto en el artículo 65° del Código Penal, en caso de incumplimiento;** previo requerimiento del señor fiscal; teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 488° inciso 3 del Código Procesal Penal, cuando señala que corresponde al Ministerio Público el control de la ejecución de sentencias que imponen sanciones penales. *Interviniendo la especialista judicial que da cuenta. Suscribiendo la especialista de causa de conformidad con el Art. 24 del Reglamento del Nuevo Despacho Penal Corporativo aprobado por Resolución Administrativa N° 014-2017-CE-PJ.* Notifíquese a todas las partes; y, al sentenciado, en sus domicilios real y procesal.-

PODER JUDICIAL DEL PERU
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA CEDULA ELECTRONICA
LIMA NORTE
Av. Carlos Izaguirre N° 176 Independen

15/06/2018 10:08:09
Pag 1 de 1
Número de Digitalización
0000246260-2018-ANX-JR-PE



420181251282018013150901137027056

NOTIFICACION N° 125128-2018-JR-PE

EXPEDIENTE	01315-2018-27-0901-JR-PE-06	JUZGADO	5° JUZGADO INV. PREPARAT (EX 6°) - FLAGRANCIA
JUEZ	CERNA MANYARI ANTHONY CHRISTIAN	ESPECIALISTA LEGAL	SANCHEZ VARGAS BERTHA YESENIA

IMPUTADO	: NUÑEZ ARCE, OSCAR JOHNNY
AGRAVIADO	: N C, JM

DESTINATARIO	3 FISCALIA MIXTA DE PUENTE PIEDRA
--------------	-----------------------------------

DIRECCION : **Dirección Electrónica - N° 31607**

Se adjunta Resolucion UNO de fecha 08/06/2018 a Fjs : 1
ANEXANDO LO SIGUIENTE:
RESOLUCION N° 01 DE FECHA 08/06/2018. INICIO DE EJECUCION.

15 DE JUNIO DE 2018